

8500



EL MURALLON

DE LA ZURRIOLA



IMPRESA DE J. BAROJA É HIJO
Plaza de la Constitución, 1 y 2
1897

0-1569



H- 12112
R- 37239

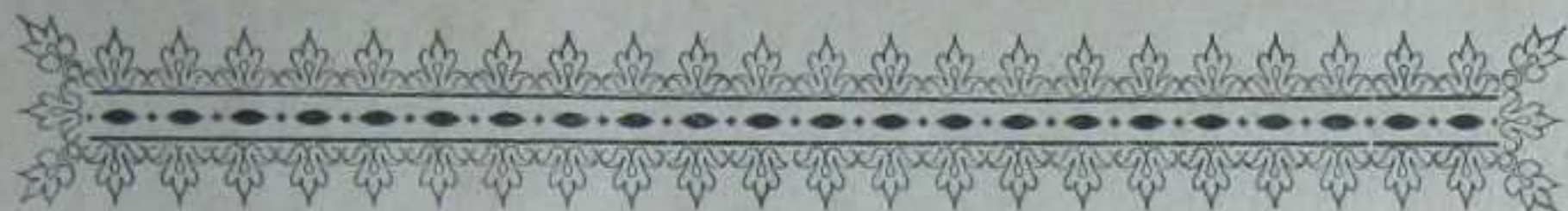
ATV
9.155

EL MURALLON DE LA ZURRIOLA



SAN SEBASTIAN
IMPRESA DE J. BAROJA É HIJO

1 y 2, Plaza de la Constitución, 1 y 2
1897



ILUSTRAR la opinión pública, evitar que se extravíe, facilitar el conocimiento de uno de los asuntos municipales de mayor gravedad é importancia, por la cuantía de los encontrados intereses que en él se ventilan, presentados en estos tiempos, fueron los fines que motivaron el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad al adoptar, en sesión del día 30 de Marzo del presente año, el pensamiento de publicar un folleto en que se coleccionaran y resumieran los más fundamentales datos de hecho y consideraciones de derecho que contienen los complicados expedientes del Ensanche Oriental de esta Ciudad.

A cumplir tan justificado y oportuno acuerdo tiende, pues, el presente trabajo, en el que importa advertir desde luego, que las fuentes en que se ha inspirado son oficiales, auténticas, emanadas de los expedientes que obran en el Archivo municipal y en las dependencias del Estado, donde pueden comprobarse por todos aquellos que deseen estudiar el asunto por si mismos.

La reproducción literal de los más importantes documentos, los fundamentos jurídicos que se alegan y están calcados en los acuerdos de la Excma. Corporación municipal y superiores centros administrativos, todo tiende á despojar á esta labor del carácter subjetivo que pudieran darle los autores de ella. Por el contrario, puede afirmarse que el presente folleto, no es, en cierto modo, obra del Ayuntamiento actual, sino de todos los Ayuntamientos que le han precedido desde el año 1871 en que se planteó el asunto, hasta la fecha. Todos ellos, con unanimidad, ver-

daderamente plausible, han entendido en la misma forma la defensa de los intereses del pueblo de San Sebastián, oponiéndose á la realización de proyectos peligrosos y funestos, rechazando responsabilidades que no son suyas, rehuyendo cargas onerosísimas que no les competen, defendiendo siempre la causa del bien general, contra las especulaciones de empresas particulares, contra las dolorosas consecuencias de torpezas y errores ajenos, contra los amargos frutos de una temeridad que no supo precaverse de la fuerza irresistible de leyes naturales que no es dado quebrantar impunemente, contra las contrariedades y fracasos, en fin, de una Administración complicada, cuyas resoluciones han lesionado intereses del vecindario que no pueden dejarse indefensos.

Ojalá la resolución definitiva que se espera, ponga término á este largo y enojoso asunto, declarando categóricamente, contra quien corresponda, las responsabilidades que el Municipio justamente rechaza. Que los Ayuntamientos que sucedan al presente sigan conformando sus actos con las que pudieran llamarse tradiciones municipales, con la conducta constante de los Ayuntamientos anteriores; que esta conducta continúe mereciendo la aprobación y el beneplácito del vecindario de San Sebastián, á quien su representación legal dedica, como todos los suyos, el presente trabajo.





CONCESIÓN DE LAS OBRAS



Habían transcurrido muy pocos años desde la memorable fecha del derribo de las murallas que circundaban á nuestra ciudad, contrariando legítimos sentimientos de expansión y engrandecimiento, cuya realización ha superado todas las esperanzas, y apenas comenzaba á disfrutar San Sebastián de los beneficios alcanzados á virtud de la R. O. del Ministerio de Marina, fecha 20 de Febrero de 1864 concediendo al Ayuntamiento los terrenos que ganase al mar desde el puente de Santa Catalina hasta el baluarte de Amézqueta y la R. O. del Ministerio de Fomento de 2 de Agosto del mismo año ratificando la cesión de los terrenos del arenal de la Zurriola para ensanche de la población, cuando la iniciativa privada, pretendiendo dar un paso más en la prudente obra llevada á cabo por la Corporación municipal, intentó avanzar mar adentro, al amparo de las construcciones solidísimas del Ayuntamiento, uniendo á ella las suyas, empalmando con el nuevo, el proyectado muro de defensa, para ganar más extensos terrenos y enclavar en ellos un nuevo barrio cuyas elevadas casas habían de cerrar el bellísimo paseo de la Zurriola, abierto antes al mar á costa de tantos sacrificios, desmereciendo también los edificios públicos emplazados con arreglo á las pres-

cripciones de la policía y de la higiene que, internados hoy, carecen, en gran parte, de las excelentes condiciones que en otro tiempo concurrían en ellos.

Era, pues, natural, que el Ayuntamiento de aquella época (1) se opusiera resuelta y categóricamente á la realización de un plan que iba á arrebatarle inapreciables mejoras, á tanta costa alcanzadas, y así fué que en sesión celebrada el día 28 de Junio de 1871, aprobó por unanimidad el dictámen que se unió al expediente y que en él figura para perpetuar la protesta de la representación legal de este pueblo, contra un proyecto cuyas dolorosas consecuencias estamos presenciando hoy con más claridad que entonces, porque hoy vemos que no sólo se han realizado los temores que se abrigaban en aquella época, sino que, á mayor abundamiento, la experiencia ha demostrado que las obras fueron inestables, que una y otra vez las ha derribado el mar, y que se ciernen sobre nuestras cabezas dos peligros gravísimos: el que amenaza las vidas y haciendas de una parte de nuestros convecinos, y el que ha de pesar sobre quienes tengan que atender á los gastos, en todo caso enormes, de reparación y conservación de unos trabajos, que no se sabe cuando van á ser definitivos, ni quien vá á obtener, en su día, el triunfo en esta triple lucha entre el hombre y la naturaleza, el interés privado y el interés público, el favoritismo y el derecho.

Se trascribe, pues, como primer documento de los que han de figurar en este folleto, el brillante dictamen á que se acaba de aludir y cuyo texto es como sigue:

(1) Estaba constituida la Corporación municipal en aquella época, como también en la del segundo dictamen, (17 de Abril de 1873) de que se tratará á seguida, en la forma siguiente:

Alcalde Primero.	D. Ramón Fernández.
Id. Segundo.	» Fermín Machimbarrena.
Id. Tercero.	» Fermín Lascurain.
Id. Cuarto.	» Gregorio Manterola.

REGIDORES	D. Miguel Martín Oteiza.
	» Manuel Maximino Aguirre.
	» José Antonio Arzuaga.
	» Cirilo Latierro.
	» Gregorio Gordón.
	» Francisco Aguirre Miramón.
	» Juan Miguel Iribas.
	» Joaquín Aristeguieta.

REGIDORES	D. Francisco Reyno.
	» Antonio Navarro.
	» Joaquín Elósegui.
	» Juan Alday.
	» Vicente Zapirain.
	» Francisco Atorrasagasti.
	» Juan Cruz Salsamendi.
	» José Machimbarrena.

*Dictamen
del Ayunta-
miento, de
28 de Junio
de 1871.*

«El Ayuntamiento de esta Ciudad ha estudiado con la debida atención, el proyecto que D. Ramón Berasátegui, sometió á la aprobación del Excelentísimo Sr. Ministro de Fomento, y cuyo objeto es ganar terrenos al mar en la orilla izquierda del Urumea; lo que se propone conseguir por medio de un muro que apoyándose en el extremo Occidental, del nuevo puente, sigue una linea quebrada, separándose considerablemente del actual murallón y termina en la parte inferior de la batería de San Telmo del Castillo de la Mota. De los terrenos así ganados se propone destinar una parte á la edificación que, según se desprende de la Memoria que acompaña al proyecto, es toda la superficie que quedaría al N. O. de la línea B. C y el resto hasta el extremo del puente de Santa Catalina lo explotaría como pesquera ó criadero de moluscos, lo que no exigiría más que un muro de poca elevación, proponiéndose el autor darle solo la suficiente para que no se escape la cría.

Esta Corporación que mira con el mayor interés, todo cuanto tienda al embellecimiento de la Ciudad, experimentarí la mayor satisfacción al apoyar con todas sus fuerzas un proyecto de esta naturaleza, siempre que con su realización no se lastimaran los intereses públicos que representa ó los de los particulares creados al amparo de la ley. Pero en el caso particular de que se trata, reconociendo el Ayuntamiento, como reconoce, que uno de los objetos que se propone el autor del proyecto, es el embellecimiento de la población ¿se conseguiría esto sin menoscabar profundamente los intereses municipales? seguramente que nó, como vamos á demostrar en este informe y he ahí la razón por la que el Ayuntamiento se propone manifestar su resuelta y decidida oposición á la realización de este proyecto en todo ó en parte. En el plano de ensanche de esta Ciudad aprobado por el Gobierno de S. M. el año 1864, previa la tramitación que ordenaban las leyes, se proyectaba, entre otras muchas obras de importancia, la construcción del actual mu-

rallón de la Zurriola, con el objeto de ganar al mar una superficie considerable de terrenos que se destinaban en parte á solares de edificación y calles y el resto á un paseo que se extiende á lo largo del murallón desde el extremo occidental del puente de Santa Catalina hasta la población antigua. El proyecto de este muro era considerado por muchos como un pensamiento atrevido y de difícil ejecución, y aunque se llevó á efecto felizmente y sin tropiezos, este Ayuntamiento invirtió un considerable capital en su construcción y en terraplenes, consiguiendo dotar al pueblo de un magnífico paseo cuyo mayor mérito consiste en que desde todos sus puntos se extiende la vista por la inmensidad del Occéano hasta perderse en el horizonte. El proyecto del Sr. Berasátegui viene á arrebatár á este paseo su mayor encanto; porque edificando, como se propone hacerlo, en la superficie de terreno que comprende las letras B, C, D, E, es indudable que una gran parte de él perdería su magnífica vista, que no podría ser reemplazada sin notable desventaja por la de los edificios que se proyectan en los terrenos ganados al mar, por suntuosos que fueran los que se construyeran. Por otra parte las obras que proyecta el Sr. Berasátegui serían imposibles ó por lo menos de muy difícil realización, si el Ayuntamiento venciendo con éxito cuantas dificultades se presentan en trabajos de esta naturaleza, no hubiera llevado á efecto las obras del murallón y terraplenes de la Zurriola, que sirven indudablemente de base al proyecto de que se trata. Esta sola consideración basta para justificar plenamente la decidida oposición del Ayuntamiento, pues no sería razonable conceder á un particular el derecho de apoyarse en obras ejecutadas por la Corporación en beneficio de sus administrados, para realizar un proyecto que en último término, lastimaría profundamente los intereses públicos.—Bien es verdad que el Sr. Berasátegui en su contestación á los propietarios que se crean perjudicados con su proyecto, indica que si este Ayuntamiento pusiera

obstáculos á la edificación en el terreno B, C, D, E, frente al paseo de la Alameda, renunciaría á esta idea retirando la zona edificable á la linea D E ¿se conseguiría con esto que el paseo de Santa Catalina conservara en toda su integridad su preciosa vista? Seguramente que no, aunque es preciso reconocer que se evitaría el mal en gran parte.

Pero la realización del pensamiento del Sr. Berasátegui perjudica los intereses municipales en otros muchos conceptos. El Ayuntamiento acaba de construir un magnífico edificio para mercado que le costará más de 30.000 duros, sin contar el valor de los terrenos que ocupa, que es muy grande. Los edificios destinados á ese objeto exigen mucha ventilación, y por eso se hacen generalmente abiertos por todos lados, y aún para evitar grandes macizos de sillería ó mampostería, se construyen hoy de hierro, y en esta Ciudad se hubiera hecho ciertamente otro tanto, si se hubiere destinado otro sitio, para emplazamiento. Pero atendiendo á su situación, á orillas del mar, en un punto en que, la renovación de aire es en extremo rápida, especialmente en ciertas estaciones del año, un edificio de las condiciones expresadas hubiera sido de todo punto inhabitable por esceso de ventilación principalmente en invierno; y por esta razón ha habido que hacer un edificio completamente cerrado, de mucha altura, y en la que la renovación de aire se efectúa por grandes huecos practicados en las fachadas y cuya base se halla á una altura de cinco metros del nivel del suelo. Ahora bien; este edificio que en su emplazamiento actual tiene magníficas condiciones higiénicas y excelentes circunstancias para ser habitable, así en invierno como en verano, quedaría entre calles y ahogado por consecuencia de la realización del proyecto del Sr. Berasátegui, y es muy posible que no pudiera servir para el objeto á que se destina por falta de ventilación. ¿Quién indemnizaría en ese caso al Ayuntamiento del terrible perjuicio que con eso se le irrogaría? Pero aún hay más; detrás del Mercado y á ori-

llas del mar tiene el Ayuntamiento otro edificio público destinado á Carnicerías y Pescadería. En este edificio se halla el Matadero y junto á aquella hay dos anexos destinados á limpieza de pescado, tripas de corderos, etc., servicios que, como todo el mundo sabe, exigen mucha ventilación. Pues con la ejecución de las obras que proyecta el Sr. Berasátegui, todo esto quedaría entre calles, perdiendo su ventilación y su desagüe natural al mar, lo que obligaría al Ayuntamiento en un corto término á trasladar todos esos servicios á otro punto y aún suponiendo que esto pudiera hacerse en buenas condiciones, lo que es muy problemático, ¿cuánto dinero tendría que invertir la Corporación para realizar estas reformas que serían urgentísimas é imprescindibles? ¿Y sería posible atender enseguida á tan perentorias necesidades cuando todos los recursos del Ayuntamiento apenas bastan para subvenir á los inmensos gastos que ocasionan las importantes obras en construcción y en proyecto? Ciertamente que no.—Y no se crea por lo que va expuesto que el Ayuntamiento considera imposible el ensanche de la Ciudad por la parte de la Zurriola y la apertura de un paseo alrededor del Castillo, no; lejos de eso esta Corporación cree que algún día se realizará ese pensamiento, y habrá medios hábiles para conciliar todos los intereses; pero hoy, lo considera un sueño. Finalmente vamos á decir dos palabras relativamente á la pesquera proyectada por el Sr. Berasátegui. La piscicultura es, sin duda un ramo muy importante de la industria moderna. Los Gobiernos y las Corporaciones de las naciones más civilizadas, le están prestando su protección. También este Ayuntamiento vería con gusto y no escatimaría su protección, al que presentara un proyecto serio y bien meditado sobre el establecimiento de uno ó varios parques para el fomento, la cría y la explotación de peces y moluscos que se quieren obtener, los medios que se proponen para conseguirlo, y la manera de resolver los múltiples casos é inconvenientes

que los parques ofrecen aun en los puntos donde este ramo lleva muchos años de estudio y explotación pero esta Corporación no puede menos de oponerse á que se conceda un privilegio exclusivo como el que se solicita. Cree el Ayuntamiento que bastan las razones expuestas para que quede plenamente justificada su oposición y terminará por consiguiente este informe suplicando al Excmo. Sr. Ministro de Fomento que no conceda al Sr. Berasátegui la autorización que solicita.—San Sebastián 28 de Junio de 1871.»

El modesto plan de ensanche solicitado por el Sr. Berasátegui, fué ampliado á seguida por el mismo peticionario, bajo la dirección técnica del Ingeniero Sr. Lagasca, que presentó otro proyecto de mas extensa urbanización en la margen izquierda, comprendiendo también la de la derecha del río Urumea. Este proyecto, que fué el que prevaleció en la Orden de concesión, y por mas ámplio no menos perjudicial á los intereses del pueblo, se remitió á informe de la Corporación municipal, quien dictaminó en 17 de Abril de 1873.

El nuevo plan comprendía dos partes y respecto de la de la margen izquierda se acompañaban dos proyectos: uno que dejaba subsistentes las viejas casas adosadas á la antigua muralla y cerraba la calle de Oquendo, y otro que prolongando esta calle, ofrecía mejores condiciones de urbanización. Ambos proyectos, adolecían, sin embargo, de un mismo capitalísimo defecto, inherente al ensanche de la población por dicha margen; el de lesionar importantísimos intereses públicos, creados por la iniciativa del Municipio, mediante la inversión de cuantiosos capitales. Por eso el Ayuntamiento, al informar acerca de ellos, insistió una vez más en manifestar los perjuicios que al pueblo habían de seguirse del otorgamiento, por parte del Estado, de la concesión solicitada y cualquiera que fuere la forma en que esta se llevara á efecto, puesto que todas ellas adolecían de idéntico vicio de origen. De aquí que, en previsión de que el Gobierno pudiera, con todo, otorgar la concesión y obligarle á soportarla, si bien se inclinó por uno de los aludidos proyectos, el desarro-

llado en la hoja número 4 (1) de las que se acompañaban, considerándolo como menos malo, y relativamente mas aceptable por las condiciones generales de urbanización que en él se proponían, que el de la hoja número 2, pero tuvo buen cuidado de mantener sus anteriores protestas, consignando nuevamente que el bellísimo paseo de la Zurriola iba á perder todos sus encantos, que los sacrificios del pueblo al construirlo, ganando terrenos al mar y levantando formidables muros, iban á trocarse en beneficio exclusivo de una empresa particular que, apoyándose en obras municipales, pretendía realizar otras que le pusieran en posesión de terrenos con que había de lucrarse en provecho propio; que, á mayor abundamiento, la solidísima construcción del mercado de la Brecha, levantado á orillas del mar, quedaba ya sin objeto, perdiéndose en consecuencia el capital representado por la diferencia del menor coste de un mercado de hierro, que hubiera bastado, á no emplazarse el edificio en un sitio expuesto á los embates de las olas; que este centro, y sobre todo, la lonja de pescado, las carnicerías, pescadería y matadero, perderían en condiciones de ventilación, y, en breve tiempo, el Ayuntamiento se vería en la precisión de trasladar estos servicios á otro punto, con no pequeño quebranto de sus intereses, como así ha sucedido, en efecto, cumpliéndose en gran parte aquellos tristes vaticinios; y que todo esto no podía tolerarse, sino precediendo la correspondiente indemnización al erario municipal por tantos y tan graves perjuicios irrogados al pueblo. ¡Qué se dirá hoy al pensar que el Municipio de San Sebastián, no sólo vió desatendidas sus justas reclamaciones, no fué indemnizado como lo exigían los más elementales principios de justicia, y en cambio se pretende que acepte, para imponérsela al pueblo, la responsabilidad inmensa de atender á la reparación y conservación de unas obras, artificiosamente levantadas, sirviendo de base un ensanche municipal sin el que no hubieran sido posibles, lastimando además otros respetabilísimos intereses públicos!

No fué menos categórica la oposición del Ayuntamiento de San Sebastián al proyecto de ensanche sobre la margen derecha del Urumea, manifestando que no obedecía á necesidad alguna de la población, que iba á perjudicar notablemente el ensanche

(1) Es de advertir que esta hoja fué posteriormente modificada, sin intervención del Ayuntamiento.

de Amara practicado por el mismo Ayuntamiento, que destruiría las naturales condiciones de belleza del barrio de Gros hácia el mar, que produciría variaciones en la barra, cuyas consecuencias no se podían prever, y que, sobre todos estos inconvenientes, tenía el de no reunir las ventajas, siquiera accidentales, que en orden á la urbanización en sí misma y á la posibilidad de dar acceso al Castillo en su día, concurrían en el proyecto del otro lado, con ser en principio inaceptable también y exigir, en el caso de una aprobación superior, condiciones, limitaciones é indemnizaciones importantes.

Se reproduce, pues, á continuación, el dictamen de oposición fecha 17 de Abril de 1873, á que se viene haciendo referencia aceptando textualmente el informe del Arquitecto municipal D. José Goicoa, que decía así:

*Dictamen
del Ayunta-
miento, de
17 de Abril
de 1873*

«El objeto del proyecto que vamos á examinar, firmado por el Ingeniero Sr. Lagasca, es el aprovechamiento de las playas que quedan descubiertas en la baja mar á una y otra márgen del cauce del río Urumea y en su desembocadura.—Comprende el proyecto dos partes principales correspondientes á cada una de las márgenes.

Nos ocuparemos primeramente del aprovechamiento de terrenos en la márgen izquierda.—Deber es de la Corporación municipal apoyar todo proyecto que tienda al embellecimiento de la población, y estudiarlo en todas sus partes. Dos soluciones presenta el peticionario para aprovechamiento de terrenos de la márgen izquierda.—La primera representada en la hoja número 2 de los planos, es de tan mal efecto, que en vez de embellecer la población por este lado la afea, pues quedan subsistentes las casas adosadas á la muralla que tanto contrastan con las elegantes construcciones del ensanche, y habían aún de chocar más construídas que fueran las manzanas proyectadas.—Además, la calle de Oquendo ha de ser, y lo es ya, la vía de circulación natural de toda la población anti

gua, con el ferro-carril y terminaría en una rinconada de malísimo efecto aceptada aquella disposición. Cuando el Ayuntamiento procedió á la construcción del Mercado varió su emplazamiento primitivo para poner una de sus fachadas en la alineación de la calle de Oquendo, viéndose obligado por esta circunstancia á variar los planos del edificio para sujetarlo á esa línea. Al levantarse posteriormente «La lonja de pescado», se ha emplazado también con sujeción á la alineación dicha. Se vé pues, que la prolongación de la calle de Oquendo, ha originado ya al municipio gastos de consideración, y se lastimarían sus intereses si esa hermosa calle viniera á terminar en un rincón, cuando está llamada á ser la que dé ingreso al ansiado paseo del Castillo. No puede, pues, esta solución, que tantos intereses lastima sin realizar ninguna mejora, aceptarse por el Ayuntamiento.—El autor de la memoria que examinamos lo comprende así, cuando deseando armonizar el interés del empresario con el del público, propone en la hoja número 4 una distribución sobre la que no hay nada que objetar como pensamiento general de urbanización. Pero dice el autor del proyecto que, resultándole de este modo menor área de edificación, se le debe abonar, aunque no indica la forma en que la indemnización deba hacerse, y el Ayuntamiento no puede menos de llamar la atención sobre este punto.—Considerable fué el capital invertido en la construcción del muro de la Zurriola y terraplenes y sobre él se han de apoyar las obras proyectadas.—Ciertamente que en esta ciudad se hubiera hecho un mercado de hierro á ser otro su emplazamiento, pero ha habido que hacer un edificio cerrado con macizos de sillería y de gran coste, por consiguiente, atendida su situación á orillas del mar. Construídas las manzanas del ensanche oriental, queda el mercado en una calle y sin objeto gran parte de los gastos hechos.—«La lonja del pescado», las carnicerías, pescadería y matadero, son edificios que hoy, á orilla del mar, se hallan en buenas condiciones de

ventilación, que desaparecen al encerrarlos entre calles, como sucedería realizado el proyecto de que nos ocupamos. Esto obligaría al Ayuntamiento, más en una población de las condiciones de San Sebastián, á trasladar en un corto término, todos estos servicios á otro punto, á costa de grandes sacrificios, por ser el traslado urgentísimo é imprescindible.—Para la apertura de las calles transversales tendría el Ayuntamiento que hacer indemnizaciones por razón de utilidad pública, que habrían de ser sumamente costosas.—En vista de las consideraciones expuestas, creemos haber demostrado *que se lastiman muchos de los intereses públicos que la Corporación representa* y que ésta (en todo caso) y no el peticionario, es quien debe pedir indemnización.—El ensanche oriental dando al Ayuntamiento medios para proceder á la expropiación de toda esa vieja urbanización, y con sujeción al plano de la hoja número 4 pudiera ser beneficioso para los intereses de la población.—El murallón de la Zurriola, rectificado con sujeción á dicho plano, da al paseo más anchura allá donde más la necesita en la confluencia de éste y el del boulevard; es cierto, pero nos parece insuficiente la de veinte metros que fijan los planos de dicha confluencia hasta el castillo. Las hermosas vistas de ese paseo, la gran circulación de carruajes que en él debemos suponer, y, consiguientemente una gran concurrencia, hacen indispensable dar á dicho paseo, cuando menos, treinta metros de anchura en toda su extensión.—En las manzanas proyectadas no se indica si han de llevar ó no patios generales, y no podemos pasar sin hacer esta observación importante bajo el punto de vista de la higiene y salubridad públicas. En esta, como en otras cuestiones que pudieran suscitarse, creemos que deben sujetarse las edificaciones que se hicieren en estos terrenos á las ordenanzas aquí vigentes para edificación de casas.—Vamos á examinar la segunda parte del proyecto.

El aprovechamiento de terrenos que se propone

en la orilla derecha, no tiene para la población ninguno de los caracteres que al que hemos examinado distingue. Hemos visto que podría mejorar con la solución de la hoja número 4, la urbanización de la parte vieja de la población, y prolongada la calle de Oquendo, quedaba esta vía sirviendo de unión á ambas poblaciones y procuraba un ingreso al castillo. En la orilla derecha se estudia una población sobre cuya distribución de calles y manzanas, y proporciones de unas y otras, nada diremos. Pero este proyecto no obedece á una necesidad de terrenos de edificación, en esa parte sobre todo. Prodigioso es el desarrollo de la construcción en San Sebastián, pero el ensanche propuesto por el Ayuntamiento en las marismas del Urumea, ha de dar terrenos más que sobrados para satisfacer durante muchísimos años todas las necesidades. La afluencia siempre creciente de forasteros atraídos por la belleza del país, es la causa del crecimiento de la población, y ¿quién duda de que nuestra playa de baños es la que más forasteros atrae? Sus inmediaciones son las que más atractivo tienen para el viajero, y diariamente se vé con cuanto mayor afán se ven ocupadas las casas que en ellas se construyen. —La población proyectada en la margen derecha, se halla á gran distancia de la playa de baños. En los arenales en que se trata de construir, no es posible tomarlos, pues no tienen condiciones para ello. Expuesta á los huracanados vientos del N. y NO. no es posible en ella la vegetación. No puede ser una población de verano. La que el Ayuntamiento proyecta en las marismas de la ría, tiene por el contrario todas las ventajas apetecibles. Resguardada de los vientos, más inmediata á la playa, son inmejorables sus condiciones de habitabilidad en todas las estaciones del año. Su orientación es tal, que en sus paseos se ha de conseguir una vegetación más lozana que en ningún otro punto de los alrededores de San Sebastián.

En la margen derecha del proyecto del Sr. Lagasca, es tal la fuerza de la tempestades y de los embates

del mar, que en invierno había de ser imposible habitarse.—Mirada bajo el punto de vista del embellecimiento de la población, cuestión que en San Sebastián es de una importancia capital, es también completamente inaceptable.—El paseo de la Zurriola, de que antes hemos hablado, y su prolongación propuesta en las tantas veces citadas hoja núm. 4, perdería su encanto. Ya hemos indicado que el Ayuntamiento invirtió un considerable capital en la construcción de ese paseo, consiguiendo dotar al pueblo de una magnífica avenida en que desde todos sus puntos se extiende la vista por la inmensidad del Océano hasta perderse en el horizonte. Construida la población de la margen derecha, por lo mucho que avanza, por lo estrecha que es la ría y por determinadas condiciones de localidad, desaparecerían todos los encantos de aquel delicioso panorama, limitando su horizonte á estrechísimos límites, convirtiendo el paseo, en fin, en una calle ancha.—De propósito no hemos hecho observación ninguna del régimen de la ría y la influencia que sobre él han de tener los muros proyectados, sobre todo el de la margen derecha por su dirección.—Indudable es que han de producir grandes variaciones en la barra, y no examinaremos si serán ó no convenientes, pues debiendo informar este expediente, tanto el departamento de Fomento como el de Marina, á quienes especialmente incumbe esta cuestión, lo harán con mayor conocimiento de causa.—De la pasarela de hierro, consecuencia de los proyectos de que nos hemos ocupado y de su bien estudiada memoria, nada podemos decir. Es un trabajo que honra al señor Lagasca tan competente en esta materia. En vista de lo expuesto, creemos que el Ayuntamiento debe manifestar al Sr. Ministro que, en su concepto, no conviene se otorgue la concesión de la orilla derecha del río Urumea por las malas condiciones que dicha población tendría y demás consideraciones expuestas; y respecto del aprovechamiento de la margen izquierda, aceptar la solución de la hoja núm. 4, *poniendo á sal-*

ro los intereses municipales con las limitaciones y condiciones para el concesionario que se desprenden de este dictamen, más las que se creyeren convenientes por los perjuicios irrogados del traslado de la matadería &. &., y un previo acuerdo sobre anchura de calles.»

A pesar de la reiterada oposición del Ayuntamiento de San Sebastián en los dos dictámenes que quedan reproducidos y que claramente manifiestan su criterio desfavorable á la concesión que se solicitaba, haciendo ver los patentes perjuicios que por ella habían de seguirse á la Ciudad en uno y otro lado del río, perjuicios propios é inherentes al plan en si mismo considerado é independientemente de las accidentales ventajas que alguno de los proyectos pudiera tener, sin que estas pudieran servir, ni remotamente, á compensar aquellos perjuicios, como lo demostró el mismo Ayuntamiento; el gobierno de la República aprobó el plan y otorgó la concesión, dictando una Orden en 31 de Octubre de 1873 que por su contenido y sus omisiones se presta á reflexiones tristísimas que la realidad de los hechos expone hoy con sobrada elocuencia.

El documento á que se alude y cuya importancia no es necesario encarecer porque él era el llamado á establecer en este asunto la situación jurídica del Estado y del concesionario, las condiciones técnicas de las obras, su buena terminación y conservación y las debidas garantías de prudencia en defensa de los intereses públicos y privados á que tan de cerca afectaba el proyecto, literalmente transcrito, dice así:

*Orden de
concesión
de 31 de Oc-
tubre de
1873.*

«Illtmo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Ramón Berasátegui en solicitud de autorización para ejecutar obras de ensanche de la Ciudad de San Sebastián, ganando terrenos en la orilla izquierda del Urumea y en parte de la costa contigua:

Visto el expediente promovido posteriormente con igual objeto por D. Juan Bouquet:

Visto el segundo proyecto presentado por D. Ra-

món Berasátegui en concepto de modificación y ampliación del primer pensamiento, cuyo proyecto constituye un encauzamiento de la última sección de la ría, ganando terrenos en una y otra orilla, que se dedican en parte á construcciones, y en parte á ensanche y mejora del actual paseo de Santa Catalina:

Vistos los informes de las Corporaciones y Autoridades que la ley prescribe:

Visto el resultado de la comparación entre los proyectos reformados de ambos peticionarios:

Vista una exposición del primero solicitando que en caso de otorgarle la concesión se haga á favor de D. Ramón Berasátegui y Compañía:

El Gobierno de la República, de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección general, de conformidad en lo esencial con el dictamen de la Junta Consultiva de caminos, ha tenido á bien conceder á dichos don Ramón Berasátegui y Compañía autorización para ejecutar por su cuenta y sin subvención alguna del Estado las obras de encauzamiento del Urumea y ensanche de la Ciudad de San Sebastián, comprendidas en el proyecto que han presentado, con sujeción á los planos del mismo y á las condiciones siguientes:

1.ª Los muros destinados á sostener el terraplen que se proyecta en la extensión de terrenos que se pretende ganar al mar, se sujetarán en su traza y perfiles al proyecto presentado por los concesionarios. Pero en la parte curva contigua á la costa, el de la margen izquierda de la ría y el de la derecha, en cuanto confronta con el mar en la línea paralela á la que forma la marea baja, deberán tener en su coronación un espesor de dos metros, construyéndose de mampostería con mezcla hidráulica toda la parte comprendida entre la superficie de paramento y otra inclinada á 45 grados en el sentido de aquella, que pase por la arista interior de la coronación, y el resto, hasta completar el espesor del muro en su parte interior, de piedra en seco. Al pretil que ha de correr sobre los indicados muros se le dará en las partes que se acaban

de mencionar una altura de un metro 50 centímetros con un metro de espesor en la base.

2.^a La distribución de los terrenos de la margen izquierda se sujetará, en cuanto á las edificaciones, á lo consignado en la hoja 4.^a de los planos del proyecto presentado. Con arreglo á dichos planos se cede al Ayuntamiento de San Sebastián la parte de los terrenos ganados á la ría, comprendida entre el Puente de Santa Catalina y la línea trazada en prolongación de la fachada Sur ó principal del Mercado nuevo; entendiéndose que esta cesión se hace con el exclusivo objeto de que sirva para regularizar y dar mayor anchura al paseo denominado de la Zurriola ó de Santa Catalina. Los concesionarios quedan en libertad para pactar con el Ayuntamiento cualquiera permuta ó compensación que pueda convenirles mutuamente, y no se oponga á lo establecido en las presentes condiciones. Los terrenos ganados en la margen derecha se distribuirán conforme á lo propuesto en el proyecto, en cuyos planos se hallan marcados y acotados, así el ancho de las vías ó calles que se han de dejar, como las dimensiones de las manzanas de edificación.

3.^a En las edificaciones de una y otra margen se sujetarán los concesionarios á lo que prescriben las reglas de policía urbana vigentes en la localidad al tiempo de hacerse esta concesión.

4.^a Quedan obligados los concesionarios á construir de su cuenta en la margen izquierda las alcantarillas que sean necesarias para la prolongación á través de los terrenos que ganen, de las que actualmente vierten á la ría, así como las que sean precisas para dar salida á las aguas sucias del Cuartel de San Telmo, que hoy vierten al mar; y será de su cargo la conservación durante un año, pasado el cual las entregarán al Ayuntamiento.

5.^a En caso de llevarse á cabo la construcción de la pasarela de hierro proyectada para la comunicación directa entre una y otra margen, se modificará su proyecto en la forma necesaria para que la viga

no se halle sujeta al embate de las olas elevándola al efecto lo suficiente.

El proyecto modificado no podrá ejecutarse sin previa autorización de la Superioridad.

6.^a Se dará principio á las obras dentro del plazo de 12 meses de publicada esta autorización en la *Gaceta*. Se ejecutarán primero las obras proyectadas para ganar los terrenos de la margen izquierda que deberán estar concluidas á los cuatro años de la fecha antes citada.

Un año después de la terminación de las obras de la márgen izquierda, se dará principio á las obras de la derecha, debiéndose construir dentro de los tres primeros años el muro de encauzamiento de la ría; y 300 metros del que corre paralelamente á la línea de la marea; concediéndose el plazo de dos años para la construcción de cada uno de los tramos de 300 metros subsiguientes de la prolongación de este muro hasta su terminación en la costa. Entre cada dos de estos períodos será obligatorio proteger con escollera el extremo del muro y las tierras del terraplen por el costado E en que quedan interrumpidas.

7.^a Las obras se ejecutarán bajo la vigilancia del Ingeniero Jefe de la provincia, quien antes de su principio practicará el deslinde de la parte de dominio público que se cede en lo que puede confinar con otras propiedades, dejando las señales necesarias sobre el terreno y levantando acta de esta operación. Los gastos que ocasionen estas operaciones y los de reconocimiento y recepción de las obras serán de cuenta de los concesionarios.

8.^a Los terrenos ganados al mar en la márgen izquierda de la ría, con las obras que se ejecuten, serán de propiedad de los concesionarios, luego que hayan construido el muro de esta margen, las alcantarillas y la parte del terraplen en lo que confronta con el paseo de Santa Catalina hasta la línea de la fachada principal del Mercado nuevo. En la margen derecha adquirirán la propiedad de las zonas corres-

pondientes á las obras de defensa que ejecuten en cada uno de los períodos señalados en el párrafo tercero de la condición 6.^a á medida que se termine la construcción de dichas obras. Llegado este caso, se practicará su reconocimiento por el Ingeniero Jefe de la provincia ó sus delegados, para comprobar si se han cumplido las condiciones de la concesión, dándose por recibidas en caso afirmativo.

9.^a Siempre que los concesionarios crean conveniente introducir modificaciones en el proyecto presentado las someterán á la aprobación de la Superioridad.

10.^a En el término de un mes, contado desde la publicación de esta autorización en la Gaceta, deberán los concesionarios consignar en la Caja de Depósitos la cantidad de 10.000 pesetas como garantía del cumplimiento de estas condiciones. Se les devolverá dicho depósito cuando acrediten haber ejecutado obras suficientes á cubrir su importe, y en su reemplazo se considerará especialmente hipotecada la obra hecha.

11.^a Durante la ejecución de las obras no podrá ser transferida la concesión sin autorización del Gobierno.

12.^a La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores producirá la caducidad de la concesión.

13.^a Si se declarase caducada la concesión, se procederá conforme á lo establecido para este caso en las concesiones análogas.

14.^a Durante la construcción de las obras, los concesionarios nombrarán un representante para recibir las comunicaciones del Gobierno ó de sus Delegados, el cual deberá residir en San Sebastián. Si se faltase á esta disposición, ó dicho representante se hallare ausente, será válida toda notificación hecha á los interesados, con tal que se deposite en la Secretaría del Gobierno de la provincia.

15.^a Esta concesión se entiende hecha sin perjuicio de tercero y dejando á salvo todos los intereses particulares.

Lo que de orden del Gobierno de la República comunico á V. I. para su cumplimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Octubre de 1873.—Gil Berges.

Sr. Director general de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio. »

De la precedente Orden de concesión resulta: 1.º Que no es el Ayuntamiento de San Sebastián el concesionario de las obras del Ensanche Oriental. 2.º Que el concesionario es una empresa particular á quien se conceden las obras sin limitación de tiempo, esto es, *á perpetuidad* y se le autoriza para enajenar terrenos con cuya venta solo ella ha de lucrarse. 3.º Que por la condición segunda se obliga al concesionario á ceder al Ayuntamiento *gratuitamente* los terrenos comprendidos entre el puente de Santa Catalina y la línea trazada en prolongación de la fachada Sur ó principal del Mercado. 4.º El objeto único y exclusivo de esta cesión es el de que sirva «para regularizar y dar mayor anchura al paseo de la Zurriola ó de Santa Catalina». 5.º La única obligación que aparece impuesta al Ayuntamiento en la repetida concesión y en su cláusula cuarta es la de hacerse cargo de las alcantarillas que deban construir los concesionarios, y aún esto, después de transcurrido un año, durante el cual, su conservación había de ser de cargo de aquellos. 6.º Al solo efecto de la cláusula segunda, ó sea, para regularizar y dar mayor anchura al paseo de la Zurriola, tomó posesión el Alcalde de esta ciudad únicamente de los terrenos comprendidos en la sección dicha, del puente de Santa Catalina á la prolongación de la calle del Pozo. 7.º En la concesión de que se trata, se padeció la grave omisión de no proveer expresamente acerca de quién había de conservar las obras construidas. 8.º Sin embargo, en la cláusula 15.ª de la misma, se declaró haberse hecho la concesión «*sin perjuicio de tercero.*»

La sola enumeración de estos antecedentes basta para que desde el momento, cualquier persona de regular sentido jurídico comprenda que el Ayuntamiento de San Sebastián, no está obligado, *á virtud de la concesión*, á conservar y reparar obras otorgadas *á perpetuidad*, no al Ayuntamiento, sino á una empresa

particular. La simple lectura de la Orden de concesión demuestra que *en principio*, no es al Ayuntamiento, ó por mejor decir, no es al pueblo de San Sebastián, cuyos intereses aquél administra, á quien incumbe la responsabilidad de atender á la reparación y conservación de unas obras, en todo tiempo y para siempre otorgadas, al concesionario y no al pueblo, á quien, si alguna propiedad se cede es comunal, no patrimonial, *gratuita*, no onerosa, y sin perjuicio alguno suyo, «*sin perjuicio de tercero,*» dice la concesión.

Sin embargo, se aduce en contrario una opinión que importa rebatir y de cuya impugnación aparece con mayor claridad evidenciada la doctrina expuesta. Se pretende, en efecto, fundar la supuesta obligación del pueblo en este sentido, en que habiéndose omitido en la concesión la declaración expresa de quién había de conservar y reparar dichas obras, hay que aplicar los principios generales de derecho que regulan la comunidad de bienes, distribuyendo las cargas en proporción á los beneficios. Contra esta doctrina se oponen las siguientes consideraciones:

Primera: Sobre los principios que se invocan está el más fundamental aún de que los actos jurídicos, convenciones y contratos solo obligan, sujetan y se extienden, á las personas que han sido parte en ellos, exclusivamente á estas y no á otra alguna. Por lo mismo, las omisiones é imprevisiones en que se incurra en dichos actos ó contratos, no pueden alcanzar á otras entidades que á dichas partes contratantes, siendo de su cuenta y riesgo los beneficios ó perjuicios que de los mismos puedan originarse ó deducirse. En consecuencia, al Ayuntamiento no puede exigírsele responsabilidad alguna por razón de una deficiencia ú omisión en una concesión otorgada por el Estado á una empresa particular, y en que, de consiguiente, fueron parte el Estado y dicha empresa, pero no el Ayuntamiento.

Segunda: No cabe aplicar el criterio de la proporcionalidad en las cargas, en razón á la de los beneficios, porque esta regla se refiere más bien á la entidad ó cuantía de la responsabilidad, partiendo del supuesto de que en principio existe, contra lo que se acaba de demostrar. Además, puede asegurarse sin exageración alguna—y así lo ha entendido constantemente el Ayuntamiento—que el Ensanche oriental no es beneficioso sino altamente perjudicial á la población; de aquí que se opusiera á

la concesión de las obras del mismo, lo que no hubiera hecho de haber entendido que se trataba de un proyecto útil y conveniente para San Sebastián, cuyo legítimo y natural ensanche de Amara, propio del pueblo, genuinamente municipal, ha venido, sobre todo, á sufrir las sensibles consecuencias de la edificación en los movedizos terrenos ganados al mar en la Zurriola. Ni se diga que sino ventajas directas, ha reportado otras indirectamente al Municipio, tales como la mayor recaudación de arbitrios, los beneficios de la ley de ensanche y los ingresos por licencias de edificación; porque, en cuanto á los consumos, no habiéndose aumentado la población de San Sebastián por razón del nuevo barrio, los habitantes de él hubieran tributado en la misma proporción viviendo en otra parte de la ciudad, cuyos intereses podían haber sido beneficiados notablemente si la edificación se hubiera extendido en Amara, en vez de estacionarse. En cuanto á las licencias para construcciones y beneficios de la ley de ensanche, han sido tan escasos, tan insignificantes, que no guardan proporción, ni remota siquiera, no ya con lo que el pueblo tendrá que contribuir para la reparación y sostenimiento del muro de contención, pero ni tan solo con las cuantiosas sumas que el Ayuntamiento ha invertido ya con ocasión de ese ensanche y aún en sus mismas calles y servicios de urbanización. Baste decir que los beneficios de la ley de ensanche no otorgados hasta el día 14 de Noviembre de 1895, y aun entonces sin los recargos ordinarios y menos el recargo extraordinario que la ley autoriza, no se han hecho efectivos, respecto del Ensanche Oriental, sino desde el presente año de 1897, en que se han paralizado allí las construcciones; (1) y que tanto estos beneficios como los derechos por licencias de edificación, hubiéralos disfrutado el Municipio en otros barrios de la población y especialmente en el ensanche de Amara, cuyo desarrollo tanto ha sufrido á consecuencia del Oriental. Conviene observar también que cuando se invocan los beneficios generales del Ensanche Oriental, se olvida que se habla en sentido hipotético, que se trata de un supuesto que no se ha realizado todavía, ni se sabe cuándo podrá realizarse. ¿Cómo es posible que se disfruten los beneficios de unas

(1) En la legislación general predomina el criterio de que los ensanches de las poblaciones no deben llevarse á efecto á costa de la parte antigua de las mismas, como lo demuestran los preceptos que establecen la necesidad de formar presupuestos especiales, destinándolos á cada una de las zonas del ensanche y llevando la cuenta de ingresos y gastos separadamente de la general del Ayuntamiento.

obras que de hecho no están terminadas, ni se sabe cuando podrán estarlo? Dentro de diez, veinte ó más años, tal vez, pueda discutirse sobre los beneficios que á la población haya traído el ensanche, pero por ahora, solo se habla y no es posible que se hable más que de peligros, temores, responsabilidades, gastos, todo, menos beneficios. Y esta ha sido la situación normal de esas obras desde el primer día; realizado un plan, el mar lo deshacía al punto; modificada la línea, levantados los tajamares, consolidadas las construcciones, las olas lo han destrozado todo, y hoy que han robado sus tierras al paseo y no se sabe cuando podrán recuperarse, están las cosas en el mismo ó mayor estado de inseguridad y de incertidumbre que antes. Pero, aun suponiendo que sin esperar al día de mañana pudiera hoy hablarse de beneficios que no existen ni pueden concederse, no cabe sostener que á título de ventajas, ficticias ó reales, presentes ó futuras se imponga al pueblo una carga completamente desproporcionada á esas supuestas ventajas, como había de serlo forzosamente la que correspondiera á la conservación y reparación de un muro, que de hecho no está definitivamente terminado, que por el contrario habrá que levantarlo nuevamente, variando tal vez su emplazamiento y dirección, que no se sabe cuando ni en qué forma podrán darse por terminados los proyectos definitivos, porque hasta ahora todos los planes han resultado fallidos, y solo se sabe que en todo caso han de imponer un gravámen onerosísimo, insoportable, que nadie quiere aceptar por su misma magnitud, y que, por lo mismo, se quiere que cargue con él la Corporación municipal, ó, por mejor decir, todos los vecinos de esta ciudad, el pueblo de San Sebastián, cuyos intereses son los que administra aquella Corporación y cuya causa es la que defiende, como la han defendido todos los Ayuntamientos que se han sucedido desde 1871 hasta la fecha presente; y como debe defenderla con más razón que aquellos, porque cada día se va viendo más claro á donde tienden ciertos caminos y que es lo que se busca con determinadas actitudes. Los Ayuntamientos que no vieron más que una orden de concesión que no imponía al pueblo la carga de que se trata y que no pudieron pensar siquiera que tras de aquella autorización se ocultara una responsabilidad que noblemente no se declaraba y que no cabía creer se impusiera por engaño, se opusieron, aunque por otros motivos, á la concesión.

¿Cómo no va á ser de oposición también la actitud que el Ayuntamiento actual observe, viendo con tanta claridad los peligros que amenazan al pueblo?

Tercera: Antes al contrario, si bien la orden de concesión no determina expresamente cuál haya de ser la entidad que atienda á la conservación y reparación de las obras, pero los términos en que se consignan las únicas obligaciones que al Ayuntamiento se imponen, excluyen la responsabilidad cuestionada. En efecto; si al Ayuntamiento se le ceden por la cláusula segunda, los terrenos ganados en la margen izquierda de la ría y el mar, entre el puente de Santa Catalina y la línea trazada en la prolongación de la fachada Sur ó principal del Mercado de la Brecha, esta cesión es *gratuita* y al solo y *exclusivo* objeto de que sirva para regularizar y dar mayor anchura al paseo de la Zurriola ó de Santa Catalina. Es así que si el Ayuntamiento estuviera obligado á atender á la conservación de la totalidad del muro de contención, la cesión no hubiera sido gratuita sino onerosa, pues si bien se cedían los terrenos de balde, importaba la conservación de las obras tanto ó más que los terrenos cedidos, lo cual hubiera estado en pugna con la letra y con el espíritu de la concesión, que, por añadidura, asignaba á la cesión, un objeto determinado, único y exclusivo, que no era la conservación y reparación de las obras, sino la regularización y mayor anchura del paseo, luego la conservación dicha no viene impuesta, sino que está excluida en la concesión de que se trata. Si pues el Ayuntamiento ha atendido y está dispuesto á atender á la conservación y reparación de la parte del muro que defiende el paseo de la Zurriola de los embates del mar, conteniendo las tierras del mismo, obra en esto *voluntariamente* y por espíritu de concordia, no porque á ello esté obligado á virtud de la concesión, que mucho menos podría imponerle esa supuesta obligación en el resto del muro, ó sea en el que contiene al paseo de Salamanca, del cual el Ayuntamiento *no se ha hecho cargo todavía*, según confesión explícita de las Sociedades «Inmobiliaria» y «J. Arana y Compañía,» en su escritura de compra-venta de 29 de Abril de 1893, de que más adelante se hará mención.

Otra cesión expresa figura en la concesión: la de las alcantarillas, exigida por la necesidad de no dejar interrumpidas y sin salida al mar las antiguas de la Ciudad en esa parte; pero

aún esto era después de imponer al concesionario la obligación de prestar un año de garantía respecto de la conservación de las mismas. Ahora bien; adoptando el Estado tan prudente medida de precaución en este particular de secundaria importancia ¿cuáles no hubieran sido las precauciones que hubiera tomado respecto de la totalidad del muro, si hubiera entrado en su mente la idea de que el Ayuntamiento respondiera de su conservación en todo ó en parte? ¿Cuántos años de garantía hubiera exigido al concesionario antes de imponer al pueblo una carga mucho más gravosa, incomparablemente mayor que la de la conservación de las alcantarillas? Si pues tan parco y solícito estuvo tratándose de lo menos, es indudable que al no proveer cosa alguna sobre lo más, demostró con esto que no estuvo en su ánimo gravar al Municipio con carga tan pesada, con una responsabilidad que había de trocar la cesión de gratuita en onerosa y grandemente lesiva á los intereses generales del vecindario. No se encontraba, pues, en la Orden del Gobierno de la República, ninguna segunda intención respecto del extremo que se debate, ni es posible que Gobierno ni Tribunal alguno la declaren.

Por último; si algún valor tiene la declaración expresa, consignada en la concesión de que esta se otorgaba *sin perjuicio de tercero*, síguese que el Ayuntamiento, tercero en este caso, no puede estar obligado á atender á la conservación de unas obras (de hecho no terminadas) con perjuicio innegable, con ruina y quebranto incalculables, de los intereses del pueblo.

Para terminar esta materia, y á fin de demostrar que el criterio que se sustenta no es nuevo, se reproduce á continuación el brillante informe del Oficial letrado de la Corporación municipal, fecha 14 de Agosto de 1883, adoptado por acuerdo en sesión del día 22 del mismo mes y año (1) que, en cuanto hace relación á la cuestión que se debate, dice así:

(1) En este tiempo estaba constituida la Corporación municipal en esta forma:

Alcalde	Presidente.	{	D. Gil Larrauri.
1.º	Teniente.	{	> Alfredo Laffitte.
2.º	Id.	{	> Miguel Altube.
3.º	Id.	{	> José Marqueze.
4.º	Id.	{	> Juan Iribas.
5.º	Id.	{	> Tomás Bermingham.

*Dictamen
del Oficial
Letrado de
14 de Agosto
de 1888.*

«El deber en que se supone está el Ayuntamiento de atender á la conservación y reparación del muro de la Zurriola, habría de nacer de una de dos cosas; ó de una obligación estipulada y contraída como consecuencia de un contrato; ó de un precepto legal terminante que imponga al Ayuntamiento el referido deber. Es decir; por su voluntad, ó por el imperio ó mandato de la ley. Bajo el primer punto de vista es axiomático en derecho, que la causa ó principio de toda obligación es la voluntad de obligarse, de cualquiera manera que esta se manifieste; precisándose por lo tanto, para que la obligación nazca, como requisito esencialísimo, aparte de otros que ahora no es necesario apuntar, una relación jurídica que resulte de voluntades concertadas, bien expresa, bien tácitamente. Además si bien la ley única, título 16 del Ordenamiento de Alcalá, proscribiendo el formalismo que á nuestro derecho aportó la influencia romana, proclamó el principio de la libertad de contratación, consignando que «de cualquiera manera que aparezca que el hombre quiso obligarse quede obligado», negando así toda la importancia á los requisitos externos ó de forma, tal precepto no es aplicable á los Ayuntamientos ni ningún otro organismo administrativo que han de observar rigurosamente las formas ó solemnidades externas prescriptas para cada caso en las disposiciones legales bajo pena de nulidad para la eficacia de sus convenciones.

Así, para que en el caso actual se pudiera conside-

SINDICO.—D. Victoriano Iraola.

REGIDORES.

- D. Juan Vidaur.
- » Fidel Múgica.
- » Manuel Urcola.
- » Marcelo Garat.
- » Mauricio Rodríguez.
- » Ramón Marticorena. (Falleció el 21 de Agosto de 1888).
- » José Becheverría.
- » Juan José Mendiluce.
- » Lorenzo Goyenechea.
- » Raimundo Sarriegui.
- » Manuel Alday.
- » Manuel Tornero.

rar obligado al Ayuntamiento, sería preciso que en primer lugar hubiera manifestado clara y terminantemente su voluntad de obligarse y además que lo hubiera hecho en la forma y con los requisitos que fueran del caso, según la ley.

Pues bien, la simple lectura de la concesión, persuade de que el Ayuntamiento ni ha manifestado nunca voluntad de obligarse, ni ha contratado con el concesionario, ni por tanto ha podido contraer responsabilidad alguna, siendo inútil, por tanto, analizar si en cuanto á la forma se observaron ó no los requisitos legales. Las partes contratantes han sido el Estado y el concesionario; hasta tal punto, que ni aun en lo que se refiere al ensanche del paseo de Santa Catalina, podrá decirse con fundamento que el Ayuntamiento haya estipulado con la empresa, habiéndose limitado á aceptar la donación hecha á su favor de los terrenos destinados por la concesión para la ampliación de dicho paseo; donación impuesta por el Estado como una de las condiciones *sine qua non* de la concesión, y no producto ó consecuencia de pacto alguno, ni tácito ni expreso, entre el Ayuntamiento y el concesionario.

Por lo demás, ni en el expediente, ni en la ejecución de la obra aparece que el Ayuntamiento haya tenido ninguna participación ni intervención como parte contratante. El proyecto fué sometido al gobierno; por éste fué aprobado, él mismo otorgó la concesión, imponiendo las condiciones que estimó procedentes; y por último, el replanteo, vigilancia y recepción, han estado constantemente á cargo del representante del Estado, el Ingeniero Jefe de la Provincia.

Podría argüirse que la obligación por parte del Ayuntamiento nace de un cuasi-contrato, por haberse manifestado tácitamente la voluntad de obligarse. Pero aparte de lo difícilmente que un Ayuntamiento pueda obligarse por un cuasi-contrato, en virtud de la consideración antes apuntada relativa á la necesidad, ritualidades ó solemnidades determinadas para la vali-

dez de sus convenciones, no hay tampoco lugar á tal conjetura, desde el momento en que no sólo no ha realizado acto alguno del que pudiera deducirse su voluntad presunta, sino que por el contrario, en cuantas ocasiones le ha sido posible ha revelado claramente su firme voluntad de no aceptar responsabilidad alguna y buena prueba de ello la protesta formulada por el celoso Sr. Alcalde que fué llamado á tomar posesión en nombre del Ayuntamiento de los terrenos destinados á ampliar el paseo de Santa Catalina en el acto mismo de la toma de posesión y la que implica el acuerdo de V. E. ordenando la inmediata suspensión del adoquinado de la calle de Salamanca.

Resulta pues evidente que por su voluntad ningún compromiso ha contraído el Ayuntamiento. Ahora bien, ¿es que la ley le impone el en cuestión?

Precisamente la legislación que rige en la materia, especialmente en el período de 1866 á 1876, es de lo más laberíntico é intrincado que existe en Administración, por efecto sin duda de las convulsiones políticas de la época, reconociéndose además, no tan sólo por los tratadistas más notables, sino por los gobiernos mismos, la diferencia de la legislación en parte tan interesante y la inmensa dificultad por lo tanto que implica para su justa y exacta aplicación. No obstante esta complicación y deficiencia puede asegurarse que no existe, ni racionalmente puede existir, disposición alguna que obligue á los municipios á la construcción, conservación ó reparación de los muros de cerramiento, de defensa, ó de otra clase, de la propiedad particular y privada. Los propietarios, y no las individualidades ó entidades ajenas á esta propiedad, son natural y lógicamente los obligados ó llamados á hacerlo; y en el caso presente, si una empresa, debidamente autorizada, ha ganado terrenos al mar mediante la ejecución de ciertas obras, si la concesión á perpetuidad de la propiedad de dichos terrenos se la otorgó el Estado como consecuencia de esas obras sin las cuales no puede concebirse la existencia de los

terrenos, no cabe dudar, que á la empresa solo incumbe sufragar cuantos gastos sean necesarios para la permanencia y conservación de su propiedad, sin que haya fórmula ni ley alguna que establezca y sancione la arbitrariedad é injusticia que resultaría, si autorizase que mientras una personalidad jurídica determinada, goce de los beneficios ó utilidades de la obra ó propiedad, sean otras, contra su voluntad, y sin razón ni fundamento alegable, las obligadas á satisfacer los gastos necesarios para la permanencia ó subsistencia de esta propiedad y de sus beneficios ó utilidades.

Ni en la ley de Aguas de 3 de Agosto de 1866 ni en el decreto ley de 14 de Noviembre de 1868 ni en la de 20 de Agosto de 1873. disposiciones por las que se rige la concesión, se encuentra precepto alguno del que deducirse pueda la obligación del Ayuntamiento de atender á los gastos de conservación del muro. Por el contrario, existe el precedente de que los artículos 93, 94 y 95 de la ley del 66, se la imponían á los propietarios que hubieran de ser beneficiados por dichas obras en proporción á la parte de propiedad que cada uno representase, precepto que derogado después por decreto de 14 de Noviembre de 1868 existe consignado en la vigente ley de 13 de Junio de 1879.

Por lo demás no puede dudarse que los terrenos en cuestión son de la propiedad particular de los concesionarios. La condición 8.ª de la concesión que dice «Los terrenos ganados al mar en la margen izquierda de la ría, con las obras que se ejecuten serán de la propiedad de los concesionarios, luego que hayan construído el muro etc. «así lo establece en armonía con lo dispuesto en el art. 5.º de la ley de 1866 que á su vez consigna que los terrenos ganados al mar por consecuencia de obras construídas por el Estado ó por las provincias, pueblos ó particulares competentemente autorizados,» *serán de propiedad* de quien hubiere construído las obras, á no haberse establecido otra cosa en la autorización.» Resulta que esta propiedad se

gana principalmente como consecuencia de las obras que se construyan según determina explícitamente el mencionado art. 5.º; y no se concibe la propiedad de los terrenos sin que vaya aneja la propiedad de las obras ejecutadas, é inútil es manifestar que si esos terrenos y esas obras pertenecen exclusivamente á la empresa, de cuenta de esta han de ser precisamente, por fuerza, cuantos gastos ocasione su conservación. Por eso conviene también consignar que el Ayuntamiento debe ser muy cauto en hacerse cargo voluntariamente de la vía pública en ese lugar, puesto que al hacerse cargo de ella voluntariamente se haría copropietario con la empresa y pudiera exigirle entonces la obligación de contribuir en proporción á su propiedad á las reparaciones del muro.

Para terminar; si de que cuanto queda manifestado, no puede deducirse obligación alguna para el Municipio, menos cabe deducirla de las cláusulas de la concesión ley de contrato hecha sin perjuicio de tercero.

En la cláusula 4.ª impónese al Ayuntamiento la obligación *única* de conservar por su cuenta las alcantarillas desde cierto tiempo y si el ánimo del gobierno hubiera sido, contra toda justicia, imponerle también la de la conservación del muro, de la misma manera se hubiera consignado clara y explícitamente.

En la 7.ª se encarga la vigilancia, recepción y replanteo de las obras al Ingeniero Jefe del Estado sin participación alguna del Ayuntamiento, lo cual sería altamente injusto si de esas obras pudiera nacer para él, cualquiera responsabilidad.

De la 8.ª quedan indicadas las consecuencias que se desprenden.

En la 9.ª no se concede intervención alguna al Ayuntamiento en las modificaciones que puedan introducirse en el proyecto y por fin en la 15 se consigna que la autorización se entiende hecha sin perjuicio de tercero y perjuicio gravísimo resultaría para el

tercero Ayuntamiento, si por ella se le impusiera obligación tan onerosa como sería la de atender á las reparaciones del muro.

De cuanto queda expuesto resulta que la empresa concesionaria es la única obligada á la conservación del muro en el actual estado de la cuestión. Pudiera alegarse que dicha empresa está llamada á desaparecer desde el momento en que enajene los terrenos en su totalidad; cuestión es esta que en nada afecta al Ayuntamiento y solo debe preocupar á los adquirentes de dichos terrenos; así como tampoco en nada interesa al Ayuntamiento determinar si el Estado por la zona marítimo terrestre, ó de servicio ó por el carácter de Puerto que según el art. 14 de la ley de 7 de Mayo de 1880 tienen las desembocaduras de las rías y ríos, puede estar obligado en más ó en menos á las reparaciones del muro.

De cualquiera manera que estas cuestiones se resuelvan siempre resultará exento de toda obligación el Ayuntamiento que es lo que aqui interesa consignar.»

Demostrado pues, que ni á virtud de la concesión, ni de principio, ni regla alguna de derecho, incumbe al pueblo de San Sebastián y en su nombre á su representación legal, la reparación y conservación del muro, corresponde probar ahora que tampoco ha contraído esa supuesta obligación por hechos realizados con posterioridad á la concesión. Pero antes conviene recordar los varios incidentes surgidos con ocasión de la caducidad de la concesión para que se vea una vez más, el interés que han mostrado los Ayuntamientos de San Sebastián, en impedir que los concesionarios, perjudicasen con sus planes y conducta al pueblo y la desgracia que ha pesado siempre á estas justas reclamaciones ante más elevadas esferas de los poderes públicos.

CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

Fundándose el Ayuntamiento en las condiciones 6.^a y 12.^a de la concesión de 31 de Octubre de 1873, solicitó del Excelentísimo Sr. Ministro de Fomento en 1.^o de Marzo de 1880 (1) que declarase la caducidad de la concesión otorgada á D. Ramón Berasátegui, pues si bien en 21 de Agosto de 1874, el Gobierno declaró en suspenso todos los plazos señalados en la concesión de 1873, hasta que terminara la guerra civil que impedía al concesionario dar principio á las obras, desde el momento en que se declaró oficialmente terminada dicha guerra, habían de correr nuevamente los plazos señalados en la concesión. Sin embargo, el Excmo. Sr. Ministro de Fomento desestimó la petición de este Ayuntamiento, en 23 de Abril de 1880, otorgando al concesionario un nuevo plazo de seis meses para comenzar las obras y de cuatro años para terminarlas, debiendo invertir en cada uno de ellos la cuarta parte del presupuesto total de las obras.

(1) A la sazón se hallaba constituido el Ayuntamiento en esta forma:

Alcalde Presidente. D. Juan María Errazu.

Primer Teniente.	D. José Olano.
Segundo Id.	» Juan Aguirrebengoa.
Tercer Id.	» Nemesio Aurrecoechea.
Cuarto Id.	» Sebastián José Irastorza.
Quinto Id.	» Miguel Iribas.
Síndico	» Canuto Ignacio Muñoz.
Id.	» Eustasio Olasagasti.

REGIDORES {

- D. Víctor Acha.
- » Santos Rezola.
- » Sebastián Camio.
- » José Manuel Insausti.
- » José María Bengoechea.
- » Mauricio Rodríguez.
- » José María Elizarán.

REGIDORES {

- D. Marcelo Garat.
- » Roque Echeverría.
- » Justo Orbegoza.
- » Vicente Gurruchaga.
- » Lorenzo Orbelzu.
- » Cecilio Echenique.
- » Miguel Irastorza.

Por segunda vez, en 15 de Octubre de 1881 (1) el Ayuntamiento volvió á solicitar del Gobierno declarase la caducidad de la concesión, por no haber cumplido el concesionario la condición referente al comienzo de las obras dentro del nuevo plazo, ni haber invertido en el primer año, la cuarta parte del presupuesto total. Esta petición fué también denegada por el Gobierno.

Se pasan por alto, en este lugar, las molestias y peligros que durante la marcha de las obras se ocasionaron al vecindario y á la colonia veraniega en el paseo de la Zurriola, como también la inundación de las bodegas de la calle de San Vicente, la obstrucción y falta de desagüe de las alcantarillas, y otros accidentes no menos desagradables producidos con motivo de los trabajos de construcción y que el Ayuntamiento procuró evitar y corregir en lo posible, con el mayor celo é interés.

Por tercera vez se presentó la cuestión de caducidad de la concesión, que una sola vez declarada hubiese bastado para poner á salvo los intereses municipales. Fué la Sección 4.ª de la Junta Consultiva de Caminos Canales y Puertos, quien informó en el sentido de que debía declararse por el Gobierno, en 3 de Febrero de 1896, no ya respecto de las obras de la margen izquierda, cuyo reconocimiento y aprobación la misma Sociedad Inmobiliaria solicitaba, sino acerca de las de la margen derecha. La Sección, á pesar de encontrar el asunto favorablemente informado por el Ingeniero de la Provincia y por el del Departamento, opinó que la Sociedad concesionaria había incumplido la condición 8.ª y debía aplicársele la 12.ª de la concesión, puesto que de los *diez años* que habían trascurrido desde que se dieron

(1) Estaba formada el Ayuntamiento en aquella época, por los señores que siguen:

Alcalde Presidente, D. Nemesio Aurrecoechea.

Primer Teniente.	D. José Diaz.
Segundo Id.	> Manuel Echave.
Tercer Id.	> D. Francisco Maiz.
Cuarto Id.	> Joaquín Lizasoain.
Quinto Id.	> Segundo Berasátegui.
Síndico	> Agapito Ponsol.

REGIDORES {
D. Ignacio Echeveste.
> Benito Jamar.
> José Brunet.
> José María Aristizabal.
> Norberto Cuello.
> José María Beitia.
> Marcelo Garat.

REGIDORES {
D. Victoriano Iraola.
> Eustasio Olasagasti.
> Juan Miguel Iribas.
> José Manuel Insausti.
> Miguel Irastorza.
> José María Bengoechea.

por termidadas las obras de la margen izquierda, no dió principio á las de la derecha, siendo así que estaba obligada á comenzarlas al año, por lo que era indudable que el concesionario se hallaba *fuera de la ley* y no podía ejercitar los derechos que la concesión le otorgaba sobre los terrenos de la margen derecha del Urumea, sin solicitar y obtener la correspondiente rehabilitación. Añadía la Sección 4.^a que á su juicio, ni aun debió tramitarse la instancia, objeto de aquel informe, como tampoco el proyecto, diciendo respecto de éste, después de notar su deficiencias y la necesidad de que se rehiciera, que las obras á que se refería no debieron hacerse sin la autorización superior y después de aprobados los correspondientes proyectos, por tratarse de obras no comprendidas en la concesión otorgada. Sin embargo, á pesar de tan luminoso informe y á pesar de que la misma Sociedad Inmobiliaria reconocía y confesaba que no estaban de hecho definitivamente terminadas las obras, el Gobierno declaró en la R. O. de 13 de Abril de 1896, que no había lugar á hacer declaración alguna respecto de dichas obras, absteniéndose de declarar la caducidad de las de la otra margen, y concediendo, por el contrario, nueva prórroga al concesionario.

¡Triste suerte la del pueblo de San Sebastián en este desdichado aunto!

HECHOS POSTERIORES A LA CONCESIÓN

CONSERVACION DE LAS OBRAS

Serios temores debían abrigar los concesionarios del Ensanche Oriental acerca de la solidez y estabilidad de las obras realizadas, cuando tan pronto como construyeron el dique, las alcantarillas y el terraplén, suscitaron la cuestión de la conservación del muro. Por extraño que parezca el hecho de que á raíz de la ejecución de la obra solicite el concesionario se declare quien ha de conservarla; por anómalo que sea que en el momento mismo en que, conforme á la concesión, nacía en el conce-

sionario su derecho de propiedad á la obra, en ese mismo instante plantéase la cuestión acerca de la conservación de esa obra *suya*, es lo cierto que se dió esta anomalía pues el 28 de Abril de 1885 solicitaba del Ministerio de Fomento D. Isidoro Gómez de Aróstegui representante de la testamentaria del Marqués de Salamanca, una declaración sobre la persona ó entidad obligada á la conservación de las obras ejecutadas en la margen izquierda del río Urumea.

El escrito de dicho Señor pasó á informe del Ayuntamiento de esta ciudad quien en sesión del 1.º de Junio de 1885 aprobó el descargo presentado por las Comisiones de Obras y Policía Urbana. El contenido de este descargo es bien explícito y demuestra á las claras la firme convicción del Ayuntamiento de estar absolutamente desligado de toda obligación de conservar el muro y su decidido propósito de no imponer á sus administrados el enorme sacrificio que tal conservación lleva consigo.

He aquí su contexto:

*Acuerdo
municipal de
1.º de Junio
de 1885.*

«Las Comisiones de Obras y Policía Urbana presididas por el Excmo. Sr. Alcalde, han examinado la solicitud elevada á la superioridad por el Presidente de la Junta de testamentaria del Sr. Marqués de Salamanca, remitido á informe de V. E. por el Sr. Gobernador de la Provincia, según lo decretado por la Dirección general de Obras públicas.

Este asunto, que en su apariencia sencillez, entraña grande importancia para este Municipio, ha sido, como no podía menos de suceder, atentamente estudiado, é inspirándose en el criterio de justicia á que procura ceñir todos sus actos, somete á su aprobación las conclusiones más adecuadas al referido criterio en la esperanza de haber fielmente interpretado sus deseos.

No han pasado tampoco desapercibidos para la Corporación municipal, los múltiples gastos que tan difícil obra, llevada á cabo con asíduo empeño, han sido necesarios por parte de la empresa concesionaria, ni el provechoso impulso que con ellas ha adquirido la población en general; si bien el beneficio obtenido

tiene su compensación en los desembolsos que el mismo Ayuntamiento se vé obligado á hacer para trasladar importantes servicios.

Dice el solicitante D. Isidoro Gómez de Aróstegui, en su escrito dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, que, terminadas las obras de ensanche de esta Ciudad por la márgen izquierda del Urumea, y hecha la recepción de las mismas por el Ingeniero Jefe de la provincia, ha llegado el momento de que á la Empresa concesionaria se la declare exenta de todo compromiso ulterior en el entretenimiento de los muros que circundan el terreno ganado al mar, así como en los terraplenes por ella contruidos dentro de dichos muros; fundándose en diversas razones que no interesan al Ayuntamiento y á las cuales nada tenemos que oponer ni contestar.

Pero el indicado Sr. Presidente de la testamentaria termina su solicitud con una súplica de que por el Excmo. Sr. Ministro, se dicte, «la oportuna resolución »para la vigilancia y conservación de las obras que, »con arreglo á la concesión de 31 de Octubre de 1873, »ha construido, entregándolas, como en aquella está »prevenido, al Municipio de San Sebastián.»

Si tal disposición estuviera prescrita, este Ayuntamiento la acataría con el respeto que acoge siempre cuantos emanan de los poderes constituidos; pero examinadas las condiciones que el Gobierno de la República impuso á D. Ramón Berasátegui y Compañía al conceder la autorización para ejecutar las obras de que se trata, no aparece la de la entrega á que el señor Aróstegui alude; y es evidente Íltmo. Señor que ésta no fué una omisión involuntaria, sino que por las causas y razones que exponremos á la consideración de V. S., se reservó el Gobierno de la Nación, su libre y sola intervención en tan importante cometido.

Los términos en que se redactaron las condiciones de la concesión por lo que respecta á los intereses del Ayuntamiento y de los concesionarios, no pueden ser más claros ni más concretos. Se previene en la condi-

ción 2.^a, punto 2.^o que «se cede al Ayuntamiento de San Sebastián la parte de los terrenos ganados á la ría comprendida entre el puente de Santa Catalina y la línea trazada en prolongación de la fachada Sur ó principal del Mercado Nuevo, entendiéndose que esta cesión se hace con el exclusivo objeto de que sirva para regularizar y dar mayor anchura al paseo de la Zurriola ó de Santa Catalina.»

La condición 4.^a establece que los concesionarios deben ejecutar las alcantarillas necesarias dentro de los terrenos de edificación, siendo de su cuenta la conservación de las mismas por el término de un año pasado el cual se entregarán al Ayuntamiento.

A estos dos únicos puntos se limitan las mútuas relaciones entre el Ayuntamiento y los concesionarios, sin que en ninguna otra de las condiciones se hable de que el primero recibiría el todo ni parte de la obra.

Es indudable que por el objeto mismo de la concesión, que es el aprovechamiento de los terrenos ganados al mar para edificaciones, la empresa constructora dá término á su compromiso y entra en el período de explotación; nada más justo ni equitativo sino que este período sea para la misma, de ingresos, á fin de que pueda resarcirse de los gastos que la obra le ha ocasionado.

Nada más natural tampoco que el Ayuntamiento solícito siempre en atender con el esmero de todos reconocido, en las obligaciones que les son propias, lleve á esos mismos terrenos, una vez verificadas las construcciones á que se destinan, las comodidades de que disfruta el resto de la población, en todos los ramos de Policía Urbana, como adoquinados, luz y agua, pero á esto debe limitarse la acción del mismo, y á esto ha debido quedar limitada por la previsión del Gobierno que ninguna otra obligación ni cuidado le impone; si bien las obras mismas han traído consigo una série de modificaciones en distintos servicios que son origen de los desembolsos que el Ayuntamiento se verá abligado á hacer, y á los cuales se hace alu-

sión al principio de este informe. Asi por ejemplo, el matadero de ganados, las lonjas para la limpieza y venta de pescado, bien orientados antes de verificarse los terraplenes, carecen hoy de los requisitos que la higiene prescribe, y el Ayuntamiento se vé en la precisión de construir otros nuevos, aun á costa de grandes sacrificios. No es aventurado tampoco el prever que tan luego como el ensanche se lleve á ejecución, será preciso trasladar el mercado nuevo á otro punto, y estos gastos, de gran importancia, pesarán unicamente sobre el erario municipal.

Por otra parte el muro construido no es otra cosa que el muro anterior llevado más al centro de la ría, y el Ayuntamiento no ha tenido nunca á su cargo el cuidado y conservación de aquél, por lo que respecta al trozo comprendido entre el mercado y la falda del Castillo, como que era el límite de la población por ese punto, según se vé por el plano primitivo del ensanche y como tal ha sido siempre de la propiedad del Estado; y así se dejaba entender cuando en 17 de Abril de 1873, el Ayuntamiento informaba la petición de D. Ramón Berasátegui diciendo, que por las alteraciones que probablemente introducirían en la barra los muros, debía quedar el sostenimiento de estos á cargo de los Ministerios de Fomento y Marina, como los más naturalmente llamados á conocer en obras de esa índole.

Asi ha sido en efecto hasta ahora; el replanteo, la vigilancia y recepción de las obras se han llevado á cabo por el dignísimo Ingeniero Jefe de Obras públicas, sin que haya habido, como era natural, la menor intervención por parte de esta Corporación.

En vista pues, de los motivos expresados, este Ayuntamiento ha acordado contestar á la solicitud de que se trata que en sentir del mismo es que el Ingeniero Jefe de Obras públicas sea quien reciba definitivamente, á nombre del Gobierno de S. M., los muros de cerramiento del ensanche oriental, cuidando de su entretenimiento y conservación, aceptando el Ayun-

tamiento cuanto concierne al ramo de Policía Urbana, en todo el perímetro del ensanche.

V. E. no obstante acordará lo que estime más conforme á justicia». (1)

El Ingeniero Jefe informó en sentido contrario al Ayuntamiento y el Gobernador de la provincia lo hizo exponiendo que durante la ejecución de las obras correspondió su conservación al *concesionario constructor* pero que desde el momento en que se urbanizase el nuevo barrio, la conservación corría por cuenta del *concesionario Municipio*, frase esta evidentemente impropia, pues ninguna concesión obtuvo el Ayuntamiento. El Negociado del Ministerio antes de informar propuso y el Ministerio accedió por R. O. de 21 de Agosto de aquel año, se ordenase al Ingeniero Jefe de Guipúzcoa procediese á la recepción de las obras por si se hallaban terminadas y cumplidas las cláusulas de la concesión, extendiéndose la correspondiente acta en que se hiciera constar la entrega al Ayuntamiento de los terrenos cedidos por la cláusula segunda de la concesión.

En vista de lo dispuesto por la R. O. anterior, el Ingeniero Jefe de la Provincia en 16 de Octubre del mismo año manifestó al Gobierno que *no ha podido hacerse acta de recepción* puesto que se trata de trabajos particulares que no han de ser recibidos por el Estado y la condición 8.ª de la concesión, determina lo que corresponde en estos casos y en su consecuencia extendió en 6 de Abril la certificación de la que remite copia. En dicha certificación se dice, que reconocidas las obras de ensanche de la ciudad de San Sebastián en la margen izquierda del río Urumea se ha comprobado hallarse construido el dique ó muro de defensa que gana los terrenos al mar, las alcantarillas para el saneamiento de los mismos terrenos y el terraplén en la parte que confronta el paseo de Santa Catalina (Zurriola) hasta la línea de

(1) Al aprobarse este informe (1.º de Junio de 1885) concurrieron á la sesión de referencia los señores siguientes: D. Nemesio Aurrecoechea, D. Alfredo Lafitte, D. Luis Calisalvo, D. Leoncio Jornet, D. Cristóbal Carrasco, D. Javier Resines, D. Pedro Villegas, D. José María Beitia, D. Victoriano Iraola, D. Anacleto Arancegui, D. Ignacio Recondo y D. Ignacio Echeveste.

la fachada principal del Mercado. En su consecuencia y en vista de lo que expresamente se dice en la condición 8.^a de la concesión, á petición del representante del concesionario, *se declara haber cumplido las condiciones que vienen referidas.*

Nótese que el Ingeniero certifica tan solo el hecho de la terminación de las obras, no la buena ó deficiente terminación de las mismas, y que nada dice por consiguiente acerca de las condiciones de solidez, seguridad y duración de las referidas obras, extremos sobre los que se guarda en el expediente un prudente y quizá calculado silencio, siendo de notar también que el muro construido no fué el del primitivo proyecto, sino otro situado mas al interior, sin autorización alguna, pues aquel fué imposible terminarlo á causa del embate del mar.

De conformidad también á lo ordenado por la R. O. de 21 de Agosto ya citada se levantó el acta de entrega al dominio público de los terrenos cedidos con tal fin en la concesión. En este acto que tuvo lugar el día 17 de dichos mes y año (cinco días después de dictarse la R. O.) intervino el que á la sazón ejercía el cargo de Alcalde de esta Ciudad Sr. D. José Machimbarrena, quien se creyó en el caso de hacer constar las manifestaciones que aparecen en dicha acta, que dice así:

*Acta de
17 de Agosto
de 1885*

«En esta Ciudad, á diez y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, se constituyeron en las obras del ensanche de la Zurriola, ó sea, en la parte de los terrenos ganados al mar, por la orilla izquierda del Urumea, el Sr. Gobernador Civil de la Provincia, el Sr. Alcalde de esta referida población, el Ingeniero Jefe de Obras públicas, y el Sr. D. José de Cárcer, á título de representante de la testamentaria del Exce-lentísimo Sr. Marqués de Salamanca, hoy concesionario de dichas obras, todos á presencia de mí el Jefe de Fomento, por haber dispuesto verbalmente el expresado Sr. Gobernador que concurriese para desempeñar funciones de Secretario.

Dada cuenta de la pretensión del indicado Sr. Cárcer, fecha 11 del actual, en la que pide que conste:

1.º La ejecución perfecta de la condición 2.ª de la orden de concesión y la distribución de terrenos en completa consonancia con la hoja 4.ª del proyecto: 2.º La construcción de las alcantarillas, á los efectos de la condición 4.ª.

Leida la orden de concesión del Gobierno de la República, fecha 31 de Octubre de 1873.

Y teniendo á la vista la precitada hoja 4.ª del proyecto, los señores Gobernador y Alcalde, en vista de parecer del Sr. Ingeniero presente, accedieron á que se hiciesen constar ambos extremos, solicitados por el enumerado Sr. Cárcer, aclarándose, que *falta por acabar el terraplén de la calle transversal más al Norte.*

Asi mismo acordaron ambos señores Gobernador y Alcalde, que, pues está hecha la recepción de las obras por parte del Ingeniero, empezase desde este día á contarse el plazo de un año, durante el cual, y conforme á reiterada condición 4.ª, la Empresa concesionaria está obligada á conservar las alcantarillas, antes que las reciba el municipio.

El referido Sr. Alcalde, por lo demás, hizo que se consignasen los siguientes particulares: que el Ingeniero Jefe de la Provincia es el único competente para declarar si las obras se han realizado conforme á los términos de la concesión y para extender el correspondiente certificado: que, como Presidente del Ayuntamiento, solo puede declarar acerca de la toma de posesión de los terrenos ganados al mar, desde el puente de Santa Catalina á la nueva alineación establecida en prolongación de la línea de la calle del Pozo; y que respecto á la distribución del terreno edificable en manzanas, el Ayuntamiento, carece de competencia para entender en ella, puesto que las modificaciones hechas en la hoja núm. 4, se han llevado á efecto sin su intervención, obteniendo directamente la aprobación de la Superioridad, pero debe darse noticia á la Corporación municipal de la distribución que se haga en solares, á fin de examinar si se cumplen las prescripciones de las ordenanzas mu-

nicipales de edificación, á las que quedan sugetos los concesionarios.

Seguidamente el Sr. Ingeniero Jefe de obras públicas, ratificó su certificación expedida en 6 de Abril último, á instancia del representante de la Empresa.

Y, finalmente se acordó la extensión de la presente acta, de la cual se sacarán dos copias, una para remitir al Sr. Alcalde y otra para entregar al tantas veces nombrado representante, D. José de Cárcer.

Llevándolo á ejecución redacto la presente, que hallándola conforme todos los Sres concurrentes, la autorizan y firman conmigo el Sr. Secretario de que certifico. San Sebastián fecha ut supra. —El Gobernador, Patricio Aguirre de Tejada.—El Alcalde, José Machimbarrena.—El Ingeniero Jefe, F. Lafarga.—El representante de la Empresa, José de Cárcer.—El Jefe de Fomento, Secretario.—Mariano Barroso» (1)

Se ve pues, que siempre que en este expediente que, dicho sea de paso, se tramitó con desusada celeridad tenía que intervenir el Ayuntamiento de esta Ciudad, éste defendiendo los intereses del pueblo encomendados á su cuidado, oponía firme y decidida negativa á la mera posibilidad de cargarse con los gastos del sostenimiento del muro.

Remitidas al Ministerio el acta y certificación de que se ha hecho mérito previo informe del Negociado de la Dirección de

(1) Constituían el Ayuntamiento en aquella época los señores siguientes:

Alcalde Presidente.	{	D. José Machimbarrena
Primer Teniente.	{	» Gil Larrauri.
Segundo id.	{	» Juan Rodríguez y Tito.
Tercer id.	{	» Alfredo Lafitte.
Cuarto id.	{	» Luis Calisalvo.
Quinto id.	{	» Miguel Altube.
Síndicos.	{	» Ricardo Bermingham.
	{	» Javier Resines.
	{	» Juan Vidaur.
	{	» Juan Iribas.
Regidores.	{	» Juan José Mendiluce.
	{	» Raimundo Sarriegui.
	{	» Lorenzo Goyenechea.
	{	» Manuel Alday.

Obras públicas se dictó la R. O. de 2 de Enero de 1886, que es como sigue:

*Real orden
de
2 de Enero
de 1886*

«Vista la instancia del Presidente de la Junta de Testamentaria del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca, concesionario hoy de las obras para ganar terrenos al mar en la margen izquierda del río Urumea, solicitando se dicte la oportuna resolución que fije á quien corresponde la conservación de dichas obras.

Considerando que si por virtud de la concesión parte de los terrenos ganados al mar debían ser cedidos al Ayuntamiento de San Sebastián y bajo tal punto de vista este puede hallarse obligado á costear parte de la conservación, no puede menos de admitirse que en la parte que la empresa utiliza es también de su peculiar interés, el sostenimiento de los trabajos de defensa.

Considerando que no habiéndose previsto en las cláusulas de la concesión el extremo que hoy se ventila sino en la parte referente á las alcantarillas sobre lo que no hay ni cabe discusión, lo lógico y lo que se desprende de la índole de los trabajos es que los citados gastos de conservación se costeen entre el Ayuntamiento y el concesionario en la proporción del interés que en la obra les corresponde.

Y considerando que antes de decidir la Administración la parte que cada uno debe satisfacer conviene se oiga sobre tal punto á ambas partes y que se procure que se pongan de acuerdo, S. M. (q. D. g.) se ha servido resolver en principio que los gastos de conservación deben ser costeados por el Ayuntamiento de San Sebastián y por el concesionario y que por conducto del Gobernador se les invite á ponerse de acuerdo sobre la proporción en que cada uno debe contribuir y si no se consiguiera el acuerdo que expongan sobre la cuantía de su proporción lo que estimen conveniente.

De R. O. lo digo etc.

Traslado al Gobernador de Guipúzcoa previniéndole que en el caso de no resultar acuerdo informe á la Dirección por quien y como se conservaba el antiguo muro que defendía á la Ciudad de los embates del mar y cuyo objeto llena hoy el construido por los concesionarios.»

Esta Real orden no se notificó al Ayuntamiento de San Sebastián, quien se ha enterado de ella diez años después de dictada por medio de la R. O. de 19 de Diciembre de 1896, publicada con el solo fin de reproducirla. El caso es realmente extraordinario. Una R. O. que en principio resuelve una cuestión que de una manera tan honda afecta al Municipio de San Sebastián y de la que no se le dá noticia siquiera, constando como consta en el curso del asunto el vivísimo interés que le inspiraba y que lejos de eso permanece en la oscuridad relegada al legajo de un expediente hasta que gestiones del mismo Municipio son causa de que vea la luz, es un hecho tan anormal, tan inverosímil, de tanta responsabilidad, que solo él bastaría para empañar con una marca imborrable el prestigio más acrisolado de toda administración. Y menos mal si esa omisión no tuviese otra trascendencia que la de una mera informalidad administrativa: por desgracia esa trascendencia es inmensamente mayor porque tiende á perjudicar notablemente al Municipio, quien aun en el caso improbable de que se hubiese aquietado con dicha R. O. tenía entonces medios más expeditos para obligar al concesionario á cumplir con sus compromisos declarados en la misma, medios de que hoy carece porque durante los diez años transcurridos los concesionarios han consumido todas las garantías que poseían en la margen izquierda del río Urumea, vendiendo los terrenos ganados al mar á los particulares.

De suerte que la R. O. ha permanecido como enterrada bajo una losa de plomo durante el tiempo en que los concesionarios contaban con garantías para hacer efectivas las responsabilidades que para ellos llevaba aparejadas, y se ha desenterrado hoy en que oficialmente se desentienden de todo compromiso, mediante la transmisión de su propiedad á otras personas. ¿Era este el fin que se perseguía al no notificar al Ayuntamiento una resolu-

ción que tan de lleno le afectaba? ¿Era mas bien que la R. O. de 2 de Enero del 86 no satisfacía cumplidamente las aspiraciones de los concesionarios, quienes hubiesen deseado descargarse del peso de *toda* la carga arrojándola al pueblo de San Sebastián y no de *parte* de ella como en la R. O. se declara? Sea de esto lo que quiera, lo cierto es que esa R. O. no pudo cumplirse y que ni se llamó á los concesionarios y al Ayuntamiento á que se pudiesen de acuerdo sobre la parte de gastos con que respectivamente debían contribuir, ni se hicieron las averiguaciones que en el traslado de la misma al Gobernador de Guipúzcoa se ordenaban respecto al extremo de por quien y cómo se conservaba el antiguo muro que defendía á la Ciudad de los embates del mar y cuyo objeto llena el construido por los concesionarios. (1)

El Ayuntamiento no pudo por lo tanto tomar determinación alguna encaminada á combatir la indicada R. O. puesto que no la conocía, y se limitó á sostener el criterio que siempre sostuvo de no encargarse de la conservación de las obras ejecutadas. Numerosos son los hechos y las ocasiones en que demostró este criterio, ya con actos indirectos ó sea aquellos que formando parte de sus atribuciones ejerció en el ensanche oriental, ya con actos directos de oposición y protesta á la ejecución de obra alguna.

Si bien los de la primera clase no tienen la importancia que la de la 2.^a en los que se refleja con toda claridad aquél criterio, conviene citarlos no obstante con el fin de desvirtuar las consecuencias que se quieren deducir de ellos.

El Ayuntamiento defiriendo primero á una solicitud del señor D. José de Cárcer de 18 de Agosto de 1885 y más tarde por su

(1) Conviene recordar á este propósito lo que respecto de este asunto se consignó en el acuerdo de 1.º de Junio de 1885 que antes se ha reproducido y dice así: «El muro construido no es otra cosa que el muro anterior llevado más al centro de la ría y el Ayuntamiento no ha tenido nunca á su cargo el cuidado y conservación de aquel por lo que respecta al trozo comprendido entre el Mercado y la falda del castillo como que era el límite de la población por ese punto, se ve por el plano primitivo del Ensanche y como tal ha sido siempre de la propiedad del Estado: y así se dejaba entender cuando en 17 de Abril de 1873 el Ayuntamiento informaba la petición de D. Ramón Berasátegui diciendo que por las alteraciones que probablemente introducirían en la barra los muros, debía quedar el sostenimiento de estos á cargo de los Ministerios de Fomento y Marina como los más naturalmente llamados á conocer en obras de esa índole.—Así ha sido en efecto hasta ahora; el replanteo, la vigilancia y recepción de las obras se han llevado á cabo por el dignísimo Ingeniero Jefe de Obras públicas, sin que haya habido como era natural la menor intervención por parte de esta Corporación».

su propia iniciativa procedió á dar nombres á las nuevas calles abiertas en el Ensanche Oriental. Siendo esta una atribución inherente á la policía municipal y una obligación impuesta á los Ayuntamientos por el R. D. de 20 de Febrero de 1860, es claro que del cumplimiento de esa obligación, que en modo alguno podía eludir, no puede sacarse consecuencia alguna que ni remotamente siquiera implique un reconocimiento tácito de su obligación á reparar y conservar las obras ejecutadas, tanto más cuanto que, de conformidad á las bases de la concesión, los concesionarios quedaban sujetos á las reglas de policía que dictase el Ayuntamiento.

Otro tanto sucede con los informes emitidos por éste respecto de las variaciones de manzanas y planos introducidos en el nuevo Ensanche. La primera variación fué solicitada por D. José de Cárcer en escrito de 9 de Diciembre de 1885 é informada favorablemente por el Ayuntamiento obtuvo la aprobación del Ministerio de Fomento por R. O. de 15 Enero de 1886 que impuso á *los concesionarios de las obras para ganar terrenos al mar en la margen izquierda del río Urumea* la obligación de ejecutar dicha variación en el término de 6 meses y bajo la inspección y vigilancia del Ingeniero Jefe de la Provincia. De suerte que el Ayuntamiento se limitó á informar sobre la conveniencia de la variación.

Informó también favorablemente cuando el Sr. Morales de los Ríos en 12 de Marzo de 1889 en representación de la Sociedad Inmobiliaria solicitó la aprobación del trazado de la parte comprendida entre la acera izquierda de la calle de Aldamar y la antigua muralla, cuya variación fué concedida por R. O. de 23 de Abril de 1890 á la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, «*propietaria de la concesión otorgada á D. Ramón Berásategui en 31 de Octubre de 1873.*»

El 4 de Julio de 1892, D. Julio Ortega, en representación de la misma Sociedad obtuvo también informe favorable del Ayuntamiento para suprimir la calle existente entre las manzanas 6 y 7, cuya supresión fué autorizada por el Ministerio de Fomento en R. O. notificada el 14 de Septiembre de 1892. El carácter meramente consultivo y no ejecutivo de los actos que ejercía el Ayuntamiento en estos expedientes incoados y tramitados por los concesionarios del ensanche Oriental, lo hizo constar el Ayun-

tamiento en acuerdo de 6 de Septiembre de 1892 al aprobar el informe emitido por su Comisión de Obras á consecuencia de la reclamación entablada por el Sr. Coronel Comandante de Ingenieros contra la supresión de la calle ya citada. En dicho informe se consignó que la petición de los concesionarios relativa á la supresión de dicha calle pasó al Ayuntamiento no para que la autorizase, sino para que la informase como lo hizo, sin que la elevase á superior gerárquico alguno, puesto que esto incumbía tan solo á la empresa interesada en la reforma, añadiendo que «no se trata de una obra que emprenda el Ayuntamiento ó que á él corresponda aprobar sino que por el contrario se trata de una variación que se pretende introducir en el trazado de un ensanche por una empresa particular que asume actualmente el caracter de concesionaria del mismo.» (1)

En todos los actos someramente reseñados, el Ayuntamiento ningún reconocimiento, ni remoto siquiera, hizo, como se vé palmariamente, de obligación de ningún género en orden á la conservación de las obras y mal podía hacerlo cuando las Reales órdenes que se le notificaban designaban á la entidad que en los expedientes intervenía como propietaria del Ensanche. Y si tal era la actitud de la Corporación cuando se trataba de asuntos que no afectaban directamente al muro de encauzamiento, calcúlese cuál sería cuando hacía objeto á este de su atención y previsiones.

(1) En este tiempo estaba constituida la Corporación municipal en esta forma:

Alcalde Presidente	D. Manuel Lizariturry.
Primer Teniente.	» Victor Samaniego.
Segundo Id.	» Lorenzo Diaz Isla.
Tercer Id.	» Gabriel Diez Guñemes.
Cuarto Id.	» Diego Echevarría.
Quinto Id.	» Tomás Acha.
Sexto Id.	» Joaquín Elósegui.

SINDICOS.	{ D. Julián Salazar.
	» Feliciano Echeverría.

REGIDORES	{ D. Javier Lazuriaga.
	» Francisco Pradera.
	» Felix Macazaga.
	» Pedro José Astigarraga.
	» Bernardo Rezola.
	» Eduardo Egaña.
	» José Manuel Lerchundi.
	» Benito Marticorena.
	» José Antonio Sagasti.

REGIDORES	{ D. José León Lasarte.
	» José Francisco Irastorza.
	» Rufo Nerecán.
	» Hermenegildo Otero.
	» León Petirena.
	» Tomás Gros.
	» Florentino Azqueta.
	» José Antonio Elorza.
	» Ignacio Irastorza.

En efecto, no tardó el mar en amenazar la seguridad de la obra ejecutada y los concesionarios se vieron obligados á reconstruir el dique de defensa; sucedía esto en Julio de 1886, algunos meses después de dictada la R. O. de 2 de Enero no notificada al Ayuntamiento. La solicitud de la representación del Excmo. señor Marqués de Salamanca fué remitida en 15 de Julio al Ayuntamiento con el fin que indican las siguientes singularísimas y nada equívocas palabras «á fin de que informe lo que se le ofrezca *en lo relativo* á la influencia que el proyecto pueda ejercer en la anchura de las calles, paseos y distribución de las manzanas». Tres consecuencias se desprenden de los términos en que está redactada esta comunicación de la Dirección de Obras públicas. Es la 1.^a que si tratándose de la reconstrucción del dique de defensa no incumbe al Ayuntamiento informar acerca de otro extremo que el relativo á la influencia que el proyecto pueda ejercer en la anchura de las calles, paseos y distribución de las manzanas y no á las condiciones de la obra que se trata de ejecutar, no puede ser por otra razón sino por la de que el Ayuntamiento no es la entidad que debe atender á las reparaciones y conservación *ulterior* del muro, pues de lo contrario interesado estaba en dar informe sobre las condiciones técnicas del nuevo proyecto; de donde claramente se deduce que la Administración del Estado no consideraba de la incumbencia del Municipio la conservación de la obra, pues le negaba intervención en ella reservándosela tan solo para meros fines de policía. Es la 2.^a que contrasta el contenido de la R. O. de 2 de Enero del 86 con lo mandado por la Dirección, porque no se concibe que declarándose en aquella, siquiera sea en principio, cierta obligación en el Ayuntamiento de atender á la conservación del muro, se le niegue la facultad de inspeccionar, informar y exponer lo que estimase conveniente acerca de sus condiciones de seguridad, coste etc., etc. Es la 3.^a consecuencia que fué evidentemente inoportuna la gestión emprendida por los concesionarios respecto á la conservación de la obra á raíz de la declaración hecha por el Ingeniero de hallarse terminada, si es que esta misma declaración no resulta también algún tanto aventurada, porque ó esa reconstrucción del dique es una obra de conservación ó no lo es. Si es de conservación, en el mero hecho de ejecutarla los concesionarios sin intervención del Ayuntamiento, asintieron á la carencia

en este de toda obligación. Si no es de conservación ¿cómo se explica que los concesionarios fuesen tan acuciosos en pedir se hiciesen declaraciones sobre tal extremo cuando aún no habían terminado la obra, ó por lo menos cuando por las malas condiciones en que se ejecutó hubieron de proceder á su inmediata reconstrucción antes de cumplirse un año desde la certificación expedida por el Ingeniero Jefe?

No consta en el expediente el proyecto de reconstrucción del expresado dique, pero del informe que dieron los individuos de la Comisión de Obras aparece que se refería á la reconstrucción de un trozo de muro por haber sufrido averías en los temporales del invierno y que se reducía á la construcción de otro muro por su parte interior basado en escollera en una extensión de ciento cincuenta metros de longitud de mayor profundidad y grueso que aquel. La Comisión informó favorablemente limitándose á los extremos sobre los que se pedía la opinión del Ayuntamiento, quien aprobó dicho informe.

Tan á la vista del pueblo sucedían estos hechos que el Ayuntamiento no podía menos de preocuparse seriamente del muro de encauzamiento del Urumea, á causa del peligro de destrucción á que la fuerza del mar en aquella parte le exponía constantemente. Por otra parte la venta de solares y edificación de casas en el nuevo barrio había principiado y era forzoso implantar en él los servicios municipales. La implantación de estos servicios ¿llevaba consigo tácitamente el reconocimiento de deberes en la Corporación respecto al muro? Esta fué la cuestión que se planteó con gran interés y se resolvió en sentido negativo por la R. O. de 31 de Julio de 1890 dictada á consecuencia del expediente formado con motivo de la apertura de la calle de Salamanca.

IMPLANTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA ZONA DE ENSANCHE

Con motivo de haber construido D. José Manuel Larrañaga una casa con licencia del Ayuntamiento en el solar núm. 1 de la

manzana A del Ensanche de la Zurriola, terreno que le enagenó la Compañía concesionaria, acudió al Ayuntamiento en escrito de 8 de Junio de 1887 solicitando se ordenara la apertura de la calle y la colocación de aceras en las dos fachadas.

Pasada la solicitud al arquitecto Municipal Sr. Barrio, y después de su informe favorable, la Corporación acordó en sesión de 22 de Junio de 1887, establecer el firme de la calle de Salamanca, y las aceras en toda la extensión de la manzana.

En sesión de 18 de Julio del mismo año, el Concejal D. Miguel Altube, indicó la conveniencia de hacer ciertas reparaciones en la parte de muro comprendida entre el Puente de Santa Catalina y la prolongación de la calle del Pozo, y la discusión que á esta indicación se siguió, sugirió al celosísimo Presidente de la Corporación D. Gil Larrauri, la idea de la prudencia y cautela suma con que el Municipio debía conducirse en todo lo que fuera realizar actos que tórcidamente interpretados pudieran alegarse, más adelante, como indicios de recepción ó toma de posesión tácita de obras ejecutadas por la Sociedad Inmobiliaria, más allá de la calle del Pozo y consecuente con esta idea y á fin de precaver al municipio de todo temor y peligro para el porvenir, propuso al Ayuntamiento la suspensión total de las obras del Paseo de Salamanca, acordadas en la sesión del día 22 de Junio, ínterin, no se garantizara al mismo, plenamente, de cualquier responsabilidad ulterior; y así se acordó por unanimidad.

De este acuerdo por el que se suspendía el del día 22 de Junio, se alzó D. José Manuel Larrañaga ante el Sr. Gobernador de la provincia, y este hecho originó una felicísima discusión en la sesión celebrada el día 8 de Agosto de 1888, que sirvió para que una vez más se viera palpar la nobleza y unidad de miras y sentimientos en que aquellos señores Concejales se inspiraban, tratándose del muro de la Zurriola y de defender al pueblo de tan espantosa calamidad.

En aquella sesión sostenía brillantemente el Sr. D. Miguel Altube, la gravísima importancia de esta cuestión para los intereses comunes del pueblo, recordaba el significativo escrito que la Sociedad concesionaria de la Zurriola había elevado al Ministro de Fomento en 28 de Abril de 1885, para que una vez terminadas las obras con arreglo á la concesión, declarara el caso no previsto, y de absoluto interés, de á quién correspondía su con-

servación. Refirió como *«las Comisiones de Obras y Policía en un luminoso escrito contestaron que el Ingeniero Jefe de Obras públicas fuera quien recibiera á nombre del Gobierno de Su Magestad los muros de cerramiento del ensanche oriental, cuidando de su entretenimiento y conservación, aceptando la Corporación cuanto concierne al ramo de Policía Urbana en todo el perímetro del ensanche»* ni punto más ni punto menos.

Hizo constar de nuevo las previsoras declaraciones del señor Machimbarrena (D. José) Alcalde Presidente, en el acta levantada el 17 de Agosto de 1885 ante el Sr. Gobernador Civil de la Provincia, el Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas y el señor don José de Cárcer, á título de representante de la testamentaria del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca, sosteniendo: *«Que el Ingeniero Jefe de la Provincia era el único competente para declarar si las obras se habían realizado con arreglo á los términos de la concesión. Que como Presidente del Ayuntamiento solo podía declarar acerca de la toma de posesión de los terrenos ganados al mar hasta la alineación de la calle del Pozo, y que respecto á la distribución del resto del terreno, el Ayuntamiento carecía de competencia para entender en ella, puesto que las modificaciones hechas en la hoja núm. 4, se llevaron á efecto sin su intervención, obteniendo directamente la aprobación de la Superioridad.»*

El Sr. Altube leyó además varios documentos relacionados con el asunto, á virtud de los cuales parecía quedar el Ayuntamiento asegurado, á salvo y á cubierto de toda responsabilidad, y ponía en todo caso la oportuna protesta para eludir cualquier otro peligro no previsto, entendía que podían llevarse á cabo las obras de la calle de Salamanca, solicitando de paso la remisión por copia de todos los documentos pertinentes, á los señores Senadores y Diputados, para que gestionaran cerca del Gobierno de S. M. la resolución definitiva del expediente que aún estaba por terminar.

Ciertamente que no habrá habido Ayuntamiento alguno que al aceptar la proposición del Sr. Altube, hubiera podido ser censurado, ó acusado de poco diligente ó menos entusiasta y celoso defensor de los intereses comunes de sus administrados, puesto que aquella proposición se presentaba con todas las garantías y seguridades que pudiera apetecer el más exigente y descontento.

tadizo; en ella se agotaban todas las medidas de prudencia imaginables á prevenir contingencias futuras; pero el de aquel entonces, gravando en la historia un extraordinario ejemplo de presciencia y escrudiñando el porvenir con ese certero sentido práctico tan característico en los hijos de este noble solar, prefirió, ántes de adoptar resolución alguna, conocer primero el dictamen del Oficial Letrado, en cuestión de tan capital trascendencia, encargándole al efecto que informára sobre si procedía ó no mantener el acuerdo de 18 de Julio, suspensivo de el del día 22 de Junio, y responsabilidades que pudieran caber á la Corporación en el sostenimiento de las obras del muro del ensanche Oriental de la Zurriola.

Evacuó aquel Letrado su cometido, en su notable y concienzudo informe, fechado el 14 de Agosto de 1888, imposible de extractar, porque nada hay allí que huelgue, nada que resulte ocioso, por lo que en su mayor parte queda ya reproducido dicho documento. Después de fundarse en principios inconcusos de derecho y apoyándose en leyes y disposiciones administrativas de fuerza incontrastable, con una rigurosa argumentación y lógica inflexible deducía las siguientes conclusiones:

Primera. Que si puede ser dudoso que el Ayuntamiento deba ó no costear el empedrado y los otros servicios del ensanche de la Zurriola, no cabía dudar acerca de que el Ayuntamiento no podía ser compelido á hacerse cargo de las calles, al efecto de establecer los mencionados servicios, *«hasta que la Corporación acuerde haber llegado el momento oportuno de verificarlo»* en cuyo momento y en vista de los recursos que se pudieran y debieran presupuestar, se podría determinar se llevara á ejecución el acuerdo de 22 de Junio de 1887, de conformidad entonces con la Compañía concesionaria, y *«dejando siempre consignada solemnemente y eficaz protesta de que el Ayuntamiento solo se hacía cargo de las calles del ensanche, al solo efecto de establecer en ellas determinados servicios, no implicando ese acto en manera alguna, el reconocimiento ni tácito ni expreso de la conservación y reparación del muro.»*

Segunda. «Que la empresa concesionaria es la única obligada á la conservación del muro en el actual estado de la cuestión,» quedando exento de toda obligación el Ayuntamiento, sea cual fuese la manera en que aquella se resolviese; «cuestión es

«ésta (añadía) que en nada afecta al Ayuntamiento, y *«solo debe preocupar á los adquirentes de dichos terrenos, así como también en nada interesa al Ayuntamiento determinar si el Estado por la zona marítima-terrestre, ó de servicio, ó por el carácter de Puerto, que según el art. 14 de la Ley de 7 de Mayo de 1880 tienen las desembocaduras de las rías y ríos, puede estar obligado en más ó menos á la reparación del muro.»*

Para que los señores Concejales pudieran estudiar detenidamente este informe y formar juicio propio y criterio exacto, quedó ocho días sobre la mesa, transcurridos los cuales se aprobó por unanimidad en sesión de 22 de Agosto de 1888; en cuya sesión también se acordó comunicar al Sr. Larrañaga y al representante del concesionario, la decisión del Ayuntamiento, de abstenerse de ejecutar obra alguna en las calles del repetido ensanche, ínterin no se supiera á quien correspondía el sostenimiento y reparación del muro de contención de la Zurriola. Contra este acuerdo final, ó sea el de la suspensión de las obras, solo salvaron sus votos los señores Urcola, representante del señor Larrañaga, á cuyo nombre solicitó precisamente la construcción de esas obras, y el Sr. Tornero.

Interpuesto recurso de alzada por el Sr. Larrañaga contra esta decisión, é informado al cursarlo por el Sr. Alcalde, en cumplimiento de precepto de la Ley Municipal, fué sometido al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en 28 de Septiembre; el cual después de oír á la Comisión Provincial, dictó resolución en 23 de Octubre de 1888, declarando vigente el acuerdo de 22 de Julio de 1887 y ordenando á la Corporación Municipal, *que procediera desde luego á establecer el firme de la calle de Salamanca en la longitud que alcanzaba la casa del señor Larrañaga.*

Estimando á su vez lesivo este fallo el Ayuntamiento, acordó por unanimidad en sesión de 14 de Noviembre de 1888, recurrir para ante el Sr. Ministro de la Gobernación, como lo efectuó en razonado escrito fechado el 22 de Noviembre del mismo año.

Cumplidos los trámites legales, el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, oído el parecer de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, dictó en 31 de Julio de 1890 una extensa R. O. cuya parte dispositiva decía así:

«En su consecuencia y teniendo en cuenta lo expuesto, la

»Sección opina *que procede revocar* el acuerdo apelado del Gobernador de San Sebastián, *y encarecer* al Ayuntamiento de esa ciudad *que, sin perjuicio de lo que se resuelva acerca de la conservación del muro de construcción de la calle de Salamanca sobre el río Urumea*, realice lo más brevemente que pueda, en una de las dos formas indicadas en el cuerpo de este dictámen, las obras de urbanización, que dicha calle exija, al menos en la parte edificada para que sea posible el tránsito público.»

Tres partes ó conceptos claramente consignados comprendía este fallo:

1.º Una orden revocando el acuerdo del Gobernador, que imponía al Ayuntamiento la obligación de proceder desde luego á establecer el firme de la calle de Salamanca, en la longitud que alcanzaba la casa del Sr. Larrañaga.

2.º Una declaración, haciendo constar que las obras de urbanización en nada prejuzgaban la cuestión capital de la conservación del muro de contención de la calle ó paseo de Salamanca, sobre el río Urumea, puesto que pueden realizarse sin perjuicio de lo que sobre el particular se resuelva; porque una cosa son los servicios urbanos y otra muy distinta la conservación del muro.

3.º Un ruego, una súplica, una recomendación, ó sea *encarecer* al Ayuntamiento que realice las obras de urbanización (sin designación de tiempo) lo más brevemente *que pueda*, para facilitar las cuales recomendaba algunos medios de los que ya nos ocuparemos en su lugar.

Respecto de la primera parte del fallo decía la R. O. en el cuerpo del escrito: «es indudable que el Ayuntamiento que no tiene tiempo fijo para cumplir su acuerdo de 22 de Junio, puede suspender sus efectos por muchas causas, y sobre todo por falta de recursos en el presupuesto para realizar las obras proyectadas, pues si bien el art. 72 de la Ley municipal dice que es de su exclusiva competencia la apertura y alineación de calles y plazas, el empedrado, alcantarillas y alumbrado, y el 73 hace obligatorio el arreglo y conservación de la vía pública, es indudable que queda al prudente arbitrio de las corporaciones locales el señalamiento de tiempo y forma en que se ha de hacer, coonestando las necesidades de la población con los recursos del presupuesto municipal. Por tanto pudo el Ayuntamiento de San

»Sebastián haber obrado con más ó menos acierto ó error al
»suspender por su acuerdo de 18 de Julio de 1888 las obras que
»se ejecutaban en la calle de Salamanca, por efecto del de 22 de
»Junio, *pero no tiene duda que tenía competencia para ello.*» Por
todo lo que revoca el fallo del inferior; que era precisamente
cuanto sostenía el Ayuntamiento contra los que querían fuese
de otra manera.

También la segunda parte del fallo vino á colmar sus deseos.
Recelosa la Corporación municipal de la Compañía concesionaria
y temiendo caer en alguna celada hábilmente preparada, que re-
dundase en perjuicio de los intereses generales del pueblo con-
fiados á su custodia, adoptó muy afortunadamente y para evitar
todo peligro una resolución acertadísima y radical, la de abste-
nerse de ejecutar obra alguna en las calles del Ensanche Orien-
tal ínterin no se le garantizara que con esas obras no asumía
responsabilidad alguna respecto de la conservación del muro de
la Zurriola; y el Sr. Ministro de la Gobernación en la R. O. que
venimos comentando y después de oír y hacer suyo el autoriza-
dísimo dictámen del Consejo de Estado, dá la garantía más com-
pleta y eficaz expresándose así al tratar de ese punto: «pues el
»que se afirme la calle ó paseo de Salamanca y se establezcan en
»ella todos los servicios urbanos, como indudablemente requiere tan
»importante vía de ensanche, en nada perjudica á la cuestión que
»se ventila para deducir á quien corresponde la realización de las
»obras de reparación que exige el muro de contención de dicha ca-
»lle sobre el río Urumea.» Por eso encarece el Ministro al Ayun-
tamiento, la realización de las obras de urbanización *sin perjui-
cio de lo que se resuelva acerca de la construcción del muro*, por-
que esta conservación del muro, no va envuelta en aquella urba-
nización, son dos cuestiones esencialmente distintas, que el
Ayuntamiento las distinguía perfectamente como muy bien lo
daba á entender el Sr. Altube, pero que quería fuese declarado
así por autoridad competente, para estar en todo tiempo á cu-
bierto de ciertas tramas.

Vencida esta dificultad, el único obstáculo que quedaba á re-
mover era el de los recursos necesarios para llevar á la realidad
esos servicios urbanos, dentro de la facultad indubitable de las
Corporaciones de señalar el tiempo y la forma en que dichos ser-
vicios deban implantarse, y de aquí la tercera base del fallo se-

ñalando al Ayuntamiento las dos formas á que alude, y que según aparecen del cuerpo del dictamen son las siguientes: «ó los medios ordinarios del presupuesto municipal ó pidiendo que se le concedan los beneficios de la Ley de Ensanche de 22 de Diciembre de 1876 y arbitrando con arreglo á ella los recursos que sean necesarios.»

De modo que según esta explícita declaración de la R. O., el Ayuntamiento, cuando crea llegado el caso oportuno, que el Ministro encarece sea á la brevedad posible, puede hacer uso de los medios ordinarios del Presupuesto ó de los extraordinarios de la Ley de Ensanche, para afirmar las calles y paseos del ensanche y llevar á estas vías los demás servicios urbanos comprendidos en los artículos 72 y 73 de la Ley Municipal, sin que en uno ni otro caso, la instalación de esos servicios le ligue á reparar el murallón ni á conservarlo; sin que en uno ni otro caso, por el establecimiento de esos servicios, asuma el Ayuntamiento responsabilidad alguna que se refiera á ese particular, sin que nunca pueda alegarse la instalación de esos servicios establecidos por unos ó otros medios, como base, pretexto ó razón para solicitar le pare perjuicio en esa cuestión que se ventila, y que resulta completamente extraña al cumplimiento de estos deberes,

Habiendo pasado esta R. O. á informe del Oficial Letrado, emitió un notable dictámen en 31 de Octubre de 1890, que, hecho suyo por la Comisión de Hacienda, quedó sobre la mesa hasta el día 26 de Noviembre, en que fué aprobado por el Ayuntamiento. Son importantes las conclusiones de dicho acuerdo, porque confirman las consideraciones que acaban de exponerse y demuestran, especialmente la segunda, los temperamentos de prudencia y justificada reserva en que se han mantenido constantemente las Corporaciones municipales, rechazando todo lo que pudiera significar, aun cuando fuera en apariencia, alguna responsabilidad en la conservación de las obras. Dicen así las conclusiones á que se alude:

«1.º Que la resolución recaída de R. O. en el asunto de la urbanización del Ensanche Oriental es beneficiosa para el Ayuntamiento.

2.º Que á pesar de no ser necesario, para mayor constancia, debe dejar consignado, que al adoptar cualquier resolución relacionada con dicho asunto, lo hará teniendo presente la expli-

cita declaración de que de ella, cualquiera que sea, no podrá deducirse consecuencia alguna que le comprometa en lo referente á la conservación del muro de sostenimiento, estando como estará siempre dispuesto á rechazar toda obligación que pretenda imponérsele en la materia.

3.º Que es equitativo acuerde llevar al Ensanche Oriental los servicios de Policía Urbana, pero conforme aconseje el estado del Tesoro Municipal y la conveniencia pública y

4.º Que debe así mismo determinar acogerse á los beneficios de la Ley de Ensanche y al efecto después de llegar á un acuerdo con la Excm. Diputación provincial, ordenar la formación del oportuno expediente solicitando la concesión de dichos beneficios.»

Ni podía ser otra cosa. No merece otro nombre que el de sofisma, el aparente argumento de quienes fundándose en que la ley municipal exige de los Ayuntamientos la implantación de los servicios urbanos de policía, alumbrado, limpieza, ornato público, etc. etc., piden que se lleven á efecto, para después sostener que cada uno de los actos de la Administración en este sentido, es un acto de posesión voluntaria, un acto de pleno dominio civil; como si el cumplimiento de fines necesarios impuestos por la ley, llevara consigo la aceptación libre y voluntaria de derechos y obligaciones que solo pueden proceder de otras causas distintas, y que constante y expresamente se rechazan; tamaño contrasentido no merece mas detenida refutación y lo dicho en este sentido es aplicable al hecho en sí de cobrar impuestos ó realizar otros actos de jurisdicción que nada tienen que ver con los modos de adquirir la propiedad y los demás derechos reales.

Ni cabe afirmar que, á pretexto de que los Ayuntamientos están obligados á atender á la seguridad de las personas y las propiedades, deben reconstruir por sí mismos y á cuenta del pueblo, las obras ruinosas enclavadas en el término municipal, de cuya reparación otras entidades están obligadas á responder. A estos fines de seguridad atienden los Ayuntamientos, por otros medios; acordando medidas preventivas de policía, prohibiendo el paso por sitios peligrosos, cerrando al tránsito público las vías que no ofrecen las debidas garantías, desalojando, si es preciso, los edificios habitados que amenacen ruina, ó puedan ser invadidos por las llamas, inundaciones ó otros estragos, estableciendo

en todo caso, el servicio de vigilancia diurna y nocturna, á cargo de los celadores y serenos

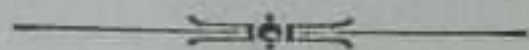
No sería menos atrevida la pretensión de que el Ayuntamiento atendiera á la conservación de los muros de defensa y contención de terrenos *que disfruta el vecindario*, esto es, por razón del uso público de que son susceptibles, por formar parte integrante del término municipal, ó del casco mismo de la ciudad. ¿Por ventura, no estamos viendo todos los días, y lo hemos visto siempre, tanto en esta población como en otras de la provincia, que á la conservación de esos muros de defensa contra los embates del mar ó las avenidas de los ríos, aun tratándose de vías públicas, playas, riberas, muelles, etc., de que disfrutaban los vecinos de cada pueblo, atienden, por lo general, más que los Ayuntamientos respectivos, las autoridades de Fomento y Marina, el ramo de Guerra, la Diputación provincial y los particulares, según los casos? No; la ley municipal no impone á ningún Ayuntamiento la obligación de sostener, reparar ni conservar obras que no son suyas, sino á perpetuidad de los concesionarios de las mismas, en las que no ha tenido ni podido tener la debida inspección é intervención, que no han sido hechas por su encargo, que no las ha recibido ni querido recibir, porque sabía que no le pertenecían y no ignoraba la forma en que fueron construidas. Los Ayuntamientos, por el contrario, con arreglo á la ley municipal, como corporaciones económico-administrativas, tienen el estricto deber de rechazar cargas y pechas como las que quieren imponerse al Ayuntamiento de San Sebastián, en beneficio de sociedades y entidades privilegiadas y en perjuicio del pueblo que administra.

La R. O. de 31 de Julio de 1890 constituye, pues, una firme salvaguardia de los intereses municipales, siendo de alabar el espíritu de delicadeza y los sentimientos de esquisita prudencia en que se inspira, no solo al separar cuidadosamente de la implantación de los servicios urbanos, la grave cuestión de la conservación de las obras, declarando que es independiente de aquel otro asunto, sino absteniéndose de emplear la forma preceptiva ó imperativa respecto del planteamiento mismo de dichos servicios con ser legalmente obligatorios, y empleando el tono de recomendación, de encarecimiento. Hasta ese punto debe respetarse la libre acción de los Ayuntamientos, aún tratán-

dose de servicios que en principio declara la ley obligatorios; lo que dá la medida de la consideración que merecen las Corporaciones municipales, los sagrados intereses del pueblo que representan, cuando se trata de actos y determinaciones libres, no sometidos al férreo círculo de la ley ni del contrato.

Otro tanto puede decirse, en este sentido, de la R. O. de 2 de Enero de 1886, reclamada actualmente en vía contenciosa, siquiera en el fondo sea funesta para los intereses generales del vecindario, pues que se inspira en un criterio que le es altamente perjudicial, pero en la forma está dictada con notable corrección. En efecto, esa disposición emanada del Ministerio de Fomento, no á instancia del Ayuntamiento de esta ciudad, sino de la Sociedad Inmobiliaria, se limita—después de declarar que en principio ambas entidades están obligadas á responder de la conservación del muro—á decir que se las invite á ponerse de acuerdo sobre la proporción con que en este sentido hayan de contribuir, y si no se consiguiera el acuerdo, que expongan sobre la cuantía de su proporción, lo que estimen conveniente. Esta tentativa de conciliación—única parte inmediatamente ejecutiva de la citada R. O.—muestra, pues, una vez más, los miramientos que se deben á las Corporaciones municipales, y cómo cabe perfectamente dejarlas en libertad de indicar por sí mismas la cuantía porque se les pide respondan, aún partiendo del supuesto de que en principio estén obligadas á responder de algo, principio que el Ayuntamiento ventila al presente ante el Tribunal superior de lo Contencioso, siguiendo la conducta que han observado hasta la fecha todos los Ayuntamientos de esta ciudad, defendiendo los sacratísimos derechos de sus administrados, contra las codicias explotadoras de particulares empresas, con una honradez que se aplaudirá siempre, y con una previsión á que actualmente conceden el triunfo esas ruinas del Ensanche que hoy bate el mar.

OTROS HECHOS



En 7 de Junio de 1889 se acordó á instancia del Sr. Presidente del Ayuntamiento dirigir una comunicación al Sr. Morales de

los Rios como representante de la Sociedad Inmobiliaria á fin de que procediese á colocar un barandado en el muro tajamar toda vez que aquel punto iba siendo concurrido y ofrecía peligro. Prueba clara de que el Ayuntamiento no se conceptuaba propietario del muro ni quería ejercer acto ninguno en él, fué el que no colocase él mismo el barandado sino que lo mandase colocar al representante de la Empresa.

Con posterioridad á dicho año es un hecho público, que durante la temporada de verano ha estado destinado dicho tajamar á lugar de esparcimiento por una empresa particular sin que el Ayuntamiento haya tenido intervención alguna ni concedido autorización para fijar en él bancos, mesas y sillas, ni los candlabros y focos de luz eléctrica con que ha estado iluminado ni haya obtenido ingreso alguno por razón de ocupación de la vía pública.

Por escritura de compra-venta é hipoteca otorgada en 29 de Abril de 1893 ante el Notario de residencia en esta Ciudad Don Joaquín Elósegui entre la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián representada por D. Pablo Boch y Barran, Presidente del Consejo de Administración de la misma y D. Julio Ortega y Ponce de León de una parte y de la otra D. José Arana, vecino de esta Ciudad, en nombre de la Sociedad J. Arana y Compañía, cuya escritura fué inscripta en el Registro de la Propiedad de este Partido, la Sociedad J. Arana y Compañía adquirió de la Inmobiliaria de San Sebastián los siguientes solares pertenecientes al Ensanche Oriental de esta Ciudad en el punto llamado Zurriola

- 1.123 m. y 80 cm. de la 1.^a manzana
- 1.569 m. y 03 cm. de la 2.^a id.
- 2.677 m. y 46 cm. de la 3.^a id.
- 2.151 m. y 62 cm. de la 4.^a id. y

toda la manzana 5.^a que tiene la superficie de 2.345 metros; en junto 9.866 m. y 91 cm.² é hipotecó á favor de la Sociedad Inmobiliaria, para garantía del pago de las 75.000 pesetas que del precio de la venta quedaron aplazadas, los terrenos solares de las manzanas 4.^a y 5.^a.

El precio de la venta fué de 325.000 pesetas, del cual se entregaron en el acto de la escritura 250.000 estipulándose que las restantes 75.000 las satisfaría la Sociedad J. Arana y Compañía

á la Inmobiliaria de San Sebastián ó á su legítima representación en esta Ciudad en los plazos siguientes:

25.000 cuando estén terminadas las obras proyectadas de defensa y reparación de muro de la Zurriola que está ejecutando la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián y deben quedar concluidas dentro del corriente año y *las otras 50.000 tan pronto como el Ayuntamiento se haga cargo del paseo que corre paralelamente al muro de contención*. Posteriormente por otra escritura otorgada con fecha 9 de Agosto del mismo año ante el mismo Notario se estipuló que la parte aplazada del precio de venta ó sean las 75.000 pesetas indicadas, serían satisfechas en los plazos que también se han expresado, añadiéndose que si por culpa de la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, una vez terminado el año de 1893 no estuvieren concluidas las referidas obras de defensa y reparación, la Sociedad J. Arana y Compañía concedería una prórroga de 6 meses á cambio del levantamiento de la hipoteca sobre la mitad de los terrenos solares afectos al pago de las 75.000 pesetas y si transcurridos otros 6 meses, es decir, al finalizar el año de 1894 no estuviesen terminadas las obras, se levantaría de hecho la hipoteca para dejar á la Sociedad J. Arana y Compañía en libertad de vender los terrenos hipotecados, y si un año después, es decir, el 31 de Diciembre de 1895 no estuviesen las obras terminadas, se entendería que la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián renuncia á su derecho con pérdida de lo que quede por cobrar.

De este contrato se deduce, por explícita confesión de la Sociedad Inmobiliaria, que el Ayuntamiento jamás se ha hecho cargo del paseo llamado de Salamanca y se deduce también que los adquirientes de esos terrenos los han obtenido á un precio menor con el beneficio consiguiente por dicha circunstancia.

GESTIONES RECIENTES DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA acerca de la terminación de las obras.



Bajo un nuevo aspecto ó sea el de terminación de las obras se presentó la cuestión desde que la Sociedad Inmobiliaria dirigió al Ayuntamiento, la siguiente instancia suscrita por D. Juan Navarro Reverter actual Ministro de Hacienda y D. M. González de la Fuente:

«AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN.

EXCMO. SEÑOR:

*Instancia
de los señores
Navarro
Reverter y
González de
la Fuente de
1.º de Diciem-
bre de 1893.*

Bien conocida es de V. E. la historia de la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, que hoy acude á la aprobada justificación de V. E. para terminar un asunto de gran interés común al Municipio á la población y á la Sociedad recurrente.

La construcción del dique y paseo de la Zurriola ha dado gran vida á la Ciudad moderna, convertida en Corte veraniega de España y es de toda evidencia que sin el hermoso ensanche que los sacrificios del Banco General de Madrid han proporcionado á San Sebastián, viérase esta reducida á la antigua urbe y á las limitadas é insuficientes ampliaciones de la Concha.

Hallará V. E. la medida de los sacrificios que el Banco General de Madrid primero y la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián después, se han impuesto en la crecida cifra de 3.174.000 pesetas que se llevan invertidos en las obras; y como los ingresos realizados no han pasado de 983.000 pesetas bien claro resulta que las pérdidas de ambas sociedades han sido

tan crecidas como los beneficios por esa Ciudad obtenidos.

Esta consideración bastaría para inclinar el ánimo de ese digno Ayuntamiento á la benevolencia si lo que hoy pedimos no fuera de justicia estricta y de conveniencia mútua.

Porque bien sabido es, que la cuantía de los gastos referidos no estaba prevista al principio de las obras y solo el vivo deseo de dar á los nuevos terrenos todas las condiciones de solidez y de seguridad que pudieran apetecer las timideces más escrupulosas y las prudencias más exageradas, pudieran llevar á la Sociedad concesionaria á levantar las formidables obras que hoy han hecho ya sus pruebas definitivas, resistiendo sin el menor desperfecto las más violentas mareas y los más furiosos embates de las olas.

El problema está pues resuelto y la experiencia ha sancionado con su fallo las obras definitivas. Resta solamente para terminarlas en sus paramentos exteriores y en su forma general algunas adiciones que comprenden desde el primero hasta el tercer rompeolas, y que van especificadas con sus alzados y sus secciones en el plano adjunto y en el presupuesto que se acompaña. Respetables y numerosas opiniones facultativas consideran como terminación definitiva de las obligaciones del concesionario respecto de la margen izquierda del Urumea, las referidas obras cuyo importe de 62.000 pesetas está dispuesta á abonar la Sociedad Inmobiliaria siempre que pongan fin y remate á sus múltiples y prolongados sacrificios.

Para concretar este punto y puesto que V. E. es quien en definitiva ha de recibir las obras hechas, natural parece que á V. E. se dirija la Sociedad, para rogarle que previo el dictámen facultativo que estime conveniente pedir, se digne acordar que con las nuevas obras que figuran en el proyecto adjunto quedan cumplidas con visible exceso las obligaciones que se impusieron al concesionario, en cuanto á los terrenos de la margen izquierda del Urumea se refiere. Solo

con esta formalidad, que nuestro buen deseo de corresponder á las atenciones de esa digna Corporación nos sugiere, podrá la Sociedad realizar sin demora y en este corto plazo las obras proyectadas, que además de dar trabajo á las clases obreras, contribuirán grandemente al embellecimiento y al ornato del hermoso paseo de la Zurriola, á la vez que todavía reforzarán más la seguridad de los terrenos ganados al mar.

Por estas consideraciones la referida Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián á V. E. suplica se digne acceder á su justa petición.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.º de Diciembre de 1893.—Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián.—Navarro Reverter.—M. G. de la Puente.

El Ayuntamiento siguiendo el criterio que siempre sostuvo se sirvió desestimar la petición de la Sociedad Inmobiliaria aprobando en sesión de 20 de Marzo de 1894 un razonado informe de la Comisión de Obras. (1)

Hé aquí el documento elevado á acuerdo:

(1) Habiendo renunciado D. Sabino Ucelayeta al nombramiento de Alcalde que en él recayó por R. O. de 22 de Diciembre de 1893, se hallaba constituido, á la sazón, el Ayuntamiento, en la forma siguiente:

Primer Teniente.	{	D. Joaquín Lizasoain.
Segundo Id.	{	» Luis Calisalvo.
Tercer Id.	{	» Eduardo Egaña.
Cuarto Id.	{	» José Antonio Sagasti.
Quinto Id.	{	» Manuel Mercader.
Sexto Id.	{	» Luis María Echeverría.

SINDICOS.	{	D. Faustino Eguía.
	{	» Bernardo Rezola.

REGIDORES	{	D. Javier Lazuriaga.
	{	» Julián Salazar.
	{	» Francisco Pradera.
	{	» Félix Macazaga.
	{	» Pedro José Astigarraga.
	{	» Modesto Aguirrezabala.
	{	» Miguel Irastorza.
	{	» Francisco Jornet.

REGIDORES	{	D. Pedro Aguiñaga.
	{	» Juan Goiburu.
	{	» Joaquín Elósegui.
	{	» Benito Olasagasti.
	{	» José Manuel Lerchundi.
	{	» Benito Marticorena.
	{	» Pedro Juan Alzaga.
	{	» José Ugarte.

*Informe
de la Comi-
sión de Obras
aprobado en
sesión del 20
de Marzo de
1894.*

«Cumpliendo la Comisión de Obras la misión con-
terida por V. E. de informar á la atenta solicitud de
la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, tiene el
honor de exponer lo siguiente:

En 28 de Abril de 1885, el Excmo. Sr. Marqués de
Salamanca se dirigió á V. E. con una comunicación
análoga á la que nos entretiene que fué informada por
las Comisiones de Obras y Policía Urbana, presidida
por el entonces Alcalde D. Nemesio Aurrecoechea y
en el cual contestando á un párrafo del comunicante,
concebido en estos términos: «que por el Excelentísi-
»mo Sr. Ministro de Fomento se dicte la oportuna re-
»solución para la vigilancia y conservación de las
»obras que con arreglo á la concesión de 31 de Octu-
»bre de 1873 ha construido, entregándolas como en
»aquella está prevenido, al Municipio de San Sebas-
»tián» se decía: «Que si tal disposición estuviera pres-
»crita este Ayuntamiento la acataría con el respeto
»que acoge siempre por cuantas emanan de los pode-
»res constituidos; pero examinadas las condiciones que
»el Gobierno de la República impuso á D. Ramón Be-
»rasátegui y C.º al conceder la autorización para eje-
»cutar las obras de que se trata, no aparece la de la
»entrega á que el Sr. Aróstegui (Presidente de la tes-
»tamentaria del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca)
»alude; y es evidente, Ilmo. Sr. que esta no fué una
»omisión involuntaria, sino que por las causas y razo-
»nes que exponremos á la consideración de V. S. se
»reservó el Gobierno de la Nación, su libre y sola in-
»tervención en tan importante cometido.»

Los términos en que se redactaron las condiciones
de la concesión por lo que respecta á los intereses del
Ayuntamiento y de los concesionarios, no pueden ser
más claros ni más concretos. Se previene en la con-
dición 2.ª que «se cede al Ayuntamiento de San Se-
»bastián la parte de los terrenos ganados á la ría com-
»prendida entre el puente de Santa Catalina y la lí-
»nea trazada en prolongación de la fachada Sur ó prin-
»cipal del Mercado nuevo, entendiéndose que esta ce-

»sión se hace con el exclusivo objeto de que sirva
»para regularizar y dar mayor anchura al paseo de la
»Zurriola ó de Santa Catalina.»

La condición 4.^a establece «que los concesionarios
»deben ejecutar las alcantarillas necesarias, dentro
»de los terrenos de edificación, siendo de su cuenta la
»conservación de las mismas por el término de un año,
»pasado el cual, se entregarán al Ayuntamiento.»

Como se vé claramente, á esos dos únicos puntos
se limitan las mútuas relaciones entre el Ayuntamiento
y los concesionarios, sin que ninguna de las demás
condiciones se refiera á que el primero recibirá el
todo ni parte de la obra, ni se hable siquiera de ello.

La acción del Ayuntamiento debe limitarse, pues,
á llevar á los terrenos del Ensanche Oriental en que
se verifiquen las construcciones, las comodidades de
que disfruta el resto de la población, en todos los ra-
mos de Policía Urbana, como adoquinados, luz y agua,
y á eso ha debido quedarse limitada por la previsión
del Gobierno.

Ahora bien, no es posible asegurar que unas obras
que, por su situación desabrigada y abierta al mar,
están sufriendo constantemente los embates de las
olas que con increíble violencia y fuerza tanta, recibe
el muro de la Zurriola en la parte comprendida entre
los actuales rompeolas, puedan resistir muchos años
sin desperfectos, cuya cuantía ó importancia sería
quizás incalculable, y aunque V. E. y esta Comisión
no ignoran los grandes sacrificios hechos por el Ban-
co General de Madrid primero, y por la Sociedad In-
mobiliaria después para reforzar y dar solidez á dicha
parte, construyendo formidables rompeolas, sacrificios
que todos quisiéramos ver recompensados, como al Mu-
nicipio nada le obliga á hacerse cargo de unas obras
cuya conservación pudiera resultar costosísima, por
las razones expuestas, por ser además sabido que el
muro construido ahora no es otra cosa que el anterior
llevado más al centro de la ría, sin que haya estado
nunca á cargo del Ayuntamiento el cuidado y conser-

vacación de aquél, por lo que respecta al trozo comprendido entre el Mercado y la falda del Castillo, y por último por hallarse limitada en las bases 2.^a y 4.^a ya citadas, la intervención del Ayuntamiento, cree esta Comisión que no debe V. E. contraer obligaciones que á la larga, ó quizás en época no lejana, constituirían un gran censo para el erario municipal.

V. E. no obstante resolverá en su elevado criterio lo que crea más justo».

Conviene hacer notar ciertas afirmaciones contenidas en el escrito de la Sociedad Inmobiliaria.

Una de ellas es la muy peregrina de que sin el hermoso ensanche que los sacrificios del Banco General de Madrid han proporcionado á San Sebastián viérese esta reducida á la antigua urbe y á las limitadas é insuficientes ampliaciones de la Concha, que revela un desconocimiento completo de los ensanches de esta ciudad, uno de ellos el de Amara en el que el Ayuntamiento tiene solares de su propiedad, al que ha perjudicado notablemente el Ensanche Oriental. No es menos peregrina la de que la experiencia ha sancionado con su fallo las obras definitivas, á pesar de lo cual se añade á renglón seguido que restan solamente para terminarlas en sus paramentos exteriores y en su forma general algunas adiciones que comprenden desde el primero hasta el tercer rompeolas.

De estas palabras se infiere que la terminación completa y total de la obra, según la sociedad concesionaria, no era todavía un hecho á fines de 1893, pues aún faltaban algunas adiciones.

Se dice, por último, que respetables opiniones facultativas consideran como terminación definitiva de las obligaciones del concesionario respecto de la margen izquierda, las reteridas obras, manifestación que pone en evidencia á la Sociedad, pues ella misma confiesa que no terminaron sus obligaciones con la ejecución de las obras anteriores.

Desestimada la pretensión dirigida al Ayuntamiento por la Sociedad Inmobiliaria elevó esta al Ministerio de Fomento una instancia suscrita por su Presidente D. Juan Navarro Reyterter

en 10 de Abril de 1894 en súplica de que se aprobase el proyecto de Obras complementarias de la desviación de la margen izquierda del río Urumea y se declarasen cumplidas las condiciones de la concesión en cuanto á dicha margen. Esta instancia pasó á informe del Ingeniero Gefe de la demarcación de las provincias Vascongadas y Navarra y además al de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos cuya sección 4.^a lo emitió en la forma siguiente:

JUNTA CONSULTIVA

DE

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

SEÑORES:

Alvarez Nuñez (Presidente.)

Lázaro.

García Araus.

Ulieste (Secretario accidental.)

*Primer
dictámen de
la Sección 4.^a*

En sesión de 16 de Agosto de 1894 á la que asistieron los señores que al margen se expresan se dió cuenta de una instancia que don Juan Navarro Reverter, Presidente de la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián eleva al

Ministro de Fomento, solicitando la aprobación de un proyecto de Obras complementarias de las de encauzamiento de la orilla izquierda del río Urumea de aquella Ciudad y que declare cumplidas en cuanto afecten á dicha margen las condiciones de la concesión otorgada en 31 de Octubre de 1873 á D. Ramón Berasátegui y Compañía para el encauzamiento del Urumea y ensanche de San Sebastián, asunto remitido á informe de la Sección por Decreto marginal de la Dirección general de Obras públicas de 13 de Junio último.

Manifiesta el solicitante: Que por sucesivas transferencias aprobadas por la Superioridad ejecutó las obras el Banco general de Madrid y más tarde se constituyó la Sociedad Inmobiliaria que las ha terminado en la parte *esencial* correspondiente á la mencionada margen, faltando únicamente algunos detalles para dejarlas totalmente concluidas; que estas obras han contribuido poderosamente al adelanto y embelleci-

miento de San Sebastián, pero en ellas hubo de invertir la Empresa Concesionaria la crecida suma de 3.174.000 pesetas sin obtener más ingresos que los correspondientes á los solares vendidos los cuales no importan más de 983.000 pesetas; resultando que las pérdidas de la Sociedad que representa son tan crecidas como los beneficios que ha proporcionado á la mencionada Ciudad.

Añade que la solidez y la estabilidad de las obras está sancionada por la experiencia y para *darlas por terminadas* en sus paramentos exteriores y en su forma general, solo faltan algunas adiciones que comprenden desde el primero hasta el tercer rompeolas, de los cuales dice acompaña el proyecto detallado y el presupuesto que asciende á 62.000 pesetas, cantidad que la Sociedad Inmobiliaria está *aún decidida á satisfacer* como «último y definitivo desembolso siempre que ponga fin á sus múltiples y prolongados sacrificios.»

Pasada esta instancia al Jefe de la demarcación la remitió á su vez al ingeniero encargado del servicio el cual informa «que es de extrañar lo solicitado porque en 6 de Abril de 1885 el Jefe de la Provincia suscribió una certificación, cuya copia acompaña, en la cual se hace constar que se cumplimentó la segunda parte de la cláusula octava de la concesión que dice: «que los terrenos ganados al mar en la margen izquierda de la ría» serán «de la propiedad de los concesionarios» en cuanto hayan construido «el muro de esta margen, las alcantarillas y la parte del terraplen en lo que confronta con el paseo de Santa Catalina hasta la línea de fachada principal del Mercado Nuevo» y según consta en otro documento cuya copia también remite, las condiciones 2.^a y 4.^a de la repetida concesión quedaron cumplidas, por lo cual la Sociedad enagenó terrenos por valor de 983.000 pesetas, siendo evidente que no podía verificarlo sin hallarse en propiedad de los mismos y para ello era imprescindible que la superioridad hubiera aceptado las obras construidas y

además al contestar el Ingeniero Jefe á un oficio de la Dirección relativo á este asunto declaró que no procedía redactar acta de recepción de obras que no eran del Estado y sí únicamente certificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario, como así se hizo.

De estos antecedentes deduce que se trata de un asunto ya resuelto y lo único que puede hacerse en favor del solicitante es reproducir la mencionada certificación, aún cuando obra en su poder.

Respecto del proyecto de Obras complementarias dice: que éstas «tienen más bien el caracter de trabajos de conservación, pues solo se trata de enrasar parte de la obra existente cuyas cotas son distintas, sin ocupar terreno ni dominio público; y si corresponde al Estado intervenir en ellas no hay inconveniente en aprobar lo propuesto por la Sociedad Concesionaria aun cuando sería más conveniente invertir las 62.000 pesetas del presupuesto en recalzar los muros que en reconocerlos.

El Jefe de la demarcación dice que nada se le ocurre añadir á lo expuesto por el Ingeniero en cuanto se refiere al proyecto de Obras complementarias; pero no ocurre lo mismo respecto «á la recepción definitiva de los muelles, para librar á la Sociedad Concesionaria de toda responsabilidad ulterior, porque en el articulado de la orden del poder Ejecutivo de la República nada se dice acerca de este punto concreto que tiene gran importancia para lo porvenir y cabe la duda de cuál de las tres entidades, Sociedad Inmobiliaria, Ayuntamiento ó Administración del Estado, habrá de satisfacer en lo sucesivo los gastos de conservación permanentes de los muros marginales al mar y ría y el de reparaciones eventuales que en los mismos ocurran por socavaciones del mar.

Observa que la Sociedad concesionaria siendo la más directamente interesada en conservar las Obras, por cuanto defienden su propiedad, dice que no invertirá en ellas más de las 62.000 pesetas mencionadas;

considera que el Municipio no está obligado á satisfacer estos gastos aún cuando se haya hecho cargo de los terrenos destinados al uso público y conserve los pavimentos, jardines y bancos establecidos, pues en tal caso se habria establecido en la orden de concesión conforme se hizo con las alcantarillas de aguas inmundas construídas en el terreno ganado al mar, las cuales despues que han sido recibidas definitivamente por aquella Corporación, corren á cargo de la misma y añade que aún sería más injusto el obligar al Estado que hizo á un particular una concesión gratuita de terrenos, «á que conserve» unos muros que defienden propiedad ajena puesto que no se utilizan por los buques para las faenas comerciales sino por el público como paseo, máxime, siendo la carga muy onerosa, pues azotados violentamente por las olas del Cantábrico sufren de continuo socavaciones y averías muy importantes, apesar de la aseveración que hace en su escrito la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, afirmando que dichos muros se hallan ya completamente consolidados.

De lo consignado en el precedente extracto y del examen del expediente se deduce que la pretensión de la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián comprende dos partes; se solicita en la primera la aprobación del proyecto de unas obras llamadas complementarias que acompañan á la solicitud; y se pide en la segunda se declaren cumplidas todas las condiciones de la concesión en lo que á la margen izquierda del río Urumea se refieren.

Respecto á la parte primera, la Sección, conforme con lo manifestado por los ingenieros de la demarcación, entiende que las obras de que se trata no deben llamarse complementarias, puesto que siendo su objeto concluir las comprendidas en el proyecto aprobado, son aquellas mas bien de terminación de las ya construídas, no necesitando la Sociedad para llevarlas á cabo la presentación de nuevo proyecto.

Parece, por consiguiente, que en este detalle no

debe intervenir la Superioridad; pero si otra cosa se pretende, la Sección cree que no debe accederse á lo solicitado, pues el proyecto, compuesto de una hoja de planos, sin techa ni firma, de una copia sin autorizar, del pliego de condiciones y de un presupuesto con la misma falta, no puede aprobarse sin antes detallar más y autorizar por persona competente estos documentos y unir á ellos una memoria descriptiva en la cual se consigne la situación actual de las obras de encauzamiento en la margen izquierda del Urumea y se especifiquen las obras proyectadas justificando la necesidad de su ejecución.

La segunda parte de la petición de la Sociedad Inmobiliaria no debe hallarse claramente expresada en la solicitud que se examina porque si ya en 6 de Abril del 85 se expidió por el Ingeniero Jefe de la Provincia una certificación, haciendo constar el cumplimiento por la expresada sociedad de la primera parte de la cláusula octava de la concesión, en el acta de 17 de Agosto del mismo año se testifica que las cláusulas 2.^a y 4.^a quedaron también cumplidas, parece estar con esto atendida esta parte de la petición de dicha sociedad; y así lo demuestra la circunstancia de haber ejercido desde esa época actos de dominio como propietaria de los terrenos ganados al mar con las obras construídas en la margen izquierda del Urumea.

Mas parece desprenderse de lo expuesto en la solicitud, que la pretensión de la Sociedad es que por el Estado se reciban las obras, quedando la Sociedad concesionaria completamente libre de toda responsabilidad ulterior; en cuyo caso la sección habrá de manifestar que aun cuando en las condiciones de la concesión nada se dice respecto á la conservación de las Obras, es claro que hecha la concesión á perpetuidad con el objeto de aprovechar los terrenos que con aquellas se gane al mar, ni el Estado debe recibir obras concedidas gratuitamente á un particular y que para nada utiliza aquel; ni mucho menos debe encargarse de la conservación de las mencionadas obras, lo cual

crea la sección debe correr á cargo del concesionario, aun cuando no se consigna así en la orden de concesión, puesto que se trata de conservar su propiedad. Pudiera acaso encargarse el Ayuntamiento de San Sebastián de conservar el muro de encauzamiento entre el puente de Santa Catalina y el encuentro de dicho muro con la prolongación de la línea de la fachada principal del Mercado nuevo, en atención á habersele concedido cierto espacio para uso y dominio público, pero en ningún caso parece que deba conservar todo el muro construido por la repetida sociedad, á menos que á ello se preste explícitamente la Corporación.

Terminará la Sección haciéndose cargo de la indicación consignada por el Ingeniero encargado de su informe acerca de la seguridad que ofrece el muro de encauzamiento que no parece ser completa, aunque lo contrario afirme la Sociedad concesionaria. Entiende la Sección que debe aclararse este punto y si resultase confirmada la opinión del Ingeniero, crea como éste que convendría más emplear las 62.000 pesetas que importan las obras ahora proyectadas, en defender aquel muro contra las socavaciones á que está expuesto, que en las citadas obras.

En virtud de cuanto queda expuesto, la sección acordó unánimemente consultar á la superioridad:

1.º Que la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián puede ejecutar todas las obras comprendidas en el proyecto que sirvió de base á la concesión para el encauzamiento del río Urumea y ensanche de San Sebastián sin necesidad de presentar nuevos proyectos.

2.º Que si los documentos que acompañan á la instancia objeto de este informe, se refieren á obras no comprendidas en aquél proyecto, deberehacerse con mayores detalles, completándose con una memoria explicativa y autorizarse todo por persona competente.

3.º Que en la certificación de 6 de Abril y en el acta de 17 de Agosto de 1885 hace constar el Ingeniero Jefe de la Demarcación haberse cumplido por la mencionada sociedad lo consignado en las cláusulas

2.ª y 4.ª y primera parte de la octava de la concesión en lo que á las obras de la margen izquierda se refiere.

4.º Que el Estado no debe recibir las obras citadas por no prestar estas ningún servicio de interés general, hallándose destinadas solamente á defender unos terrenos propiedad de la misma Sociedad.

5.º Que antes de resolver á quien corresponde conservar el muro de encauzamiento, debe oirse al Ayuntamiento de San Sebastián, devolviendo al efecto el expediente al Gobernador de Guipúzcoa.

6.º Que debe informar nuevamente el Ingeniero Jefe, manifestando cual es la situación legal de la concesión y el estado en que se encuentran las obras de encauzamiento de las márgenes del Urumea, explicando lo que sean los llamados rompeolas en el expediente, y que no figuran en el proyecto aprobado para el encauzamiento, y consignando finalmente cuantas noticias antecedentes y datos referentes á este asunto le sean conocidos.

Madrid Septiembre 7 de 1894.

No es posible tratar la cuestión con más claridad y competencia que la que resalta en este informe.

En él, lo mismo que en el del Sr. Ingeniero Jefe de la demarcación, se consigna claramente que el Ayuntamiento no tiene obligación alguna de atender á la conservación de las obras realizadas por los concesionarios, y acerca de las solicitadas á título de complementarias se les asigna su verdadero caracter de obras de terminación que á todo trance pretendía ocultar la Sociedad Inmobiliaria.

Parecía natural que á tan luminoso informe siguiese la resolución administrativa conforme con ella.

Pero esta resolución no se dictó, y por lo tanto ni se oyó al Ayuntamiento de San Sebastián acerca de la conservación de la obra, ni se ordenó que informase nuevamente el Ingeniero Jefe manifestando cual fuese la situación legal de la concesión y el

estado en que se encontrasen las obras de encauzamiento de las márgenes del río Urumea, explicando lo que sean los llamados rompeolas que no figuran en el proyecto aprobado para el encauzamiento y consignando finalmente cuantas noticias, datos y antecedentes de este asunto le fueran conocidos.

A pesar de no haberse dictado resolución alguna que recayera sobre la petición de la Sociedad Inmobiliaria, ésta ejecutó las obras complementarias, pero al cabo de muy poco tiempo sufrieron éstas averías considerables y posteriormente sobrevino su ruina, como es un hecho público, y mientras esto sucedía se tramitaba en el Ministerio de Fomento otro expediente promovido, como el anterior, sin que de ello tuviese noticia el Ayuntamiento, por la expresada Sociedad.

En instancia de 10 de Noviembre de 1894, firmada por don Juan Navarro Gómez, se pedía se declarasen definitivamente terminadas las obras de la margen izquierda del río Urumea y se entendiese prorrogado el plazo de un año señalado en la concesión para dar principio á las de la margen derecha, cuya aprobación solicitaba.

La Sección 4.^a de la Junta Consultiva, informó á esta solicitud del modo siguiente:

JUNTA CONSULTIVA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

SECCIÓN 4.^a

SEÑORES:

Alvarez Nuñez (Presidente)

Baldasano.

Lázaro.

Aparicio.

García Araus.

A. Grimaldi (Secretario)

En sesión del día 19 de Diciembre de 1896, á la que asistieron los señores que al margen se expresan, se dió cuenta de una instancia elevada al Ministro de Fomento por la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, concesionaria del aprovechamiento de los terrenos ga-

*Segundo
informe de la*

Sección 4.^a

nados al mar, mediante la ejecución de las obras de encauzamiento del Urumea, pidiendo que los trabajos que resta ejecutar se hagan en el orden y plazos que se señala en la instancia y con arreglo al proyecto reformado que se acompaña á la misma; asunto remitido á informe de esta Sección por decreto marginal de la Dirección general de Obras públicas de 5 de Septiembre último.

Comienza su escrito haciendo constar que las obras ejecutadas han reportado grandes beneficios para los intereses generales y locales, mientras que han quebrantado los de la Sociedad; que se ha visto obligada á construir obras de ampliación, que califica de importantes, y dice están constituidas por rompeolas, cuya difícil ejecución ha requerido constante atención y ha impedido emprender las obras de la otra orilla, dando lugar, entre tanto, á allegar fondos mediante la venta de terrenos ganados en la orilla izquierda. Otra de las causas de retraso, expuestas por la Sociedad, es la necesidad, en que dice se ha visto, de esperar á que el Ayuntamiento tuviese ultimadas sus gestiones relativas al plan y proyecto de urbanización de la zona antigua, en la que se ha iniciado la edificación en el presente año, construyéndose, dice, importantes calles hacia el mar, y sin que hasta la terminación de aquellas gestiones hayan cesado los obstáculos que existían para empezar las obras, y las dificultades para el transporte y circulación y para el acceso á la zona de las obras contiguas á terrenos que antes eran de particulares y hoy pertenecen al Municipio. Considera que ya ha llegado el momento de reanudar las obras, y opinando que tanto la mejora realizada por el Municipio, como la que producirán las obras que á ella le están concedidas, no serán todo lo beneficiosas que deben, si no se armonizan los trazados de las calles y plazas de las dos barriadas, ha presentado un proyecto de modificación que no ofrece variación esencial respecto al aprobado, según la solicitante, y que está suscrito por el Gerente de la Sociedad y por una firma ilegible al lado de la de aquél.

Se compone este proyecto de Memoria y planos

En la primera se copia parte del documento análogo del primer proyecto, para demostrar que el trazado del muro de la orilla derecha, ha de ser, como en el antiguo proyecto, paralelo al de la izquierda y arrancar del extremo del puente de Santa Catalina, puesto que las razones que para esto se aducían en el proyec-

to anterior subsisten y han sido comprobadas por la experiencia.

El encauzamiento que intentaba á la sazón el Municipio, agua arriba del puente, y que ofrece de ancho la longitud de esta obra, ya es un hecho; la creencia de que subsistiría la formación de bancos de arena agua abajo y á la izquierda del puente, no solo se ha confirmado, si que también se han obstruido casi por completo los tres arcos extremos de la derecha del cauce, han invadido esta región en toda su longitud, permaneciendo fijos, mientras la corriente ha aumentado la velocidad en la orilla izquierda. A juicio del autor del proyecto está suficientemente demostrado que el puente tiene excesivo desagüe, pero cree, que debiendo partir del actual estado de cosas, es necesario conservar para el encauzamiento inferior el ancho constante del superior, pues dada la pequeña distancia á que se encuentra el puente respecto á la desembocadura, y no habiendo afluente, ni accidente alguno intermedio, la longitud de dicho puente marca la embocadura del encauzamiento, y la misma configuración natural del terreno indica, como la más conveniente, la dirección del muro de la orilla derecha paralelo al muro del lado izquierdo, siendo además la que producirá mejor aspecto, circunstancia que cree no es indiferente, y menos tratándose de la Ciudad de San Sebastián.

El trazado que se propone para el muro de la costa ó playa, es también, en esencia, el del proyecto primitivo: una alineación recta paralela al muro que sostiene y defiende á la altura de pleamar el terraplen del barrio en construcción llamado de Gros. La línea adoptada en el proyecto primitivo era normal al encauzamiento, mientras que en el nuevo proyecto, forma con aquél un ángulo obtuso que se aleja más que en el primer proyecto del nivel de la baja mar. El autor de la reforma del proyecto cree que está sancionada por la experiencia la dirección que ha elegido,

pues dice que se ha visto que ha dado un resultado excelente para el muro del barrio de Gros.

La unión de los dos muros está situada en el proyecto reformado agua arriba del punto en que lo está en el primitivo, por lo que se acorta el muro de encauzamiento: en cambio se propone más longitud al muro de costa en el nuevo proyecto: no contando con el desarrollo de muro en curva que constituya aquella unión; se deduce de los planos que el muro de encauzamiento tiene una longitud de 440 metros en el primer proyecto y 380 metros en el actual, mientras que el muro de costa tiene en el primer proyecto la longitud de 675 metros y en el nuevo la de 780 metros.

El barrio de Gros que ha tomado gran desarrollo según el aspecto de la edificación, es el que ha de unirse con la barriada perteneciente á los terrenos que se ganen al mar con las obras de que se trata: al efecto, en el nuevo proyecto se prolongan hacia el mar, y á través de la nueva zona de ensanche, las calles de aquel barrio que son susceptibles de tal prolongación: la vía más importante del proyecto es prolongación de la Alameda de la población antigua y se une con la llamada vulgarmente Gran Vía del barrio de Gros, por medio de una plaza circular, se proyectan paseos á la orilla del mar de mayor anchura que los de la población, se conserva el ancho actual para la calle que ha de separar las dos barriadas, y á las demás calles se asigna el que las corresponde según las ordenanzas municipales; y teniendo en cuenta que en el barrio de Gros hay ya Escuelas y se construye una Iglesia, se proyecta construir un mercado en el nuevo ensanche.

Los planos presentados son cuatro: plano general del primitivo proyecto, plano general del proyecto reformado, plano de detalle de éste, y secciones de los muros y alzado de la pasarela de hierro. Respecto á las dimensiones y materiales de los muros y al sistema de fundación no se introduce alteración alguna:

así se consigna en la Memoria, y por consecuencia, debe considerarse como falta de propiedad en el lenguaje la expresión emitida en dicho documento, incidentalmente, y ántes de tratarse en él taxativamente este extremo, de que el muro de la orilla derecha *«se podrá construir en las mareas bajas, dicho se está, en seco sobre el banco de arena que se ha formado en dicha orilla»*. Pero de la inspección del plano no se deduce, ni los espesores, ni el sistema de fundación; pues si bien las primeras se pueden medir aplicando la escala á la figura, ésta se halla hecha á pulso en las líneas interiores de los macizos, y no es posible precisar la medida de tales espesores, que en todo caso solo se refieren al muro de la izquierda, ya construído, y á los dos muros de una rampa del lado derecho, en las que el espesor de la coronación es de 1.000 metros, y la altura de 4,25 y 1,90 metros respectivamente sin que pueda saberse si está presentada la sección general corriente del muro de la margen derecha y sin que lo esté la del muro de la costa, que según la concesión ha de tener 2,00 metros en la coronación.

El nuevo puente ó sea la pasarela, será según se dice en la Memoria, igual al proyectado anteriormente, pero de menor longitud. En el plano la viga está á 2,00 sobre la pleamar.

La Sociedad concesionaria solo se propone construir los muros y los terraplenes de las calles y plazas; es conveniente no rellenar los espacios destinados á edificación para facilitar y hacer más económica la cimentación de ésta, y por otra parte, entiende la Sociedad, que el capital invertido en la ejecución de los muros y de aquellos terraplenes es garantía suficiente para el resto de las obras. Opina que por algún tiempo está satisfecha la necesidad del ensanche, y que por consiguiente no es necesario marcar como plazo total de ejecución, el tiempo estrictamente necesario, y que teniendo en cuenta que la demanda de edificación será gradual cree que la construcción de

las obras debe abarcar varios plazos parciales, como en efecto se tuvo en cuenta al hacer la concesión; y el autor del proyecto propone nuevos plazos en armonía, dice, con las nuevas obras: el primero de tres años, para la ejecución del muro de la orilla derecha hasta su encuentro con el de la playa, y de los terraplenes de las calles comprendidas entre las del barrio de Gros y la prolongación de la Alameda, pudiendo ser vendidos los terrenos ganados; el segundo, de otros tres años, para la ejecución de la pasarela, y 300 metros del muro de la costa; y el tercero, de cuatro años, para el resto de las obras; debiendo contarse el plazo total desde que sea aprobado el proyecto reformado, y se acceda á esta propuesta y plazos de ejecución. Se manifiesta finalmente en la Memoria, que el concesionario se propone una innovación importante, que cree necesaria y conveniente por la competencia que durante el verano sostiene la Ciudad de San Sebastián con otras poblaciones extranjeras y se dedicar una parte de la nueva barriada ó hoteles aislados, edificios de que carece San Sebastián; pues si bien se han construído algunos en el barrio de Gros están rodeados de edificios, algunos de ellos fábricas y talleres que constituyen molesta vecindad.

El Ingeniero encargado de la provincia de Guipúzcoa, cuyo parecer pidió la Jefatura de Obras públicas de la demarcación de las Vascongadas y Navarra, manifiesta que á su entender, la instancia de la Sociedad concesionaria, no solo tiene por objeto la aprobación de la reforma del proyecto, del orden y plazos de ejecución propuestos, si que también la justificación del incumplimiento de la cláusula 6.^a de la concesión, en que ha incurrido por no dar principio á las obras de la orilla derecha dentro del año contado á partir de Agosto de 1885, y que se le reconozca el derecho y la justicia con que puede considerarse á la Sociedad concesionaria en el pleno uso de los derechos emanados de la concesión.

Ocupándose de este aspecto del asunto, invoca el

artículo 105 de la ley general de Obras públicas vigente, según el cual corresponde al Ministro de Fomento declarar la caducidad de la concesión, deduciendo que no habiéndose decretado esta, se ha afirmado de modo indudable la situación legal del concesionario, quien es, indiscutiblemente, dueño de la concesión de los terrenos de la margen derecha. Califica de laudable el proceder del concesionario al justificar el retraso con que se dispone á reanudar las obras, pues así conocerá la Administración que la Sociedad concesionaria no es responsable del atraso, y que ha realizado sacrificios que exceden á los que supone el cumplimiento de las cláusulas de la concesión.

Fundado en que las obras han podido ser ejecutadas en la tercera parte del tiempo, que entraña la concesión, deduce que la Superioridad tuvo en cuenta las contingencias del negocio industrial al señalar el plazo tan excesivo, criterio confirmado, puesto que en la concesión se supedita el aprovechamiento de la margen derecha al de la izquierda. Entiende que está plenamente justificado el retraso con la simple enunciación de la cifra de gastos, que en diferentes ocasiones y en documentos oficiales, ha consignado el concesionario; el cual, dice, lleva gastadas en la orilla izquierda del Urumea 2.500.000 pesetas, mientras que el importe del presupuesto para las obras de las dos orillas es de 1.349.928 pesetas; habiendo tenido que invertir grandes sumas en obras de consolidación y defensa por haber resultado insuficientes las incluidas en el proyecto.

Por todo lo expuesto opina, que se está en el caso de una petición de prórroga para la terminación de las obras, fundándose principalmente, en que no se habían de emprender á ciegas las obras de la orilla derecha, sin esperar á que se hubiese ultimado por el Municipio las gestiones de este con los propietarios de los terrenos del barrio de Gros y el plan de urbanización de aquél. También como caso extremo, trata el

de que la Sociedad fuese considerada como solicitante de nueva concesión, creyendo que no hay motivo para negarle hoy, lo que se le concedió hace años y que no se negaría á nadie, puesto que no hay perjuicio de tercero.

Después reconoce la necesidad de que la Ciudad esté preparada para satisfacer las necesidades que han de ser crecientes en punto á edificación, principalmente en lo referente á barrios lujosos, como el que se trata de establecer; manifiesta, luego, que sin embargo, la experiencia de lo que hoy ocurre de encontrarse gran número de solares sin ser utilizados, le induce á calificar de corto el plazo de ejecución solicitado por el concesionario, si se han de tener en cuenta las contingencias del negocio industrial y mantener el criterio que impera en la concesión.

Ocupándose á continuación de la reforma del proyecto, dice, que el trazado propuesto para el muro de la orilla derecha no implica variación esencial al del proyecto aprobado, ni en el régimen de la ría y de las arenas; confirma el hecho de que las obras ya realizadas en el encauzamiento han determinado mayor firmeza en el canal de baja mar, y su aproximación á los muros de la izquierda, normalizándose, al propio tiempo todos los elementos del complicado régimen establecido en la desembocadura, permaneciendo fijos en la orilla izquierda los bancos de arena que antes no lo eran; por todo lo que considera aceptable el trazado dado al muro de orilla derecha en el proyecto reformado, reconociendo las ventajas que en dicho trozo encuentra el autor de este. Igualmente juzga acertada la posición y dirección que se asigna al muro de costa, paralelo al de limitación del barrio de Gros, no solo porque la experiencia de los resultados de este último imponen esta dirección, sino además, por disminuir la longitud del otro muro, y por dejar muy defendido el punto más comprometido de las obras, que es la unión de los dos muros.

Entiende que la distribución de los terrenos en

plazas, calles y solares se encuentra justificada con solo examinar los planos.

Interpreta que el actual concesionario pide los mismos plazos de la concesión, con el aumento de un año para el tercer plazo y otro para el cuarto. Compara los dos proyectos, primitivo y reformado, para deducir que no hay diferencia en el volúmen de obra que se ha de ejecutar, pero sí la hay, y grande, en las condiciones económicas de la ejecución de las obras y las del rendimiento del negocio; por haber variado en el tiempo transcurrido las circunstancias que influyen en dichas condiciones económicas.

Juzga deficientes algunos precios y recordando la enseñanza de las obras de la orilla izquierda, por lo que se refiere á exceso de gasto y obras complementarias, calcula en 1.200.000 pesetas el coste de todas las de la orilla derecha; y opina que el concesionario propone y solicita la ampliación de los plazos ante las dos causas de mayor desembolso y más difícil y onerosa venta de solares, producida por la abundancia de terrenos. Calcula la superficie de los terrenos que se han de ganar al mar y su distribución en solares y calles, correspondientes á cada uno de los grupos y plazas, aceptable la repartición de terrenos y de tiempos propuesta y que las relaciones, que en el nuevo proyecto, tiene el total de la superficie con la de solares y calles, son más beneficiosas para el público que los números análogos del proyecto primitivo.

El Ingeniero Jefe de la Demarcación de las provincias Vascongadas y Navarra, acepta el informe del Ingeniero en todas sus partes y se hace cargo de algunos de los puntos más principales; entiende que no se ha declarado la caducidad de la concesión, porque la Superioridad ha tenido en cuenta las obras de consolidación y defensa ejecutadas por la Sociedad después de haber sido recibidas las de la orilla izquierda; confirma que en estas obras complementarias, principalmente en el rompeolas de la Zurriola, se han hecho trabajos importantes, y grandes desembolsos durante

los nueve años trascurridos desde aquella recepción; reproduce las cifras consignadas por el Ingeniero, respecto á gastos totales realizados, y expresa su convencimiento de que la Sociedad concesionaria ha sufrido lesión enormísima en sus intereses, sin que haya encontrado compensación en la venta de solares; estima estas circunstancias, así como la del largo tiempo que ha empleado el Municipio para llegar á un acuerdo con los propietarios de los terrenos de los arenales de Gros, como fundamentos aceptables para una justa concesión de prórroga, que no había de producir perjuicio alguno, público ni privado; como entiende no lo ha producido la demora en que forzosamente ha incurrido el concesionario; y propone á la Superioridad la aprobación del proyecto reformado, tal como se ha presentado; la prórroga por diez años solicitada, dividida en los mismos plazos sucesivos propuestos por la Sociedad, á los que ha de corresponder las porciones de obra que ésta también propone; y que se ordene proceder á recepciones parciales para el final de cada plazo y grupo de obras correspondiente, con el fin de que la Sociedad pueda inscribir sucesivamente en el Registro de la propiedad la de los solares que vaya obteniendo en cada uno de esos plazos, y enagenarlos también; sin perjuicio de cuanto se haga constar en el acta de la recepción definitiva, que se ha de redactar á la terminación de las obras.

La Sección ha examinado la instancia y proyecto á los que el precedente extracto se refiere, y ántes de consignar el resultado de dicho examen, cree oportuno recordar: 1.º Que por orden del Gobierno de la República, fecha 31 de Octubre de 1873, se concedieron á D. Ramón Berasátegui y Compañía los terrenos que ganase al mar con las obras que, según el proyecto presentado, debía ejecutar en ambas márgenes de la ría del Urumea, entre el puente de Santa Catalina y el mar. 2.º Esta concesión en virtud de sucesivas transferencias aprobadas por la Superioridad, ha pasado á la «Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián,»

subsistiendo siempre las cláusulas, con arreglo á las cuales se otorgó la concesión; entre las cuales, la 6.ª dispone: que las obras deberán empezarse á los doce meses de publicada la concesión en la «Gaceta de Madrid,» debiendo terminarse las de la margen izquierda en el plazo de cuatro años, contados desde la misma fecha; y un año despues de la terminación de estas obras empezarse los de la margen derecha, construyéndose en los tres primeros años el muro de encauzamiento de la ría, 300 metros del que corre paralelamente á la línea de marea y prolongar este muro hasta la costa; y un plazo de dos años para la construcción de cada seno de las tramas de 300 metros subsiguientes. 3.º En el expediente no consta si habían empezado las obras á su debido tiempo, se declararon en suspenso el 24 de Agosto de 1874, á causa de la guerra, hasta el 23 de Abril de 1880, en que se señalaron los plazos de 6 meses para emprenderlas, y de cuatro años para terminar los de la margen izquierda; siguiendo vigentes, á partir de esta terminación, los plazos antes señalados para las obras de la margen derecha. 4.º Después de autorizarse por Real Orden de 30 de Octubre de 1883, una modificación en la traza y perfiles del muro de la margen izquierda se concluyeron las obras de dicha margen, según consta en la certificación expedida por el Ingeniero Jefe de la Demarcación en 6 de Abril de 1885, y en el acta extendida en 19 de Agosto del mismo año. 5.º Aun cuando no consta la fecha de la transferencia de la concesión, á favor de la Sociedad Inmobiliaria, debió ser posterior á la de terminación de las obras correspondientes á la orilla izquierda del Urumea, por cuanto en el acta citada anteriormente, figura el representante del Marqués de Salamanca, como concesionario de aquellas obras.

En vista de estos antecedentes, la Sección considera que la concesión de referencia se halla de hecho, caducada con arreglo á la cláusula 12.ª de la misma, por incumplimiento de la 6.ª puesto que no se han

principiado las obras de la margen derecha á pesar de haber transcurrido diez años desde que se terminaron las correspondientes á la orilla izquierda, sin que á esta consideración se oponga como equivocadamente cree el Ingeniero Jefe, la circunstancia de no haberse declarado la caducidad, pues esto solo impedirá una nueva concesión de los terrenos comprendidos en la que se examina, pero no dá derecho al actual concesionario para emprender nuevos trabajos, ni para modificar los proyectos aprobados para las obras, sin rehabilitación previa, solicitando y obteniendo de la Superioridad la prórroga indispensable del plazo de un año, que fija la condición 6.ª para empezar las obras de la margen derecha, después de terminadas las de la izquierda; no siendo pertinente el artículo 105 de la Ley de Obras públicas que cita dicho Ingeniero Jefe, por referirse aquel á la declaración de la caducidad, la cual no ha tenido lugar en este caso; bien sea porque el citado funcionario no diese cuenta á la superioridad del estado legal de la concesión, bien porque la misma Superioridad no haya creído conveniente decretar la caducidad; á pesar de lo cual el concesionario se halla indudablemente, fuera de la Ley, y no puede ejercitar los derechos que la concesión le otorga sobre los terrenos de la margen derecha del Uru-mea, sin la rehabilitación mencionada; por lo cual no ha debido, á juicio de la Sección tramitarse la instancia y proyecto objeto de este informe, lo cual pudiera diferirse por la misma causa. Sin embargo, cumpliendo lo dispuesto por la Dirección general la Sección se ocupará de los citados documentos.

En su instancia, la Sociedad Concesionaria, hace presente los motivos del retraso sufrido en la marcha de los trabajos, y de no haber dado principio á las obras de encauzamiento y ensanche de la margen derecha.

La Sección entiende que la conservación de las obras construídas en la margen izquierda no es motivo atendible de aquel retraso, pues el conservar la

parte de obra hecha, es una conveniencia de la construcción, siempre prevista en los proyectos: en cuanto á las obras de ampliación, que son al parecer *importantes rompeolas frente al mar*, cree la Sección que no han debido hacerse sin la autorización Superior, y despues de aprobados los correspondientes proyectos, por tratarse de obras no comprendidas en la concesión otorgada.

La Sección no tiene conocimiento de que haya recaído resolución sobre la instancia y proyecto que la Sociedad Inmobiliaria elevó al Ministro de Fomento, en 10 de Abril de 1894, solicitando la aprobación de las obras llamadas complementarias, y la autorización para ejecutarlas; acerca de esta solicitud, la Sección informó en 7 de Septiembre de dicho año, consultando á la Superioridad, entre otras cosas que si las obras complementarias, á las cuales se refiere el proyecto presentado, no se hallan comprendidas en la concesión otorgada, debe rehacerse dicho proyecto con mayores detalles, completándole con una Memoria explicativa y autorizándole persona competente. También consultó la Sección que informase de nuevo el Ingeniero Jefe, manifestando cual era el estado legal de la concesión y el en que se encontraban las obras de encauzamiento de las márgenes del Urumea suplicando lo que sean los llamados rompeolas y consignando las noticias, antecedentes y datos que referentes á este asunto le sean conocidos.

Si como queda dicho, nada parece haberse resuelto sobre este particular, la Sociedad concesionaria no ha debido ejecutar en el muro de la margen izquierda de la ría más obras que las de conservación de este muro, las cuales no deben considerarse como causa que impidiese principiar las obras de la margen derecha, en los 10 años transcurridos desde que se terminaron las de la izquierda.

Sin el retraso de aquellas obras, la Sociedad Concesionaria no hubiera tenido que esperar á que el Ayuntamiento de San Sebastián terminase el proyec-

to de urbanización del barrio de Gros, sino que para este proyecto se hubiera tenido en cuenta las obras hechas y los terrenos ganados al mar por la Sociedad y se hubieran armonizado los ensanches en forma análoga á la que ahora se propone.

El estado financiero de la Sociedad Inmobiliaria parece ser el único ó por lo menos el principal motivo de no haberse emprendido las obras de la orilla derecha, pues se dice en la instancia que los quebrantos sufridos en los intereses de dicha Sociedad, la imposibilitan para dar comienzo á las indicadas obras hasta tanto que la venta de los terrenos del primer ensanche (orilla izquierda) lo permitiera.

Pero el resultado de la paralización de las obras de la margen derecha ha sido que el Ayuntamiento haya terminado la urbanización del barrio de Gros, haciendo necesario armonizar las obras de este barrio con los del nuevo ensanche contiguo; y para esto presenta la Sociedad Inmobiliaria el proyecto que la Sección examina, en el cual se propone variar la traza de los muros de encauzamiento y de costa, así como también la distribución de los terrenos que con estas obras se aprovechan. Esta última variación es lógica, una vez abiertas en el barrio de Gros calles que deben continuarse en los terrenos de la Sociedad; y la Sección no vé inconveniente en que se acepte la distribución de estos terrenos en la forma representada en el plano; pero cree que no hay necesidad, para esto de modificar la situación del muro de encauzamiento figurada en el proyecto primitivo; máxime sí, como sucede, la nueva dirección ofrece algún inconveniente respecto al buen régimen de la ría en su desembocadura; en donde conviene dar al encauzamiento la forma abocinada del proyecto aprobado, en lugar de la de ancho constante que ahora se propone: como por otra parte, el ancho en el origen se halla determinado por el puente Santa Catalina, la Sección considera que no debe modificarse en esta parte el proyecto aprobado. En cuanto al muro de costa, que es

normal al anterior en el primitivo proyecto, y que ahora se intenta formar con el de encauzamiento un ángulo obtuso, la Sección no halla en esto inconveniente, aunque tampoco encuentra en ello ventaja, pero debe advertir la falta de coincidencia que se observa en los planos respectivos de los proyectos nuevo y primitivo, pues debiendo el muro de costa seguir próximamente la línea de bajamar, según se representa en los planos de cada proyecto, no resulta así, si estos planos se superponen, sin que pueda afirmarse cual sea el exacto. Si por otra parte, se atiende á que la variación de los muros no es necesaria para armonizar los dos ensanches, parece resultar inconveniente la modificación propuesta en la parte que á los muros se refiere, los cuales deberían construirse con arreglo á la traza y perfiles aprobados tanto en la parte superior como en sus cimientos.

La Sección cree innecesario ocuparse de los plazos de construcción, pues estos serán objeto de la disposición en que se otorgue la prórroga, si llega este caso; consignará sin embargo, que las señaladas en la concesión son amplias, y que no es posible llevar la tolerancia en este punto, hasta hacer casi indefinida la terminación de las obras y, poco menos que imposible una nueva concesión de este aprovechamiento, como sucedería si, atendiendo las indicaciones de la Sociedad concesionaria detalladas en el informe del Ingeniero Jefe, se subordinase la marcha de los trabajos á la demanda de los terrenos saneados.

Resumiendo: la instancia que con fecha 18 de Julio último elevó al Ministerio de Fomento la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, comprende dos cuestiones, referente una á la situación legal de la concesión otorgada en 1873 á D. Ramón Berasátegui, que pertenece hoy á dicha Sociedad y relativa la otra á modificación del proyecto aprobado para las obras de la margen derecha del Urumea. Estas dos cuestiones deben resolverse separadamente y en primer término la que tiene por objeto colocar á dicha Sociedad den-

tro de las condiciones de la concesión; sin la cual no es posible autorizar el comienzo de las obras en aquella margen, ni la modificación del proyecto aprobado para las mencionadas obras.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sección acordó unánimemente consultar á la Superioridad.

1.º Que la Sociedad «Inmobiliaria de San Sebastián» concesionaria del encauzamiento del Urumea y ensanche de la Ciudad, no ha cumplido las condiciones de la concesión siendo indispensable para continuar disfrutando los derechos que en esta se otorgan, que la citada Sociedad se rehabilite, solicitando de la Superioridad la necesaria modificación de dichas condiciones.

2.º Que se devuelva el proyecto de modificación presentado, á fin de que la misma Sociedad, una vez rehabilitada, lo presente nuevamente; teniendo en cuenta que no parece conveniente la variación de la traza aprobada para el muro de encauzamiento, y que para apreciar las ventajas que pueda ofrecer la modificación del muro de costa, debe determinarse exactamente la línea de bajamar, y dibujar en un mismo plano los muros del proyecto aprobado, los que se proponen en su reemplazo y acompañar los perfiles de dichos muros y de sus cimientos, todo autorizado convenientemente.

Madrid 3 de Febrero de 1896.—El Presidente, José Baldasano.—El Secretario, Gregorio Alonso y Grimaldi».

En los informes emitidos respecto á este punto por el señor Ingeniero encargado y Jefe de la demarcación se hace constar que la sociedad ha sufrido grandes pérdidas con la ejecución de las obras de la margen izquierda, y siendo esto así, es inexplicable que esa Sociedad trate de ejecutar las de la margen derecha, cuya ejecución en condiciones de seguridad y duración, caso de ser factibles, ha de ser muy costosa y los rendimientos de la ven-

ta de terrenos muy problemática dada la situación de estos, y los muchos solares sin edificar existentes en esta Ciudad según expresa el Sr. Ingeniero.

Se hace constar también que la Sociedad ha tenido que efectuar grandes obras de consolidación y defensa «por haber resultado insuficientes las incluidas en el proyecto.» Y siendo esto así resulta claro que ni la certificación expedida en 1885 puede surtir absolutamente efecto alguno acerca de las condiciones del muro que se dió por terminado y que sería una enormidad, obligar al Ayuntamiento, á título de conservación, á ejecutar obras de verdadera reparación y reconstrucción como serían las necesarias para sustituir las obras complementarias, hoy destruidas, que según declaraciones de los técnicos se hicieron por ser insuficientes las del proyecto.

Y esto es tanto más de notar cuanto que si el muro construido en 1885 resultaba insuficiente y si como dice la sección 4.^a para ejecutar las obras realizadas por la Sociedad, ésta debió solicitar nueva autorización por no estar comprendidas en el proyecto, el Ayuntamiento se vería obligado, cualesquiera que fuera la obra que tratase de ejecutar para consolidar el muro, á solicitar una aprobación superior, requisito que no se complace con el carácter de las obras de conservación que no necesitan aprobación ninguna, y que colocaría á la Corporación en la situación jurídica de un nuevo concesionario para dichas obras la cual es evidentemente absurda.

A la instancia referida recayó la R. O. de 13 de Abril de 1896 cuyo contexto prescinde en absoluto del primer informe de la Sección 4.^a de la Junta Consultiva, y del segundo no se hace cargo más que de una parte, la menos importante.

*R. O.
de 13 de
Abril de 1896*

«Vistas las instancias presentadas por la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, fechas 10 de Abril y 10 de Noviembre de 1894 y 18 de Julio de 1895, en las que respectivamente solicita, se apruebe el proyecto de las obras complementarias de la desviación de la orilla izquierda del Urumea y se declaren cumplidas las condiciones de la concesión en esta parte, se de-

claren definitivamente terminadas las obras referentes á la margen izquierda del Urumea y se otorgue un plazo de un año además del señalado en las condiciones para presentar el plano de detalles y distribución de terrenos de la margen derecha y con la última presentó un proyecto de modificación referente á las obras que ha de ejecutar en la margen derecha, pidiendo que para la ejecución de ellas se le conceda un plazo de diez años distribuido en tres períodos de tiempo, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por esta Dirección general ha tenido á bien resolver:

1.º Que una vez hecho constar por la certificación del Ingeniero Jefe fecha 6 de Abril de 1885, y en el acta de 17 de Agosto del mismo año que la Sociedad concesionaria habia cumplido lo consignado en las cláusulas 2.ª, 4.ª y primera parte de la 8.ª de la concesión, en lo que se refiere á las obras de la margen izquierda del Urumea, no ha lugar á que la administración haga declaración alguna relativa á dichas obras.

2.º Que el plazo de un año que en la condición 6.ª se señala para empezar las obras de la margen derecha de dicho río Urumea, se entienda prorrogado por igual tiempo á partir desde el día en que la superioridad apruebe el proyecto de modificación de las obras de dicha margen derecha, y que el plazo de ejecución de estas últimas obras sea el de diez años distribuidos en tres períodos, de los cuales en el primero de tres años deberán terminarse las obras del primer grupo constituidas por el muro de encauzamiento del río Urumea, por la margen derecha que es paralelo al ya ejecutado, por la izquierda arrancando del estribo derecho del puente de Santa Catalina hasta su encuentro con el de la playa y con los terraplenes correspondientes á las calles comprendidas entre las del barrio de Gros y la prolongación de la Alameda. En el segundo período que será de tres años, se terminará la pasarela proyectada sobre el río Urumea en el eje de

la prolongación de la Alameda y cien metros del muro de playa á partir del ángulo de encuentro con el muro de encauzamiento. Y para el tercer período que será de cuatro años se ejecutarán todas las obras restantes hasta la completa terminación de las proyectadas. A la terminación de cada grupo se practicará una recepción parcial de sus obras, á fin de que puedan inscribirse en el Registro de la Propiedad los solares ya saneados que pasarán á ser propios de la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián y de que ésta los pueda enagenar para resarcirse del coste de la obra ejecutada, sin perjuicio de cuanto se haga constar en el acta de recepción definitiva que á la terminación completa de la obra se levantará para someterla á la aprobación superior y entendiéndose subsistentes las demás cláusulas de la concesión otorgada en 31 de Octubre de 1873.

3.º De conformidad con la conclusión 2.ª del dictámen de la Sección 4.ª de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, se devuelve el proyecto de modificación presentado, á fin de que la misma Sociedad lo presente nuevamente, teniendo en cuenta que no parece conveniente la variación de la traza aprobada para el muro del encauzamiento y que para apreciar las ventajas que pueda ofrecer la modificación del muro de costa debe determinarse exactamente la línea de bajamar y dibujar en un mismo plano los muros del proyecto aprobado, los que se proponen en su reemplazo y acompañar los perfiles de dichos muros y de sus cimientos, todo autorizado competentemente, pero entendiéndose que una vez hechas estas variaciones debe entregarse el proyecto así modificado, al ingeniero Jefe de la demarcación para que este interese del Ayuntamiento de San Sebastián el informe correspondiente y si dicho informe fuese contrario al referido proyecto, informe nuevamente dicho Ingeniero Jefe sobre las variaciones que haga el citado Ayuntamiento. Y 4.º se fija á la Sociedad concesionaria el plazo de seis meses para introducir en el proyecto modifica-

do las variaciones propuestas por la Sección 4.^a de la Junta Consultiva de Caminos á cuyo efecto se acompaña copia de la parte pertinente del dictámen de dicha Sección.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 13 de Abril de 1896.—El Director general, Ordoñez.—Señor Gobernador Civil de Guipúzcoa».

Al informar el Ayuntamiento conforme se ordenaba en la citada R. O. (que tampoco se le notificó hasta que el mismo Ayuntamiento pidió copia de ella, no remitiéndose tampoco del informe de la Junta Consultativa más que una parte, precisamente aquella en que nada se decía respecto á los puntos que dejamos indicados) la Comisión de Obras llamó la atención sobre el estado ruinoso de las ejecutadas en el Ensanche Oriental y en virtud de esta indicación los señores Pavía y Goiburu presentaron y el Ayuntamiento en sesión del día 27 de Octubre de 1896, aprobó la siguiente moción: (1)

(1) En esta época se hallaba constituido el Ayuntamiento, como en la actualidad, en la forma siguiente:

Alcalde Presidente.—D. Joaquín Lizasoain.

Primer Teniente.	D. José Marqueze.
Segundo Id.	» Manuel Mercader.
Tercer Id.	» Sabino Ucelayeta.
Cuarto Id.	» Santiago Azaldegui.
Quinto Id.	» Faustino Eguía.
Sexto Id.	» José Ibarra.

SINDICOS. { D. Francisco Jornet.
» Benito Olasagasti. (Falleció en Marzo de 1896.)

REGIDORES {
» Modesto Aguirrezabala.
» Miguel Irastorza.
» Raimundo Sarriegui.
» Luis María Echeverría.
» Joaquín Echenique.
» Aniceto Rezola.
» Tomás Allafior.
» Juan Olazabal.
» Miguel Mendizabal.

REGIDORES {
D. Leopoldo Ducloux.
» Pedro María Gofi.
» Pedro Aguiñaga.
» Juan Goiburu.
» Luis Calisalvo.
» Pedro Juan Alzaga.
» Francisco Pavía.
» Francisco Carril.
» José Ugarte.

*Moción
de los
Sres. Pavia
y Goiburu,*

«Excmo. Sr.: Los Concejales que suscriben han examinado detenidamente el luminoso informe presentado por la Comisión de Obras de este Ayuntamiento, relativo al proyecto de encauzamiento y desviación de la orilla derecha del Urumea y distribución de los terrenos y obras necesarias á tal proyecto que, por R. O. de 13 de Abril del corriente año, ha sido autorizado para llevar á cabo la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián.

De la lectura del informe mencionado y de las atinadas y pertinentes observaciones que en el mismo se hacen, tanto al principio como al final del escrito, así como del texto de la R. O. de que se ha hecho mérito, deducen los suscribentes que es de importancia suma á los intereses del Municipio, cuya representación ostenta este Ayuntamiento, el que la Corporación municipal, antes de informar cosa alguna respecto al proyecto presentado por la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, que ha motivado el escrito de la Comisión de Obras, acuda respetuosamente al Gobierno de S. M. llamando su atención sobre el estado ruinoso de las obras de defensa y del muro de encauzamiento de la margen izquierda del río Urumea, que defienden los terrenos ganados al mar y enajenados por la citada Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, comprendidas en el Ensanche Oriental de esta Ciudad; sobre el abandono en que se encuentran, tanto el muro citado, como los rompeolas y demás obras de defensa sin que por nadie se atienda á su conservación y reparación; sobre las desgracias y perjuicios que semejante estado de cosas ha de producir en plazo no lejano á no acudir con presteza á remediarlo, la entidad que tenga obligación de ello; y finalmente sobre la necesidad de que una disposición superior aclare cual sea esta entidad; ya que ni en las cláusulas de la concesión otorgada en 1873 ni en otra disposición alguna, se indica quien sea aquella y ni duda ofrece que no es ni puede ser V. E. quien se deba encargar de la ejecución de las obras necesarias á prevenir tales riesgos,

pues que tiene consignadas en todo tiempo las protestas necesarias á tal efecto, por ser una Sociedad particular la concesionaria que además ha sido la que se ha lucrado con el producto de la venta de los terrenos ganados al mar con las obras ejecutadas.

Fundan su parecer los suscribientes en las siguientes razones que exponen á la alta consideración de V. E. Dice en el preámbulo la citada R. O. de 13 de Abril del año corriente, que la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián solicitó entre otros extremos en instancias de 10 de Abril y 10 de Noviembre de 1894 y 18 de Julio de 1895 que *se aprobara el proyecto de las obras complementarias de la desviación de la orilla izquierda del Urumea y se declaren cumplidas las condiciones de la concesión en esta parte, y se declaren definitivamente terminadas las obras referentes á la margen izquierda del Urumea*, y la disposición 1.^a de la misma R. O. añade textualmente: Que una vez hecho constar por la certificación del Ingeniero Jefe fecha 6 de Abril de 1885 y en el acta de 17 de Agosto del mismo año, que la Sociedad concesionaria había cumplido lo consignado en las cláusulas 2.^a 4.^a y primera parte de la 8.^a de la concesión, en lo que se refiere á las obras de la margen izquierda del Urumea, *no ha lugar á que la Administración haga declaración alguna relativa á dichas obras; de todo lo cual parece desprenderse, que la Administración admitía como definitivamente terminadas las obras referentes á la margen izquierda del Urumea desde la fecha en que tuvo conocimiento oficial de la certificación y actas ya mencionadas.*

Sin entrar en otro orden de consideraciones, los hechos han demostrado de manera clara é indudable que por desgracia para la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián y los compradores de los solares que ésta ha ido enajenando, desde entonces *estas obras terminadas en definitiva*, según la Administración distan mucho de garantizar como era de esperar, los terrenos ganados al mar en el Ensanche Oriental. Los

derrumbamientos causados en uno de los rompeolas por los embates del embravecido mar, y los desperfectos que los muros de defensa de la margen izquierda del Urumea, han experimentado desde el año 1885; así como el abandono en que desde hace algún tiempo se tienen tales obras, han ido creando un estado de inquietud aun entre las personas profanas al arte de construir que presagiaban sensibles desgracias si no se obligaba á efectuar las necesarias reparaciones, á la entidad que debe efectuarlas, que no puede ser otra que la Sociedad Inmobiliaria que se ha beneficiado en exclusivo de la concesión que solicitó y obtuvo en tiempo oportuno.

Estos tristes vaticinios á punto estuvieron de realizarse, como V. E. no ignora, hace apenas un mes con motivo de la marejada y duro temporal de los días 5 y 6, en especial del seis, en cuyo día las olas no solo derruyeron buena parte de las obras exteriores de defensa que han quedado en situación harto ruinosas, sino que rebasando de continuo la coronación del muro de encauzamiento, anegaron las calles y solares inmediatos, destruyeron completamente, hundiéndolo en una considerable extensión, el paseo de Salamanca, hasta tal punto, que visto el peligro que se corría, el Gobernador Civil hubo de ordenar que se diera salida á las aguas para que no se inundara el paseo de la Zurriola y las calles á él contiguas y se prohibiera por peligroso el paso de la gente por aquellas inmediaciones.

No hay para qué recordar el temor harto fundado que se apoderó del vecindario y moradores de las casas del Ensanche Oriental; y momentos hubo que parecía que del temor iba á pasarse al pánico con sus tristes consecuencias; fortuna y grande fué, que el temporal amainara, y que la hecatombe que se presentía no pasara de una amenaza que conviene no olvidar y tener muy presente, para pedir se ordene á quien tenga obligación efectúe las obras necesarias para asegurar las obras de encauzamiento de la már-

gen izquierda del Urumea, cuya actual situación no puede sea más comprometida.

Ni deja de ser pertinente á este lugar hacer notar y dejar sentado que, como dice con harta razón la Comisión de Obras, en su citado informe, no es V. E. el encargado de reparar los muros construidos por la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, pues en 1.º de Junio de 1885 aprobó la Corporación municipal un informe de las Comisiones de Obras y Policía Urbana, haciendo constar que el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, era el que á nombre del Gobierno de S. M. debió de recibir los muros de cerramiento del Ensanche Oriental, cuidando de su entretenimiento y conservación, aceptando el Ayuntamiento solamente, lo que concierne al ramo de Policía Urbana.

Ni nada más oportuno también que el recordar á este propósito, como lo hace la actual Comisión de Obras, ya citada, la declaración que el dignísimo señor Alcalde de esta Ciudad D. José Machimbarrena hizo constar en el acta levantada acerca de la conclusión de las obras de la margen izquierda, el 17 de Agosto de 1885, y que copiada á la letra dice así: «El »referido Sr. Alcalde, por lo demás, hizo que se »signasen los siguientes particulares: Que el Ingeniero Jefe de la Provincia es el único competente para »declarar si las obras se han realizado conforme á los »términos de la concesión y para extender el correspondiente certificado: que como Presidente del Ayuntamiento solo puede declarar acerca de la toma de »posesión de los terrenos ganados al mar desde el »Puente de Santa Catalina á la nueva alineación establecida en prolongación de la calle del Pozo.»

Por todo lo cual los Concejales que suscriben se atreven á proponer á la aprobación de V. E. adopte el acuerdo de acudir, sin pérdida de tiempo, al Ministro de Fomento, ó á quien haya lugar, solicitando se digne ordenar:

1.º Que el Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos de esta Provincia, vuelva á examinar con ur-

gencia, el muro de encauzamiento y obras de defensa y complementarias de la desviación de la margen izquierda del Urumea, ejecutadas por la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián; y haga constar en una certificación, cuál sea el estado actual de todas estas construcciones, y en su caso las obras que juzgue indispensables para prevenir perjuicios y desgracias en los terrenos ganados al mar y enagenados por la mencionada Sociedad, así como la época prudencial para la cual habrán de estar terminadas tales obras.

2.º Que la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián es la única entidad que tiene obligación de efectuar á sus espensas y á su cuenta y riesgo, las obras que proponga el mencionado Ingeniero Jefe y las que en lo sucesivo sean necesarias para reparar y conservar las construcciones por ella efectuadas, á virtud de la concesión que la misma solicitó y obtuvo en tiempo oportuno, ya que dicha Sociedad Inmobiliaria es también la única que se ha lucrado, con la enagenación de los terrenos ganados al mar á consecuencia de dicha concesión.

3.º Que ínterin no se efectúen las obras que en su caso proponga el Ingeniero Jefe de esta Provincia no se considere á la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián en condiciones de poder emprender las obras de desviación de la margen derecha del río Urumea y construcción del muro de playa que tiene solicitadas en las fechas de que se hace mérito al comienzo de este escrito.

V. E. sin embargo acordará en su recto criterio lo que juzgue más conveniente.

San Sebastián 26 de Octubre de 1896.—Juan Goiburú.—Francisco Pavía.—Aprobado en Sesión de 27 de Octubre de 1896».

En su consecuencia se dirigió la exposición de referencia al Ministerio de Fomento, pero no conceptuando suficiente el Ayun-

tamiento este medio, dada la trascendencia suma del asunto acordó designar una comisión de su seno, compuesta del Alcalde Presidente Sr. Lizasoain y de los concejales señores Ucelayeta y Jornet, que fuese á Madrid á gestionar una resolución favorable para los intereses del pueblo.

La Comisión en su carta dirigida desde Madrid con fecha 29 de Noviembre de 1896 decía lo siguiente:

Ensanche Oriental

y segunda parte de la concesión en la margen derecha

*Carta
de la Comisión*

«Este asunto por su gravedad es el que más nos ocupa y preocupa. Hemos hallado en el negociado varias piezas de importancia que no figuraban en el expediente nuestro; entre ellas una Real orden que jamás fué publicada ni notificada al Ayuntamiento, de la cual hemos sacado copia, así como del último dictamen de la Junta Consultiva (Sección 4.ª), del cual solo se nos dió traslado de una pequeña parte y la menos importante. También hemos sacado copia de la certificación expedida por el Sr. Lafarga en 1885.

Tarea muy larga sería la de dar hoy cuenta de nuestros pasos respecto á tan importante asunto. Solo les diremos que hemos celebrado varias conterencias con el Ministro de Fomento y Presidente del Consejo de Ministros, y como todavía no hemos hecho más que cambiar impresiones con dichos señores, sería aventurado dar opinión en cuanto al resultado de nuestras gestiones.

Pero como el asunto es de mucha trascencia, consideramos conveniente indicar á V. proponga en la primera sesión ordinaria la adopción por el Excelentísimo Ayuntamiento de los siguientes acuerdos.

1.º Que la Comisión de esa Corporación en Madrid queda facultada para solicitar los dictámenes de

Letrados que considere convenientes para el caso en que procediese entablar recursos legales.

2.º Que si la citada comisión lo considera conveniente, pueda disponer del Oficial Letrado D. Pablo García Avecilla, en cuyo caso pasaría á Madrid el citado funcionario.»

A consecuencia de las gestiones del Ayuntamiento, por el Ministerio de Fomento, se dictó en 19 de Diciembre de 1896 la siguiente R. O. que se notificó al Ayuntamiento por el Excelentísimo Sr. Gobernador civil de la provincia en esta forma:

*Real Orden
de 19 de
Diciembre
de 1896*

«El Ilmo. Sr. Director general de Obras públicas con fecha 19 del corriente me comunica la Real Orden siguiente:

«Vista la instancia del Ayuntamiento de San Sebastián remitida por V. S. en 3 de Noviembre último solicitando entre otras particulares que se declare que la Sociedad concesionaria de las obras de encauzamiento del río Urumea, es la única entidad que tiene obligación de ejecutar á sus espensas y á su cuenta y riesgo todas las obras de conservación y de reparación que sean necesarias en las que fueron objeto de dicha concesión que se refieren á la margen izquierda de dicho río Urumea: Resultando que esta cuestión fué resuelta por Real Orden de 2 de Enero de 1886 en la que se estableció en principio que los gastos de conservación de las referidas obras debían ser costeados por el Ayuntamiento de San Sebastián y por el concesionario, y que por conducto del Gobernador se les invitase á ponerse de acuerdo sobre la proporción en que cada uno debía contribuir, y si no se consiguiese el acuerdo que expusieran sobre la cuantía de esa proporción lo que estimasen conveniente.—Resultando que dicha Real Orden se comunicó al entonces concesionario de las obras y al Gobernador de la Provincia de Guipúzcoa y que á pesar de esto, de la ins-

tancia del referido Ayuntamiento se deduce que esta Corporación no tiene noticia oficial de la existencia de dicha Real Orden, deduciéndose también de esto que por el referido Gobierno Civil no se dió el debido cumplimiento á lo mandado en la mencionada Real Orden de 2 de Enero de 1886; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que prejuzgada la cuestión por la Real Orden antes citada se prevenga á V. S. la dé inmediato cumplimiento y al efecto se le remite una copia autorizada de la misma y se le previene también que explique las causas ó razones que hayan motivado el incumplimiento de la tantas veces citada Real disposición.—De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para los efectos oportunos.»

Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—San Sebastián 31 de Diciembre de 1896.—El Conde de Ramiranes.—Sr. Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad.»

Consultado por el Ayuntamiento acerca la R. O. que acaba de transcribirse como también de la de 13 de Abril de 1896, el notable jurisconsulto Sr. Canalejas, emitió los siguientes dictámenes:

*Dictamen
del
Sr. Canalejas
de 19
de Diciembre
de 1896*

Por R. O. de 31 de Octubre de 1873, se otorgó la concesión de las obras para ganar terrenos al mar y encauzamiento del río Urumea, constando en el expediente el acuerdo en contra del Ayuntamiento de San Sebastián.—Construídas ciertas obras en la margen izquierda del Urumea, se hizo constar en el año 1885, ante el Ingeniero Jefe de la provincia y el Gobernador Civil, concurriendo también el Alcalde.—La Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, derecho-habiente de la primera entidad concesionaria presentó al Ministro de Fomento varias instancias, solicitando se

aprobase un proyecto de obras complementarias de la desviación del Urumea; se declarasen cumplidas las condiciones de la concesión y definitivamente terminadas las obras de la margen izquierda del citado río, y se le otorgara un plazo de un año para presentar el plano de detalles y distribución de terrenos de la margen derecha.—A estas instancias recayó la R. O. de 13 de Abril del corriente año 1896 que ha sido notificada al Ayuntamiento de San Sebastián.—Este Municipio ha presentado en el Ministerio de Fomento una instancia pidiendo se declare por la Administración que los gastos necesarios para conservar y reparar las obras construidas, no corren á cargo de la Corporación municipal; extremo este importantísimo no previsto en el pliego de condiciones y aún no resuelto.—Consulta.—Debe el Ayuntamiento de San Sebastián recurrir en la vía contenciosa administrativa contra la R. O. de 13 de Abril de 1896?—Dictamen.—Ya tuve el honor de manifestar á la digna Comisión de ese Ayuntamiento, en las varias conferencias celebradas recientemente que respecto al fondo del asunto de quién había de conservar las obras construidas, los antecedentes únicos que el Ayuntamiento posee y ha podido suministrar, por tanto, me inducían á creer que no estando previsto en el pliego de condiciones de la concesión, por un descuido incomprensible; que siendo tan circunscrito el carácter de las declaraciones del acta de 17 de Agosto de 1885, en la que se declararon cumplidas ciertas cláusulas; que habiendo la Compañía constructora gestionado en diversas ocasiones la exención de toda responsabilidad, y hasta entrega, para ello, de cierta cantidad en depósito, era muy extraño, que la Administración, llamada á hacer aclaraciones en la interpretación de este contrato oscuro por su falta de previsión no las hubiera hecho en tal concepto la gestión del Ayuntamiento presentando una instancia encaminada á ese fin, era muy atinada y debía producir una resolución administrativa que sería consentida ó recurrida, se-

gún se apreciase justa y beneficiosa ó perjudicial para los intereses de la Ciudad.—La Real Orden de 13 de Abril de 1896 contestando, no al Ayuntamiento, sino á la Compañía, en rigor, no hace declaración alguna concreta que pueda tener luego el valor de una resolución firme y definitiva que no reclamada en tiempo imposibilite toda acción. Pero, como un Ayuntamiento gestor de los intereses de la Comunidad, debe extremar sus precauciones, como el anuncio de la demanda no impide desistir de ella, ni ocasiona apenas gastos, entiendo que un extremo de diligencia aconseja prevenir la demanda, aun cuando si recae pronto la resolución que el Ayuntamiento tiene iniciada y ella corroborase que la R. O. de 13 de Abril no le perjudica, se desista del recurso. Otra cosa sería si la nueva dijera «estese á lo dispuesto en la anterior» porque lo acordado es algo que perjudica al Ayuntamiento.—Cuestión distinta es, si debe recurrirse contra todas las declaraciones de la R. O. ó solo contra alguna. Respecto á este punto y aun cuando difiero del criterio sustentado por la Administración que le lleva á no declarar ya la caducidad de la concesión, la doctrina gubernativa y contenciosa de la discreción de las prórrogas y el carácter mismo de las disposiciones que dieron origen á la concesión, indúcenme á creer que el Tribunal contencioso no accedería á la demanda que contra tal declaración se dedujera y opino que el Ayuntamiento, aleccionado por las consecuencias de las imprevisiones del anterior pliego de condiciones, lo que debe hacer es prevenir eventualidades análogas sobre reconocimiento de las obras, conservación, reparo de desperfectos, etc.—De todas suertes, preparado el recurso queda tiempo para concretar la impugnación á uno ó más extremos de la R. O.—Para emitir una opinión que pudiera llamarse de fondo y determinar los razonamientos y antecedentes jurídicos que deben aducirse en vía contenciosa, es indispensable conocer el expediente, tanto más cuanto al Ayuntamiento no se le ha notificado, hasta

hoy,—aparte la R. O. de 13 de Abril—ninguna resolución sobre los puntos que le interesan.—Entiendo que debo someter á estos escuetos términos la respuesta á la pregunta formulada, consignando en resumen que á mi entender, sin perjuicio de desistir en su caso, debe interponerse recurso contencioso-administrativo contra la R. O. de 13 de Abril de 1896, para que nunca, ni á ningún supuesto quepa decir que el Ayuntamiento de San Sebastián ha consentido una resolución que le puede perjudicar, sin agotar contra ella todos los medios que la Ley concede.—Tal es mi opinión que someto con gusto á parecer más ilustrado y dado con mayor conocimiento de causa.—Madrid 17 de Diciembre de 1896.—Licenciado, José Canalejas y Mendez.—El Letrado que suscribe tiene el honor de exponer que está en un todo conforme con el anterior dictamen que hace suyo.—San Sebastián 19 de Diciembre de 1896.—Licenciado, Pablo G. Avecilla.—D. Antonio de Egaña, Secretario del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián.—Certifico: Que en sesión celebrada por este Ayuntamiento el día 19 de los corrientes, se enteró del preinserto dictámen, suscrito por los Letrados D. José Canalejas y D. Pablo García Avecilla acordando en consecuencia recurrir en vía contencioso-administrativa contra la R. O. de 13 Abril del corriente año.—Y para que conste, expido el presente que firmo en San Sebastián, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, á veintidos de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.—Antonio de Egaña.—Visto Bueno El Alcalde, Joaquín Lizasoain.—Hay un sello el Ayuntamiento de San Sebastián.

ANTECEDENTES

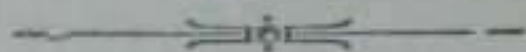
*Dictamen
del Sr. Cana-
lejas, de 12
de Marzo de
1897.*

La Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, derecho habiente de la entidad concesionaria de las obras para ganar terrenos al mar y encauzamiento del río Urumea presentó varias instancias al Sr. Ministro de Fomento solicitando se apruebe un proyecto, de obras complementarias de la desviación del Urumea; se declarasen cumplidas las condiciones de la concesión y definitivamente terminadas las obras de la margen izquierda del citado río y se le otorgara el plazo de un año para presentar el plano de detalles y distribución de terrenos de la margen derecha. A estas instancias recayó la R. O. de 13 de Abril de 1896, resolviendo no haber lugar á hacer ninguna declaración relativa á dichas obras; que debía otorgarse como se otorgaba una prórroga para las obras de la margen derecha del susodicho río; que se devolviese el proyecto para rectificarlo en algunos detalles fijando por último el plazo de 6 meses para introducir en los planos las variaciones acordadas.

Contra esta R. O. interpuso el Ayuntamiento de San Sebastián recurso contencioso-administrativo en 21 de Diciembre último.

Previamente, el 3 de Noviembre anterior había presentado una solicitud pidiendo se declarase entre otros particulares que la Sociedad Concesionaria de las obras de encauzamiento del río Urumea era la única obligada á ejecutar por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la conservación y la reparación de lo construído en virtud de la concesión, cuya instancia se resolvió por R. O. de 19 de Diciembre de 1896 notificada al Ayuntamiento el 31 del mismo mes mandando cumplir lo dispuesto en la de 2 de Enero de 1886.

CONSULTA



Dictada la R. O. de 19 de Diciembre de 1896 que concretamente resuelve la cuestión que al Ayuntamiento interesa, cual es, quienes están obligados á satisfacer los gastos de conservación y reparación de las obras construídas en la márgen izquierda del río Urumea, y en vista del ex pediente puesto de manifiesto para formalizar la demanda contra la Real Orden de 13 de Abril de 1896, ¿Debe desistirse del pleito contencioso?

DICTAMEN



Ya tuve el honor de consignar en mi dictamen fecha 17 de Diciembre pasado que la R. O. de 13 de Abril contestando no al Ayuntamiento sino á la Compañía, en rigor no hacía declaración alguna concreta que pudiera ser invocada caso de consentirla como resolución firme y definitiva; pero que ello no obstante el Ayuntamiento gestor de los intereses de la comunidad debía extremar las precauciones, é interín no recayese acuerdo sobre la instancia de 3 de Noviembre era prudente no consentir la Real resolución de 13 de Abril sin perjuicio de abandonar el recurso en vista de lo que arrojará el estudio del expediente y de lo que dispusiera la R. O. en expectativa

Ya se ha dictado esta R. O. resolviendo concretamente el extremo que con razón preocupa á esa Excelentísima Corporación y en ella no se hace ninguna referencia á la recurrida de 13 de Abril, sino á otra anterior de 1886 hasta hoy ignorada. De suerte que á mi juicio la cuestión principal respecto á quien corresponde sufragar los gastos de conservación y reparación de las obras construídas en la márgen iz.

quierda del río Urumea está íntegra y exclusivamente planteada en las dos resoluciones Ministeriales de 19 de Diciembre de 1896 y 2 de Enero de 1886. La de 13 de Abril del finado año, conocidos los dos precedentes, nada prejuzga sobre tan importantísimo punto, consentida no podrá alegarse como cosa juzgada contra la negativa del Ayuntamiento á encargarse del entretenimiento de las obras referidas.

Las declaraciones contenidas en la tantas veces citada R. O. de 13 de Abril, son congruentes con las peticiones deducidas por la Sociedad Inmobiliaria en 10 de Abril y 10 de Noviembre de 1894 y 15 de Julio de 1895; ni en unas ni en otras se mencionan siquiera los, gastos de conservación y si bien es cierto que al solicitar la Sociedad se recibiesen por el Estado los muros contruidos, seguramente para librarse de toda responsabilidad ulterior, en algún informe como en el del Jefe de la demarcación se planteó el problema de quien había de satisfacer en lo sucesivo los gastos de entretenimiento de las obras, si el Estado, el Ayuntamiento ó la Sociedad concesionaria, entiendo que este punto no lo resuelve en ningún sentido la R. O. recurrida, tanto más cuanto el subsanar la falta de previsión cometida al otorgarse la concesión fué objeto de una R. O. especial, la de 2 de Enero de 1886.

A mayor abundamiento, aun suponiendo que al solicitar la Sociedad Inmobiliaria se declarase por la administración definitivamente terminadas las obras referentes á la margen izquierda del Urumea, buscarse por este medio capcioso la exención de toda responsabilidad ulterior no lo consiguió, pues la administración resuelve su súplica con un Visto; no otra cosa significa el primer apartado de la parte dispositiva de la R. O. de 13 de Abril que dice: «Una vez hecho constar por la certificación del Ingeniero Jefe fecha 6 de Abril de 1885 y en acta del 17 de Agosto del mismo año que la Sociedad concesionaria había cumplido lo convenido en las cláusulas 2.^a y 4.^a y primera parte de la 8.^a de la concesión en lo que se refiere á las

obras de la margen izquierda del Urumea no ha lugar á que la administración haga declaración alguna relativa á dichas obras». De suerte que á mi juicio no puede suscitarse duda respecto á que la R. O. citada en nada varía la situación que el Ayuntamiento se creó en el acta de Agosto de 1885. Si las declaraciones contenidas en aquel documento son perjudiciales á los intereses de San Sebastián, entonces pudieron ser impugnadas, el citado de derecho de hoy repito es el mismo que en 1885 y no es discutible ahora lo consentido antes.

Las declaraciones restantes de la R. O. que examino, ofrecen subalterno interés jurídico, por ser claro que el Ministro ha usado de facultades discrecionales al conceder prórrogas, al determinar plazos y al acordar la devolución del proyecto de modificaciones presentado por la Sociedad, mandándole introducir variaciones; y cuando las resoluciones administrativas no emanan de la administración en el ejercicio de sus facultades regladas no son recurribles en la vía contenciosa.

Finalmente, al ordenar pase el proyecto reformado á informe de ese Excmo. Ayuntamiento, el Ministro no ha hecho más que cumplir la Ley que preceptua este previo trámite para aceptar modificaciones en el proyecto primitivo.

En resumen, el estudio del expediente, el hecho de haberse dictado la R. O. de 19 de Diciembre de 1896 mandando cumplir la de 2 de Enero de 1886, que resuelve correctamente la cuestión capital que al Ayuntamiento interesa y la propia índole de las declaraciones contenidas en la R. O. de 13 de Abril de 1896, me inducen á aconsejar el desistimiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra ésta última Real resolución.

Tal es mi opinión que someto con gusto á parecer más ilustrado y dado con mayor conocimiento de causa.

Madrid 12 de Marzo de 1897.

Licenciado José Canalejas y Méndez.»

ANTECEDENTES

*Dictamen
del
Sr. Canalejas
de 12
de Marzo de
1897*

Por orden del Gobierno de la República de 31 de Octubre de 1873 se otorgó á D. Ramón Berasátegui la concesión de las obras del encauzamiento del río Uru-mea y ensanche de la ciudad de San Sebastián bajo determinadas condiciones, entre otras, la de ceder al Ayuntamiento la parte de terrenos que ganase al mar, comprendida entre el Puente de Santa Catalina y la línea trazada en prolongación de la fachada Sur del Mercado nuevo; la de sujetarse el concesionario en las construcciones á lo prescripto por las reglas de policía urbana vigentes en la localidad al tiempo de hacerse la concesión; y la de construir por su cuenta en la margen izquierda las alcantarillas necesarias y conservarlas durante un año, pasado el cual las entregaría al Ayuntamiento.

Ejecutadas las obras de la margen izquierda, Don Isidro Gómez Aróstegui, Presidente de la Junta de la testamentaria del Excmo. Sr. Marqués de Salamanca planteó la cuestión no prevista en la orden de 1873 de quien había de conservar las obras construídas, presentando al efecto el 28 de Abril de 1885 una instancia en el Ministerio de Fomento pidiendo se dictase la oportuna resolución para la vigilancia de dichas obras que con arreglo á la concesión habían sido construídas y debían entregarse como en aquella se prevenía al Municipio de San Sebastián.

Informaron esta solicitud el Ayuntamiento, exponiendo que la conservación debía quedar á cargo del Estado, y el Ingeniero Jefe que opinó, «que terminadas las obras y urbanizado el ensanche, el Municipio debía pechar con la carga porque él se beneficiaba de las ventajas».

El Negociado en vista de estos dos informes contradictorios manifestó consideraba precedente se ordenase al Ingeniero Jefe de Guipúzcoa que si dichas obras estaban terminadas y cumplidas las cláusulas de la concesión se procediese á recibirlas extendiéndose la correspondiente acta en que se hiciese constar dichas circunstancias y la de la entrega al Ayuntamiento de los terrenos cedidos por la cláusula 2.^a.

Comunicada la orden al Ingeniero Jefe por haberse conformado la Dirección general de Obras públicas con lo propuesto por el Negociado contestó D. Francisco Lafarga, Ingeniero Jefe, el 16 de Octubre de 1885 que no había podido hacerse el acta de recepción pues se trataba de trabajos particulares que no debían ser recibidos por el Estado, por lo que y en cumplimiento de la cláusula 8.^a solo pudo expedir un certificado en 6 de Abril de 1885 al efecto de que constase se hallaba construído el dique ó muro de defensa que gana los terrenos al mar, las alcantarillas y el terraplén.

Además concurrió el 26 de Agosto del mismo año á la entrega de las obras al público que tuvo lugar por acta que suscribieron con él, el Gobernador Civil de la provincia, el Alcalde de San Sebastián, el representante de la testamentaria del Marqués de Salamanca derecho habiente de Berasátegui y el Jefe de Fomento como secretario, expresándose á petición del representante del Marqués de Salamanca: 1.^o la ejecución perfecta de la cláusula 2.^a de la orden de 1873 y la distribución de terrenos en completa consonancia con el proyecto y 2.^o la construcción de las alcantarillas á los efectos de la cláusula 4.^a consignándose también á instancias del Alcalde ciertos extremos que no es del caso ennumerar, pues no tienen el alcance de una protesta contra el recibo de las obras. (1)

Cumplidos estos trámites pasó el expediente á informe del Gobernador que opinó como el Ingeniero Jefe. El negociado expuso que la conservación de las

(1) Vense dicha acta en la pág. 43.

obras debía correr á cargo del Ayuntamiento. Y la Dirección de obras públicas disintió del parecer del Negociado adoptándose su criterio en definitiva en la R. O. de 2 de Enero de 1886 que resolvió la cuestión propuesta en la instancia de 28 de Abril de 1885.

Esta R. O. de 2 de Enero de 1886 no fué ejecutada ni siquiera notificada al Ayuntamiento que la desconocía hasta que se dictó la de 19 de Diciembre de 1896.

En este intervalo de diez años, se presentaron varias instancias que no afectan al caso, entre ellas, las que dieron lugar á la R. O. de 13 de Abril de 1896. Solo merece citarse como antecedente la formulada el 28 de Mayo de 1886 por D. José de Cárcer, representante del Marqués de Salamanca, presentando el proyecto para la reconstrucción de un trozo del dique de defensa que había sufrido averías importantes á consecuencia de los temporales. Esta solicitud la informó el Ayuntamiento favorablemente y se accedió á lo pedido el 6 de Agosto del mismo año 1886 (1)

También D. Juan Navarro Reverter, como Presidente de la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, actual poseedora de la concesión otorgada en 1873 á Berasátegui, en la instancia de 10 de Abril de 1894 decía: «que la solidez y estabilidad de las obras está sancionada por la experiencia y para darlas por terminadas en sus paramentos exteriores y en su forma general, sólo faltaban algunas adiciones que comprendían desde el primero al tercero rompeolas, de las cuales dice, acompaña el proyecto detallado y el Presupuesto que asciende á 62.000 pesetas, cantidad que la Sociedad Inmobiliaria estaba aún decidida á satisfacer como último y definitivo desembolso, siempre que pusiera fin á sus múltiples y prolongados sacrificios.

Como los frecuentes temporales en la costa cantábrica ocasionan considerables desperfectos en las obras, el Ayuntamiento con celo plausible presentó una instancia al Ministro de Fomento suplicando: 1.º Que el Ingeniero Jefe examinara y certificase el estado de las

(1) Véanse en la página 51 y siguientes el alcance y significación del informe del Ayuntamiento.

obras y en su caso determinase las reparaciones á su juicio necesarias para prevenir perjuicios y desgracias y 2.º se declarase que la Sociedad Inmobiliaria era la única obligada á la reparación de lo construido.

A estas peticiones recayó la Real Orden de 19 de Diciembre de 1896, mandando dar cumplimiento á la de 2 de Enero de 1886.

CONSULTA

¿Debe el Ayuntamiento de San Sebastián consentir las R. R. O. O. de 19 de Diciembre de 1896 y 2 de Enero de 1886?

DICTAMEN

La primera cuestión que se ofrece es la de si se está en término para recurrir de la R. O. de 2 de Enero de 1886, pues si ésta fuese firme nada podría conseguirse en la vía contenciosa por ser la de 19 de Diciembre del pasado año, reproducción de aquella consentida. A mi juicio es incuestionable que no notificada al Ayuntamiento la R. O. de 1886, no constando tampoco en el expediente la firma del legal representante de la Corporación municipal, ni habiéndose mostrado enterado de la resolución en el mismo expediente, el término de tres meses que para interponer recurso contencioso administrativo concede el artículo 7.º de la Ley, empezó á correr el 31 de Diciembre pasado, fecha en que fué notificada la R. O. de 19 del mismo mes, que ordenaba el cumplimiento de la del 1886, teniendo entonces el Ayuntamiento por primera vez noticia de las declaraciones que le afectaban. Se está por tanto en tiempo habil para recurrir de ambas R. R. O. O.

Descartado este primer extremo queda la cuestión

fundamental que planteada en términos concretos es la siguiente: ¿quien debe sufragar los gastos de conservación de las obras construídas en virtud de la orden del gobierno de la República de 31 de Octubre de 1875?

No previsto el caso en la concesión, por un descuido ú olvido verdaderamente inesplicable, surgen dudas muy difíciles de resolver por la falta de textos legales aplicables y de precedentes. ¿Incumbe la conservación al Estado, al Ayuntamiento, á la entidad concesionaria ó á los propietarios? Entiendo que debo limitar la discusión, por no requerir mayor amplitud la cuestión palpitante, á si debe ó no ser el Ayuntamiento quien pague parte de esos gastos, esto es, á si la resolución ministerial que en principio resolvió debían ser el Ayuntamiento de San Sebastián y el concesionario los que costeen dichos gastos, es ó no ajustada á derecho.

Examinaré sucesivamente los preceptos administrativos, las disposiciones de índole civil aplicables por analogía y los principios generales de derecho y de equidad.

Las fuentes de derecho administrativo en 1873 cuando se otorgó la concesión eran las siguientes: La Instrucción para promover obras públicas de 1845. La ley de aguas de 3 de Agosto de 1866 y el Decreto ley de bases de 14 de Noviembre de 1868 no ofreciendo ningún interés el estudio de las numerosas disposiciones particulares que fueron derogadas por estas tres de caracter general.

En la Instrucción de 1845 no hay ningún artículo que ni por remota analogía pueda dar alguna luz para el esclarecimiento de la cuestión debatida. La Ley de aguas de 1866 á cuyo artículo 25 se ajustó el expediente que incoó Berasátegui al pretender la concesión, en el capítulo IX que trata de las obras de defensa contra las aguas públicas, contiene preceptos de importancia que analizaría minuciosamente si en 1873 no hubieran estado ya derogados por el Decreto

ley de bases de 14 de Noviembre de 1868; sin embargo es un elemento de juicio no despreciable el espíritu que informó las disposiciones derogadas, espíritu manifiesto en la exposición de motivos, que decía «cuando las obras proyectadas interesen á toda una comarca y la mayoría de los propietarios de esta se conformen en costearlas su acuerdo será obligatorio para todos; porque no es justo que el vituperable egoismo de algunos sirva de remora y obstáculo para su ejecución ó reciba por recompensa el beneficio gratuito de aquellos; también se autoriza la creación de sindicatos especiales para las obras de defensa á imitación de las de riego en los ríos cuyo desbordamiento las exija permanentes.»

Con arreglo á este criterio la Ley desarrolló en su articulado el principio de que cada propietario debía contribuir á las obras permanentes de defensa en proporción á las ventajas que le reputasen.

Mas como he dicho casi todos los artículos de este capítulo que sino aplicables directamente lo son por analogía fueron derogados por el Decreto ley de 1868, que no los sustituyó por otros, limitándose al tratar de las obras construídas por particulares á decir «que terminada la obra cesa la vigilancia por parte del Gobierno y queda libre el concesionario de enagenar ó explotar aquella en la forma que estime conveniente».

De suerte que y como resumen de las disposiciones vigentes al otorgarse la concesión, puede afirmarse rotundamente que la omisión en que incurrió la orden de 1873 respecto á quien debía sufragar los gastos de entretenimiento de las obras de defensa, no puede subsanarse recurriendo á preceptos terminantes del derecho entonces vigente y que lo único que pudiera servir de norma para llegar á una solución se encuentra en el capítulo IX de la Ley de aguas del 66 derogado el 68, que se inspira en los principios de la comunidad de bienes.

La evolución legislativa en las complicadas materias de obras públicas y aguas exigió la diferencia-

ción y así como en la ley de 1866 se trataba de las aguas terrestres y de las marítimas, la de 13 de Junio de 1879 solo se ocupa de aguas terrestres y la de Puertos de 7 de Mayo de 1880 de las marítimas.

También en 13 de Abril de 1877 se promulgó la Ley de obras públicas y el Reglamento para su ejecución en 6 de Julio del mismo año, debiéndose por último tener presente la Instrucción de 20 de Agosto de 1883 que trata de la tramitación de las concesiones á particulares á que se refiere el capítulo VI de la Ley de Puertos.

Estos preceptos legales hoy vigentes vinieron á sustituir los que estaban en vigor al otorgarse la concesión y así como he estudiado los de 1845, 1866 y 1868 procede hacer lo propio con los nuevos.

La Ley de obras públicas y el Reglamento nada dicen. La Ley de Puertos y la Instrucción establecen el principio de que el particular puede solicitar la construcción de obras permanentes para proteger del embate de las olas sus heredades ó edificios lo cual concuerda con el artículo 29 de la Ley de 1866 y es manifestación á mi juicio del criterio que impuso la susodicha Ley del 66; construye obras y entiendo, las conserva aquel á quien afecta la necesidad.

La Ley de aguas de 13 de Junio de 1879 reproduce con ligerísimas variaciones los artículos de la de 1866 derogados por el Decreto Ley de 1868 artículos que ya he consignado obedecen al principio de comunidad de bienes gravando á los propietarios en proporción á las ventajas que les reporte la obra; claro aparece este espíritu en el artículo 55 reproducción casi literal del 93 de la Ley del 66.

La conclusión que se deduce del estudio de las fuentes legales posteriores á las vigentes, cuando se otorgó la concesión no es distinta de la anteriormente sentada, no hay precepto alguno que resuelva terminantemente quien debe pagar los gastos de entretenimiento de las obras del encauzamiento del río Uru-mea y las disposiciones administrativas que por ana

logía son apreciables, se inspiran en los principios que rigen la comunidad de bienes según los cuales todos los propietarios interesados en la conservación de sus inmuebles que peligran si se abandonan las obras de defensa, deben atender al entretenimiento de las mismas en la proporción de los beneficios que le dejen.

Siguiendo el plan trazado, procede tratar ahora de los principios de derecho civil pertinentes al problema jurídico planteado, lo cual es necesario por no encontrar en el derecho administrativo precepto alguno taxativo que resuelva la cuestión.

Las relaciones jurídicas entre todos los actuales propietarios de los terrenos ganados al mar, tampoco aparecen reguladas por el derecho civil antiguo ni moderno; como al estudiar el derecho administrativo hay que acudir á los preceptos aplicables por analogía y estos son los comprendidos en la sección V., capítulo I, título IV, libro II del C. C. especialmente en los artículos 420 y 422 que dicen: «El dueño de un predio en que existan obras defensivas para contener el agua ó en que por la variación de su curso sea necesario construirlas de nuevo, está obligado á su elección á hacer los reparos ó construcciones necesarias ó á tolerar que sin perjuicio suyo las hagan los dueños de los predios que experimenten ó estén manifiestamente expuestos á experimentar daños» «Todos los propietarios que participen del beneficio proveniente de las obras de que tratan los dos artículos anteriores, están obligados á contribuir á los gastos de su ejecución en proporción á su interés.» Estos textos legales tienen sus precedentes en la legislación de Partidas, y claramente manifiestan el principio que resplandece también en la ley de Aguas; quien goza del beneficio debe pechar con la carga.

Concuerda el derecho administrativo con el derecho civil antiguo y moderno y no otra solución cabe buscar, pues la encontrada obedece á los inmutables principios de derecho. «Nada más justo que el que esté á lo bueno esté á lo malo.» Axioma jurídico y de

equidad natural, según el cual todos los propietarios que participen de los beneficios de las obras están obligados á contribuir á los gastos necesarios que la conservación ocasione.

Contra este aserto entiendo que no puede presentarse duda fundada y con arreglo á él hay que juzgar las Reales órdenes de 2 de Enero de 1886 y 19 de Diciembre de 1896.

¿Es propietario el Ayuntamiento de San Sebastián de parte de los terrenos ganados al mar?

Entiendo que la afirmativa se impone, pues con arreglo á la cláusula 2.^a de la O. de 1873, el concesionario de la obra venía obligado á entregar, como entregó al Ayuntamiento los terrenos necesarios para vía pública y las calles y plazas según la ley Municipal, el C. C. y las Partidas se cuentan entre las cosas públicas cuya propiedad pertenece al pueblo y el uso á todos. (Ley 9, título 28. Partida 3.^a). (1)

La entrega de los terrenos tuvo lugar el 17 de Agosto de 1885, y el entónces alcalde declaró la toma de posesión de los mismos. No solo este hecho de gran importancia ligó al Ayuntamiento con la entidad concesionaria y con los demás propietarios, otros han mediado que demuestran el deber contraído de no desentenderse de la conservación de las obras.

El informe favorable á la variación de manzanas en el proyecto primitivo, con lo cual ganaba la Ciudad algunos cientos de metros cuadrados para vía pública; el haber urbanizado la nueva barriada; el cobrar los impuestos y gravámenes que la ley autoriza; el mismo hecho innegable de que los terrenos ganados al mar y los edificios en ellos construidos se han considerado siempre no como algo separado de la Ciudad, sino como formando parte de la misma, son hechos repito que corroboran la justicia de las Reales Ordenes que motivan el presente dictamen. (2) Resplande-

(1) Véase la cláusula de la concesión en la página 29 y las consideraciones expuestas acerca de la misma en la 23 y siguientes.

(2) Véanse las consideraciones aducidas en las páginas 24 y siguientes, 49 y siguientes y 52 á 62.

ce más la equidad de las resoluciones ministeriales, si se tiene en cuenta que las declaraciones son definitivas solo en cuanto al principio de que el Ayuntamiento debe contribuir á los gastos, pero no lo son respecto á la proporción en el pago. De igual suerte es plausible el deseo de concordia que las inspira al invitar á las partes á un acuerdo conveniente siempre y hasta necesario en el caso de que se trata, pues un litigio largo y dispendioso acarrearía seguramente irreparables daños.

Los mismos propietarios de los terrenos entiendo son los principalmente interesados en una inmediata solución; de lo contrario su propiedad está amenazada y en la hipótesis desgraciada de que los embates del mar destruyeran las obras de defensa por falta de reparaciones oportunas y los inmuebles desaparecieran, sus reclamaciones serían tan tardías como ineficaces.

En conclusión: No previsto en la orden de 1873, quien debe atender á las obras que otorgaba, no habiendo texto legal que prevea el caso, y dados los principios de derecho sentados, opino que el Ayuntamiento de San Sebastián viene obligado á contribuir en parte que oportunamente habrá de apreciarse y discutirse á los citados gastos, y por tanto que las Reales Ordenes de 1886 y 1896 dan una solución equitativa al problema, por lo que no serían revocadas interponiendo contra ellas recurso contencioso administrativo.

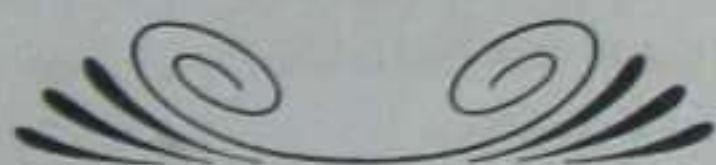
Tal es mi parecer que someto con gusto á otro más ilustrado y dado con mayor conocimiento de causa.

Madrid 12 de Marzo de 1897.—Licenciado José Canalejas y Mendez.»

Y no habiéndose conformado el Ayuntamiento con el dictamen del Sr. Canalejas, relativo á la R. O. de 19 de Diciembre de 1896, porque su declaración, reproduciendo la de 2 de Enero de

1886, siquiera hecha nada más que en principio y en términos generales, de estar obligado al sostenimiento de parte de los gastos de conservación, lesionaba sus derechos, acordó interponer contra ella el recurso contencioso administrativo, desistiendo del entablado contra la R. O. de 13 de Abril de 1896.

Es de advertir, por último, que si bien el Ayuntamiento, mirando por los intereses generales del vecindario, ha rehuído siempre toda responsabilidad en orden á la conservación de las obras del Ensanche Oriental, sin embargo, entendiendo que, sin perjuicio de consignar las debidas salvedades y protestas de suerte que se evitara todo compromiso ulterior, cabía atender de momento á los intereses particulares de una parte de nuestros convecinos, amenazada con serios peligros, ha procurado, en la única forma que le era posible y á virtud de recientes acuerdos, amparar dichos intereses sin lesión del bien público.



Terminada la presente labor en cumplimiento del acuerdo de 30 de Marzo último, solo resta manifestar que el Ayuntamiento confía en la ilustración y en la rectitud del Tribunal de lo Contencioso á cuya resolución ha sometido la grave contienda que tanto afecta a los intereses del vecindario; creyéndose también en el deber de consignar un voto de reconocimiento y gratitud á favor de todas las personas extrañas á la Corporación municipal que han defendido los derechos del pueblo, y especialmente de la Sección 4.^a de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, que con una independencia que le honra y enaltece y un criterio ilustradísimo, ha informado repetidas veces, no siendo parte el Ayuntamiento en el expediente ni gestionando su resolución favorable, en pró de los intereses públicos, inspirándose en su reconocido espíritu de rectitud y en su amor á la justicia.

Desgraciadamente, hasta ahora, la autorizada opinión de ese alto Cuerpo Consultivo, apenas ha hallado eco en otras esferas oficiales, pero es de esperar que la resolución definitiva se funde y apoye en las razonadas y solidísimas consideraciones expuestas por aquella Junta en sus luminosos dictámenes y en los sanos principios de derecho aplicables al caso, (1) para que de esta suerte llegue un día en que se dicte una solución de justicia

(1) Recientemente el Estado acaba de reconocer la doctrina á que se alude al dictarse por el Ministerio de Fomento la R. O. de 5 de Marzo último, publicada en la *Gaceta* del 18, otorgando á favor de tres peticionarios de Zarauz, una concesión de obras y terrenos ganados á la playa de dicha villa; pues si bien en la citada R. O. se adjudica la mayor parte de los aludidos terrenos á los concesionarios, para ensanche de sus jardines, se fija una zona marítimo terrestre, de seis metros de ancho, para uso y dominio público, con una escalera central y dos rampas laterales para facilitar el acceso á la playa, y perpendicularmente á esta zona, los espacios de terreno necesarios para prolongar las tres calles de la villa existentes en la actualidad, con la misma anchura que hoy tienen, facultándose además al Ayuntamiento al efecto de hacerse dueño de una pequeña superficie triangular, correspondiente al mirador de la Alhóndiga municipal, si voluntariamente acepta la participación, en cuyo caso contribuirá al importe de las obras en proporción á esta pequeña superficie. Pero á pesar de la cesión de las calles y zona de servicio público, que se hacen al Municipio de Zarauz, en la R. O. se declara, que «es obligación de los concesionarios la conservación permanente del muro de ribera y su zona marítima mientras el Estado ó el Ayuntamiento de Zarauz no se hagan cargo de ella por convenir así á los intereses generales ó locales.»

que ponga á salvo los intereses del pueblo de San Sebastián, en su inmensa mayoría identificado con el criterio que han sustentado sus Ayuntamientos, para quienes no puede darse, aún en el caso improbable de que sus justas reclamaciones no fueran atendidas, satisfacción mayor ni más legítima que la de esa penetración de aspiraciones y sentimientos, en la elevada idea de sustentar la causa del bien público, agotando todos los recursos legales para rechazar responsabilidades gravísimas y promoviendo una resolución definitiva que haciendo cesar para siempre el estado presente de incertidumbre, le ponga término en nombre de la ley y de los legítimos intereses del pueblo.



